



## **UNIVERSIDAD DE CUENCA**

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES**  
**ESCUELA DE DERECHO**

### **“LA ORALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ECUATORIANA: CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS”**

Monografía previa a la obtención del  
Título de Abogada de los Tribunales de  
Justicia de la República del Ecuador y  
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales.

**Autora:**

Daniela Fernanda Guzmán Barros

**Director:**

Doctor Julio Teodoro Verdugo Silva

Cuenca-Ecuador

Mayo 2016



## **Resumen**

Los ciudadanos que en cualquier momento se ven involucrados en un proceso judicial deben conocer cómo se van a sustanciar y resolver sus causas, facilitándose mediante el sistema oral, brindando a los usuarios mayor confianza en la administración de justicia, que desempeña un rol trascendental e importante dentro del desarrollo de una sociedad. Las partes procesales buscan que sus pretensiones se vean reflejadas en una sentencia justa, considerando al Ecuador como un estado de derechos y de justicia garantizado en nuestra Carta Magna.

Mediante esta monografía se pretende analizar la aplicación de la oralidad en el Código Orgánico General de Procesos. Revisando brevemente los antecedentes históricos: Egipto, Grecia, Roma hasta la actualidad, un análisis comparativo entre el sistema oral y escrito, pensamientos de autores a favor y en contra del sistema oral. Se analizará la legislación en el ámbito nacional haciendo referencia a la Constitución del Ecuador, al Código Orgánico General de Procesos y al Código Orgánico de la Función Judicial, considerando a los principios del debido proceso. Se plasmará la opinión de juristas y profesionales de nuestro medio. Finalizando con las conclusiones de este trabajo.

Ecuador como país, debe aprender de las experiencias pasadas y aprovecharlas adaptando la administración de justicia a las necesidades de nuestra colectividad, el sistema escrito no ha logrado solucionar satisfactoriamente los retos de la sociedad actual por ello ha sido sustituido y esperamos hayamos tomado el camino correcto.

Palabras Clave: ORALIDAD, Código Orgánico General de Procesos, AUDIENCIA PRELIMINAR, AUDIENCIA DE JUICIO. SISTEMA ORAL.



## **ABSTRACT**

Citizens who are involved in legal proceedings should have an understanding of how their cause may be resolved. The persons have the benefit of the freedom of speech, which allows parties to state hence saving time and giving the individual or individuals involved more confidence in the administration and equality of the judicial system which plays a vital role in the development of a free society. All litigants desire to have their cause considered in a fair and just manner and Ecuador is a country with a constitution that guarantees all citizens these rights.

This paper is for the purpose of analyzing the application of the freedom of speech in the COGEP. The development of this research and the historical background will be discussed in the administration of justice from Egypt, Greece, Rome in order to present, a comparison between the oral and written system. The thoughts of authors in favor and against of the freedom of speech, will be compared legislation at the national level by referring to the Constitution of Ecuador, the COGEP and the COFJ, an brief analysis of the principles of due process, as well as the opinion of the jurists and other professionals.

Ecuador as a country should take advantage of past experiences and implement changes to the judicial system that are essential to the country and individual communities. The writing system has failed to successfully meet the challenges of today's society and therefore beneficial reform is needed.

**KEY WORDS: THE FREEDOM OF SPEECH.**



## ÍNDICE DE CONTENIDO

<b>Resumen.....</b>	<b>2</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>3</b>
<b>Índice.....</b>	<b>4</b>
<b>Cláusula de derechos de autor.....</b>	<b>6</b>
<b>Cláusula de propiedad intelectual.....</b>	<b>7</b>
<b>Dedicatoria.....</b>	<b>8</b>
<b>Agradecimiento.....</b>	<b>9</b>
<b>Introducción.....</b>	<b>10</b>
<b>“LA ORALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ECUATORIANA: Código Orgánico General de Procesos COGEP” .....</b>	<b>11</b>
<b>CAPITULO I.....</b>	<b>11</b>
<b>La Oralidad.....</b>	<b>11</b>
1.1 Generalidades.....	11
1.2 Antecedentes históricos.....	12
1.3 Breve referencia al sistema oral y escrito.....	36
1.4 La Oralidad en la administración de Justicia.....	41
1.5 Características de la Oralidad en la administración de Justicia.....	44
<b>CAPITULO II.....</b>	<b>52</b>
<b>La Oralidad en el Código General de Procesos COGEP.....</b>	<b>52</b>
2.1.- Generalidades.....	52
2.2.- Antecedentes históricos del COGEP.....	53
2.3.- Estructura del COGEP.....	54
2.4.- Las vías procesales contempladas en el COGEP: Ordinario, Sumario, Monitorio y Ejecutivo, en cuyas audiencias se deberán emitir las sentencias orales. Voluntario, de Ejecución y Concursal.....	56
2.5. Análisis jurídico de la Oralidad en el Código General de Procesos.....	70



2.6.- Principio de simplificación, uniformidad, eficacia, intermediación, celeridad y economía procesal, dispositivo, de contradicción.....77

**CAPITULO III.....80**

**Análisis Comparativo.....80**

3.1 Conformidad constitucional y legal: Constitución, Código Orgánico de la Función Judicial y Código General de Procesos: ¿Similitudes o Diferencias?..82

**CAPÍTULO IV.....86**

**Análisis crítico de casos prácticos .....86**

4.1 Caso Ordinario Abreviado por Daños y Perjuicios.....96

4.1.1Criterio personal referente al caso considerado.....98

4.2 Caso de Incidente rebaja de pensión alimenticia.....99

4.2.1 Criterio personal referente al caso considerado.....104

**CAPÍTULO V.....105**

**5.1. Comentario de profesionales del Derecho respecto a la oralidad en la administración de justicia.....105**

Doctora Catalina Mendoza Eskola: Profesora Universitaria. Jueza Provincial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Cuenca.....106

Doctor José Vicente Andrade Vélez: ex Profesor Universitario, Director Provincial del Consejo de la Judicatura.....108

Doctor Jorge Morales Álvarez: Profesor Universitario y Jurista.....109

Doctor Geovanny Sacasari Aucapiña: Profesor Universitario y Abogado en libre ejercicio profesional.....110

**Conclusiones.....114**

**Bibliografía.....117**



### Cláusula de Derechos de Autor

**Daniela Fernanda Guzmán Barros**, autora de la monografía **“La oralidad en la administración de justicia ecuatoriana: Código Orgánico General de Procesos”**, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Abogada de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador y Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autora

Cuenca, 20 de mayo del 2016



.....

Daniela Fernanda Guzmán Barros  
C.C. 0106607229





### Cláusula de Propiedad Intelectual

**Daniela Fernanda Guzmán Barros**, autora de la monografía “**La oralidad en la administración de justicia ecuatoriana: Código Orgánico General de Procesos**”, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autora.

Cuenca, 20 de mayo del 2016

Daniela Fernanda Guzmán Barros  
C.C. 0106607229



## **Dedicatoria**

Al Soberano del Universo, Dios, por su amor, protección, sabiduría.

A mis padres, a quienes admiro mucho: Mónica del Carmen y Marco Fernando, por ser mi pilar fundamental, por su amor y apoyo incondicional, ejemplo de honestidad, lucha, trabajo y superación.

A José Alberto por su amor, lealtad, sinceridad, ternura y cuidado.

A mis hermanos,

Quienes llenan mi vida de alegría:

Erika, ejemplo de fortaleza y ternura.

Paola, modelo de entereza y perseverancia.

Marco Junior, perspicaz, quien es mi motivación para seguir adelante.

¡A ellos dedico la culminación de mis estudios universitarios!





## Agradecimiento

A Dios, por bendecirme con mi familia, con la vida y salud.

A mis padres: Mónica del Carmen y Marco Fernando.

A mis hermanos: Erika, Paola y Marco Junior.

A José Alberto.

A mis amistades sinceras, quienes me han enseñado que personas que no llevan mi misma sangre pueden ser como mi familia: Ana Lucía, Efraín Fernando, Loyda Mabel, Monserrath, Rosana, Belén, María Augusta, Jenny, Jeaneth, Bayron, Elvia, Lorena, Karina.

A la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca y a mis profesores universitarios, por su formación académica.

De manera especial al Doctor Teodoro Verdugo Silva, a quien admiro por su calidad humana, por su amabilidad, dedicación y tiempo invertido, así como a profesores que se han convertido en amigos, por su apoyo y sinceridad: doctor Geovanny Sacasari, doctora Catalina Mendoza, doctor Jorge Morales, doctor Pablo Cordero Díaz, doctor Vicente Andrade, doctora Susana Cárdenas, doctor Tiberio Torres, doctor Freddi Mulla, doctor Juan Peña.



## ***INTRODUCCIÓN:***

Los ciudadanos acudimos a la administración de justicia esperando una respuesta oportuna, ágil y eficaz, tanto en la protección como en la defensa de nuestros derechos cuando estos se han visto vulnerados y menoscabados sin que nos hayamos expuesto a dicha transgresión, con la esperanza de alcanzar una tutela judicial efectiva, sin embargo, nos encontramos con un panorama desalentador, ya que, el papeleo, el retardo, expedientes eternos, el exceso formalismo en el que las solemnidades son el detonante de las actuaciones y por el lento y aletargado trámite que se da a la causa, en el que no existe una relación directa con el administrador de justicia, la mayoría de veces ni siquiera hemos visto al Juez, todo se ha tramitado presentando escritos por ventanilla; los interesados ya no confían, se sienten revictimizados que prefieren muchas veces no continuar con el trámite de la causa debido al tedio, a la pérdida de tiempo y esfuerzo que significa acudir ante una administración de justicia agobiante que no cumple con las expectativas, razón por la cual con la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, las causas en materia: civil, de familia, mujer, niñez y adolescencia, laboral, inquilinato, contencioso administrativo, contencioso tributario, excepto materia constitucional y penal que tiene su procedimiento propio y específico; se van a tramitar mediante el sistema oral. Considerando que no existe un sistema puro, ya que hay actos procesales que se deberán realizar por escrito, como un mecanismo de control de la decisión judicial, así como para garantizar la seguridad jurídica; como por ejemplo: la demanda, la contestación y la sentencia.

Debido a que nos encontramos atravesando cambios dentro del modelo de la administración de justicia, se pretende dar soluciones efectivas, intentando alcanzar los beneficios de la oralidad en los procesos, sin sacrificar a la justicia, convirtiendo a la oralidad en un poderoso instrumento pero que también implica inmensos desafíos. Con la presente monografía lo que se procura es aportar al mundo del Derecho mediante el análisis de este tema tan interesante e importante, como lo es la oralidad en la tramitación de estas causas.



## **“LA ORALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ECUATORIANA: CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS COGEP”**

### **CAPITULO I**

#### **La Oralidad**

##### **1.1 Generalidades**

La Prehistoria es el período anterior a la existencia de los documentos escritos, referida a pueblos extinguidos<sup>1</sup>. Se divide a la Prehistoria Humana en Edad de Piedra, de Bronce y de Hierro; según la utilización de los materiales en la fabricación de herramientas. Se subdividió la Edad de Piedra en Paleolítico: Piedra Vieja; Mesolítico: Piedra Media y Neolítico: Piedra Nueva. Los yacimientos Neolíticos más antiguos datan del período 9.000-7.000 a.C. En el Neolítico, el hombre depredador se convierte en productor. Los grupos se van sedentarizando y habitando aldeas.

Entre las teorías que intentan explicar el origen del lenguaje, tenemos a la Teoría Onomatopéyica: expone que el lenguaje nace por la imitación de los sonidos del medio ambiente, por ejemplo, el ruido de animales o del agua; y la Teoría de las Interjecciones, que intenta demostrar que los primeros sonidos del lenguaje humano fueron justamente las interjecciones involuntarias o reflejas y las exclamaciones que la persona emitía por la influencia de sensaciones externas, las mismas que se fueron repitiendo hasta ser signos fijos, dando significado a los objetos y así aparecieron las palabras. Sin embargo, estas teorías han sido fuertemente criticadas. Para el lingüista ruso Valentín Nicoláievich Volóshoniv, no tienen fundamento porque no aclaran el uso del lenguaje como un fenómeno social, por lo que hace referencia a un contemporáneo suyo: Friedrich Engels.

---

<sup>1</sup> Las fechas no se pueden establecer examinando registros históricos o comparando los hallazgos con otros similares de fecha conocida, método que lleva el nombre de tipología. También se emplean diversas técnicas científicas. La datación por radiocarbono se basa en el hecho de que toda materia viva, la madera, absorbe pequeñas cantidades de Carbono 14 radiactivo, el cual disminuye en una proporción conocida a lo largo del tiempo una vez que la materia muere. La dendrocronología es la datación de árboles, que es mucho más precisa al basarse en los anillos de crecimiento anual de los árboles y es especialmente empleada para los períodos históricos transcurridos a partir del Imperio Romano.



Engels sostiene que:

El desarrollo del trabajo, favorecía, una fusión más estrecha de los miembros de la sociedad, ya que, gracias a él se volvieron más frecuentes los casos de ayuda recíproca, de actividad en común, y se volvió más clara la utilidad de esta actividad en común para cada miembro individual de la sociedad. Pronto estos seres humanos en formación llegaron al punto en que aparece la necesidad de decirse algo el uno al otro. La necesidad creó al órgano: la garganta no desarrollada se transformó, lenta pero inexorablemente, gracias a las modulaciones que se volvían gradualmente más fuertes, y los órganos de la boca se habituaron a pronunciar un sonido articulado detrás de otro. (Marx y Engels, 1876, p.93)

Personalmente considero que el desarrollo del lenguaje inicia cuando la persona comienza a adquirir la capacidad de razonar y se da cuenta de su existencia, por lo que, necesita expresar sus emociones y sentimientos y así poder relacionarse con los demás seres humanos, de quienes necesita para poder vivir.

Primero aparece el lenguaje oral y luego el escrito. Para el filósofo y lingüista estadounidense Bloomfield (1933) “La entrada en el diccionario de nuevas palabras muestra que la oralidad es la primera etapa dentro del proceso de evolución de una lengua”. (p.32).

## **1.2.- Antecedentes históricos de la administración de justicia**

La agricultura así como otras conquistas, producen una sociedad nueva de aldeanos quienes son el origen de las grandes ciudades y motor de futuras civilizaciones<sup>2</sup> agrarias. Entre el cuarto y tercer milenio a.C., las culturas aldeanas del Neolítico producen un conjunto de transformaciones económicas, políticas y sociales, producto de las acciones del ser humano en sociedades en un espacio y en un tiempo determinado.

---

<sup>2</sup> Se entiende por civilización a la forma particular en que los diferentes pueblos han organizado su vida en sociedad a lo largo del tiempo.



Los cambios más importantes relacionados con el desarrollo de las civilizaciones antiguas fueron: división social del trabajo, comercialización, organización de la vida en Ciudades-Estados, ejercicio de la autoridad, conformación de una religión, formulación de leyes, aparición de la escritura. De este modo se asiste al nacimiento de la historia.

Haciendo referencia a las altas culturas americanas, fueron civilizaciones urbanas organizadas en Estados e Imperios. Los Aztecas se extendieron por la zona de México Central y sus antecedentes culturales se hallan en lo que se denomina el período formativo que inicia en el año 800 a.C. En el Sur de México, Guatemala y Honduras se desarrolló la civilización Maya, mientras en el borde Pacífico Norte de Sudamérica: Ecuador, Perú y Bolivia, se desplegaba la cultura de los Incas en su máximo esplendor. La iniciación de desarrollo de la civilización en estas dos regiones fue de carácter religioso, centrándose en la construcción de templos cada vez más grandiosos y después Ciudades-Templos. En Mesoamérica se dio lugar al desarrollo de jeroglíficos para la documentación. A finales del siglo XIV los Aztecas se expandieron desde la ciudad isleña Tenochtitlán (actual ciudad de México) y conquistaron la mayor parte de Mesoamérica, construyendo el imperio más impresionante de esta región, además, fue el último Imperio Indio antes de la llegada de Hernán Cortés en los años 1519-1521. A finales del siglo XV, el poder de los Incas se extendía prácticamente por toda la zona que actualmente es nuestro país: Ecuador hasta el norte de Chile. El Imperio Inca fue también un primer y último Imperio, pues apenas se había establecido quedó destruido por las fuerzas españolas de Pizarro entre los años de 1532-1533.

Considerando a continuación un análisis de las primeras civilizaciones, reparamos en que desde sus orígenes el ser humano ha buscado cercanía con las fuentes de agua para establecerse, las orillas de los ríos fueron predilectas para los asentamientos humanos. En el Lejano Oriente: en la India los Ríos Indo y Ganges. En China: el Río Amarillo. En el Cercano Oriente: en Egipto, el Río Nilo y los Ríos: Tigris y Éufrates en la Mesopotamia asiática.



## Pueblos de Mesopotamia: 3000 a.C.

Los Sumerios: se debe a los sumerios la invención de la escritura. Fue la necesidad originada por la vida en las ciudades, lo que les llevó a crear tablillas de arcilla, en las cuales escribieron datos sobre el movimiento de las mercancías. Hacia el año 300 a.C. ya se conocen cuentas, contratos, textos históricos, religiosos, hechizos y fragmentos de Códigos Legales. Esta civilización empleó la escritura sumeria o cuneiforme<sup>3</sup>. Escribir era un arte difícil y especializado, cuyo conocimiento requirió un largo aprendizaje, solo unos pocos gozaban de este privilegio: los escribas y sacerdotes. La escritura se convirtió en una profesión que otorgó poder y una posición social de privilegio a quienes la ejercían. Con la expansión de las ciudades sumerias la administración se hizo más compleja, los jefes militares convertidos en reyes disminuyeron el poder del templo. La tierra pertenecía al Estado, siendo el rey y los sacerdotes los más grandes propietarios. Hasta la formación de los grandes imperios semíticos (acadios y asirios), la organización política se basaba en ciudades- estados, con un régimen independiente; su único lazo de unión era la cultura y el comercio por medio del trueque.

Sólo en pocas oportunidades algunos reyes unificaron y dominaron todo el conjunto de las ciudades de la región. Esta civilización poseía una escritura cuneiforme en tablas de arcilla. 1792 -1750 a.C. Hammurabi, el rey amorreo, funda un nuevo Imperio Mesopotámico con capital en Babilonia y se da el establecimiento de un Código escrito en la estela de Hammurabi. Hammurabi completó un proceso de organización militar y administrativa. Aunque su reinado duró poco tiempo tuvo una importancia extraordinaria, ya que formó un reino unificado y lo consolidó en diferentes aspectos: en lo militar, conquistó a los pueblos vecinos; en lo político centralizó el poder real en Babilonia e impuso el acadio como lengua oficial; en lo económico dispuso de la propiedad de las tierras y la repartió entre el Estado, el templo y los particulares; en lo social se conoció la primera distinción entre esclavos y hombres libres. En lo jurídico, se elaboró un cuerpo de leyes: el Código de Hammurabi o Ley del Tali3n: ojo por

---

<sup>3</sup> Significa que cada signo tenía forma de cuña, era silábica, pues cada símbolo representaba una sílaba.





ojo, diente por diente; Código escrito con castigos severos, que iban desde la mutilación de miembros hasta la pena de muerte. Por ser escrito ha permitido conocer la vida y costumbres de Mesopotamia. En esta primera etapa la política y la religión estaban íntimamente relacionadas. El gobernante, Rey o Patesi, representaba la divinidad, aunque no era considerado un dios como en Egipto. Su poder se hallaba limitado por una asamblea formada por hombres libres. El sacerdote administraba el gobierno de la ciudad, los templos eran la base económica y política de estas sociedades.

Egipto: al nordeste de África, a lo largo del río Nilo se desarrolló hacia el año 3000 a. C. siendo una de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo. Por las crecidas del río Nilo, el desierto se convirtió en tierra fértil, por lo que, las personas que habitaban en sus orillas para dominar las crecidas debían construir diques y canales de riego, de esta manera los egipcios se reunieron en una gran comunidad e hizo que las ciudades y aldeas tendieran a agruparse en pequeñas unidades administrativas denominadas nomos. Hacia el cuarto milenio a.C. había unos cuarenta y dos nomos, cada uno de ellos gobernado por un monarca, cuya autoridad y poder emanaba de un tótem. La religión tuvo un papel importante en el proceso de constitución del Estado unificado. Todo el poder se centraba en la figura del faraón, él era el Estado y al mismo tiempo se lo consideró "Orus", hijo del dios Osiris, esta divinización ayudó a configurar un Estado Teocrático<sup>4</sup>. Para conservar la pureza de sangre los faraones elegían como gran esposa o reina a una de sus hermanas, el primer hijo varón de esta unión heredaba el trono a la muerte del padre. De esta manera se formaron las dinastías, grupo especial dentro de la sociedad egipcia, separada del resto por su origen divino y cerrado por lazos sanguíneos. El faraón dictaba las leyes, las hacía aplicar y también juzgaba pero gobernaba acompañado por Visir: era la mano derecha del faraón, supervisaba los trabajos hidráulicos, las tareas agrícolas y el comercio. Los nomarcas gobernaban las provincias o nomos, eran designados por el faraón, se ocupaban del cobro de tributos. Los Escribas eran funcionarios de mucha importancia, porque conocían la escritura, secreto que les otorgaba privilegios.

---

<sup>4</sup> Palabra de origen griego que significa "gobierno del dios".



Manejaban toda la administración del reino. Los sacerdotes, se dedicaban al culto de los dioses y a las ceremonias religiosas, como en todo Estado teocrático su influencia era decisiva. A lo largo de veinticinco siglos de historia, Egipto vivió etapas de esplendor y de decadencia. El faraón estaba en la cúspide de la sociedad, por debajo se encontraba la nobleza y la poderosa clase sacerdotal que gozaban de privilegios como una justicia especial o el ejercicio de cargos de gobierno, los artesanos y comerciantes constituían una clase social intermedia, en la base de la sociedad estaban los campesinos, que eran hombres libres que trabajaban parcelas asignadas por el Estado y también las tierras del faraón, de los nobles y de los templos, pagaban tributos en especie, ayudaban a la construcción de obras públicas. Los esclavos eran comprados o prisioneros de guerra. La escritura surgió por la necesidad administrativa y contable: la preocupación de tener un registro de lo producido. La escritura jeroglífica<sup>5</sup> o sagrada, consistía en un complejo sistema de signos: pictogramas, que representaban imágenes; ideogramas, que sugerían ideas y fonogramas, representaban sonidos. El conocimiento de estos signos de difícil interpretación estaba reservado a sacerdotes y escribas, se esculpía sobre piedra o con finos cinceles sobre rollos de papiro.

Persa: en la actualidad la región está ocupada por Irán, Afganistán y Pakistán. Fue la primera civilización de la antigüedad que concretó la idea de un imperio universal. Darío, el rey organizador, dividió el imperio en veintitrés provincias o satrapías, los sátrapas eran los nobles persas que estaban al frente de una provincia, se ocupaban de la administración de justicia, los secretarios reales eran los asesores y fiscalizadores de los sátrapas, los generales estaban a cargo de los ejércitos y los inspectores, que era un cuerpo de auditores que controlaban a los gobernantes; ellos eran designados por el rey. Sólo las ciudades griegas quedaron fuera de la órbita persa. Darío intentó someterlas provocando la primera Guerra Médica, única campaña en la que

---

<sup>5</sup> Los jeroglíficos fueron descifrados en 1822 por el investigador francés Champollión, valiéndose de la famosa piedra de la roseta, en la que estaba tallado el mismo texto en tres versiones: jeroglífico, demótico y griego



fracasó, año 490 a.C., diez años más tarde, su hijo Jerjes intentó nuevamente conquistar Grecia dando origen a la segunda Guerra Médica, pero igual que su padre fracasó. Su sucesor Artajerjes, sufrió la última derrota en la tercera de estas guerras. El Imperio Persa se sostuvo aproximadamente 200 años, hasta que en año 330 a.C. fue incorporado por Alejandro Magno de Macedonia a su Imperio.

Fenicios: se establecieron en la costa de Siria, actualmente Líbano, no llegaron a construir un estado unificado, diversas ciudades-estados independientes ejercieron sucesivamente su hegemonía en la región, cada una tenía un rey cuyo poder no era absoluto, debido a que un Consejo de Ancianos formado por cien ricos mercaderes compartía las decisiones, asesorándolo en cuestiones políticas y económicas. El más valioso legado cultural de esta civilización es el alfabeto fenicio que representó una simplificación de los complicados sistemas cuneiformes de la Mesopotamia y Egipto, idearon una serie de veintidós signos, escribían de derecha a izquierda sobre madera, papiro o piedra. Su invención tuvo una gran consecuencia de carácter social, leer y escribir dejó de ser patrimonio y privilegio de un grupo, como los escribas egipcios y los sacerdotes mesopotámicos, para convertirse en una serie de letras que formaron un idioma accesible a la mayor cantidad de personas. Este alfabeto surgió como una necesidad económica y comercial ya que debían constatar el resultado de sus transacciones mercantiles. Los mercaderes lo llevaron por todo el mundo conocido y fue adaptado por los diferentes pueblos con los que tenían contacto. Un dato que me ha parecido muy interesante es que la mayor parte de los alfabetos de Asia central y Europa, tuvieron su origen en el fenicio, los griegos lo adaptaron agregándole las vocales, así fue recibido por los romanos que dieron origen al latín y a partir de allí se desprendieron las lenguas modernas como el Castellano, por lo tanto, se afirma que el alfabeto fenicio ha sido la base del abecedario actual.

Los Hebreos: los Patriarcas eran los Ancianos que guiaron a los grupos familiares y administraban justicia, dirigían los actos de guerra y oficiaban de sacerdotes. Moisés los libera del cautiverio y los conduce a la tierra prometida.



En el Monte Sinaí recibe de Jehová las leyes para la comunidad “Decálogo o Tabla de los Diez Mandamientos”.

Se organizaron en doce tribus, unidas sólo por el vínculo religioso, cada una dirigida por un jefe militar y religioso, el juez. Los principales son: Gedeón, Sansón y Samuel. Se produce la unificación de las tribus contra los filisteos bajo la jefatura de un rey. David inicia una gran ofensiva contra los filisteos y otros enemigos, logrando ampliar con sus conquistas los límites del reino. Salomón: da importancia al cumplimiento de la Justicia, construye el palacio y templo de Jerusalén, a la que convierte en capital. Con el exilio, cae el reino de Israel en poder de los asirios. Jerusalén es arrasada por Nabucodonosor II. Se produce el cautiverio del pueblo hebreo en Babilonia. Los profetas predicán la doctrina de Jehová.

En el año 70 a.C. Roma destruye Jerusalén, expulsa a los judíos que se dispersan por la región mediterránea. La composición social estaba íntimamente ligada con su religión, el núcleo de la sociedad hebrea era la familia, siendo el padre la máxima autoridad; se trataba de una organización patriarcal monogámica. Tenían un escaso número de esclavos, comprados o prisioneros de guerra, a quienes no trataban con crueldad; se los empleaba en las tareas agrícolas y domésticas. La mujer gozaba de muy pocos derechos y libertades, desde su nacimiento estaba bajo las órdenes de su padre hasta casarse, luego dependía de su esposo y al enviudar la ley hebrea le exigía contraer matrimonio con su cuñado. El adulterio en el caso de la mujer era penado con la muerte.

Grecia: es considerada como la cuna de la civilización occidental. Fue el escenario de una extraordinaria civilización, aquí se inició el pensamiento filosófico, se establecieron los pilares del arte y la ciencia; surgió el sistema democrático de gobierno. Tradicionalmente se divide la historia de Grecia en los siguientes períodos:



-Época cretense: la isla de Creta<sup>6</sup>.- El florecimiento de la civilización cretense se vio interrumpido por fuertes terremotos en el siglo XVIII a.C. que destruyeron los principales centros urbanos, después de este desastre los pobladores iniciaron la reconstrucción, hacia el año 1500 a.C. los reyes de ese palacio lograron el control de toda la isla bajo un solo Estado. Esta civilización desarrolló una unidad cultural debido al importante crecimiento de sus actividades económicas y artísticas.

Año 3.000 a.C.-2000 a.C. un rey poderoso, rodeado de un grupo privilegiado de familiares y funcionarios, administraba el Estado, impartía Justicia, dirigía la economía, así como el ejército. La población en su mayoría estaba compuesta mayoritariamente por trabajadores libres que pagaban tributo, por los servidores del rey y los esclavos. Los palacios eran construcciones de grandes proporciones con gradas, pasillos y habitaciones dispuestas en torno a un patio central donde se ejercían las funciones de gobierno.

-La civilización creto-miscénica: 2.000 a.C.-1150 a.C. la historia de Grecia comienza con la llegada de los primeros greco-parlantes, de habla griega, los griegos pertenecían a la familia de los pueblos indoeuropeos que llegaron a esta región de forma sucesiva y se unieron con las poblaciones establecidas allí anteriormente. Los recién llegados conocían el bronce e introdujeron el caballo y con la fusión de los dos pueblos se formó la lengua griega. En la época de Micenas tuvo un importante rival comercial en las costas de Asia Menor: Troya, ambas ciudades se enfrentaron por el predominio marítimo-comercial, en la legendaria “Guerra de Troya” que recogió la tradición oral y en los relatos del poeta Homero en sus obras: la Ilíada y la Odisea<sup>7</sup>.

Una civilización denominada: los dorios, arribaron hacia el año 1200 a.C. eran guerreros y conocían las armas de hierro con las que dominaron y

---

<sup>6</sup> Creta comenzó a ser conocida a principio de este siglo a partir de las excavaciones del arqueólogo inglés Athur Evans, que llamó a esta cultura minoica por el rey Minos, mítico fundador de la primera dinastía de gobernantes cretenses.

<sup>7</sup> Durante el siglo pasado el investigador Henry Schliemann tomó como guía los poemas homéricos y descubrió en Asia Menor los restos de la ciudad de Troya, además de palacios y tesoros de la ciudad de Micenas, por estas excavaciones realizadas en el año de 1870, se revalorizaron los poemas homéricos comprobando la veracidad de muchos de sus relatos.



destruyeron a la civilización micénica, se lo conoce como época Oscura porque los ostentosos e inmensos palacios, la escritura y las obras artísticas desaparecieron. Luego surgió una sociedad de carácter tribal, en la que cada una de las tribus estaba integrada por fraternidades y éstas por clanes o genos. Los gens estaban compuestos por familias descendientes de un antepasado común, lo que generaba un fuerte sentimiento de hermandad entre los genos, lo que provocaba que los que no pertenecían a ningún grupo eran considerados como extranjeros, a esta organización se la llamaba Gentilicia y se regía por la costumbre. Con el tiempo esta organización gentilicia dio lugar a una organización política con sus instituciones propias, la característica polis de la civilización clásica griega. En el fin de la época oscura, 800 a.C. comenzaron a gestarse las primeras obras literarias griegas: la *Ilíada* la *Odisea*, atribuidas al poeta Homero. El mundo homérico demuestra que en Grecia cada pequeña comunidad vivía su propia vida; entre los griegos no había un rey o un palacio que funcionara como organizador de la vida social y económica. El centro organizador era el Oikos, cuyo jefe era el Basileus, rey de autoridad limitada, cada oikos estaba formado por un pequeño grupo emparentado entre sí, había personas libres y esclavos que aseguraban su sustento, ya que, cada comunidad debía abastecerse a sí misma. Se formó un grupo de hombres que por su riqueza y prestigio se consideraban los mejores, los Aristoi. Esta aristocracia formada por los jefes y sus familias, se diferencia del resto de la población y afianzó sus privilegios controlando una de las primeras instituciones de gobierno: el Consejo de Ancianos. Sólo eran consideradas actividades nobles las vinculadas con la tierra y la guerra, ambas fueron propias de los aristoi. El comercio y la artesanía eran consideradas tareas viles o indignas, por ello las desempeñaban exclusivamente los extranjeros, a partir de entonces, la tierra, aristocracia guerrera y nobleza formaron una poderosa unidad.

En la época arcaica 1150-800 a.C. se produce el desarrollo de la polis con la expansión territorial. La polis surgió cuando varios Oikos se pusieron de acuerdo en reconocer una Autoridad superior a la de cada familia, los jefes de cada familia u Oikos comenzaron a ocuparse del gobierno, reunidos en una





polis. Con el pasar de tiempo los problemas generales de la ciudad se fueron diferenciando de los problemas particulares de cada familia, así se diferenció la autoridad política de la autoridad familiar.

Las características sobresalientes son: el rey era dueño del poder, pero no un dios. Había sido encargado por Zeus de ejercer la Autoridad. Los miembros de la ciudad eran los polítés o ciudadanos, se identificaban por la comunidad de origen y tenía el derecho de participar en la Asamblea. El asentamiento urbano estaba al pie de la Acrópolis<sup>8</sup>. Había tierras de propiedad individual y el campo comunal, que servía para el pastoreo. En lo económico podía abastecerse a sí misma. Los asuntos de la polis se trataban en discusiones públicas en el ágora o plaza y las decisiones se tomaban por votación de los ciudadanos.

Las condiciones externas favorecían esta organización: el poderío persa estaba naciendo y Egipto se encontraba en decadencia, el pueblo griego pudo vivir con este régimen propio que tanto favorecía el crecimiento artístico e intelectual, sin ser absorbido por ningún poder mayor. Las polis griegas se diferencian por el grado de participación de los ciudadanos en:

Aristocráticas: el gobierno estaba en manos de unos pocos, los ciudadanos más ricos.

Democráticos: la totalidad de los ciudadanos, reunidos en la Asamblea, administraba los asuntos de la ciudad.

La colonización griega se da cuando se finaliza la época oscura, los griegos emprendieron un movimiento migratorio que se prolongó hasta fines del siglo VI a.C. las migraciones se producían mediante un traslado de población desde una ciudad madre o metrópoli, la colonia fundada en el exterior era una comunidad independiente política y económicamente de su ciudad fundadora, aunque mantenía vínculos comerciales, religiosos y culturales con ella.

---

<sup>8</sup> El lugar donde estaban los edificios públicos, se elegía un sitio elevado para ello, pues era refugio en caso de peligro.



Época Clásica: 800 a.C. – 500 a.C. en el siglo VI a.C. representó el período de mayor esplendor de la cultura griega, los hechos más destacados fueron: La consolidación de las polis, el enfrentamiento entre Grecia y el Imperio Persa (Guerras Médicas), el siglo de Oro de Pericles que era un gobernante ateniense y la lucha por la hegemonía entre Esparta y Atenas (Guerras del Peloponeso).

Atenas fue el camino hacia la democracia, la polis ateniense fue fundada por lo jonios, en la región Ática en Grecia Central. Inicialmente hacia el siglo VIII a.C. Atenas estuvo gobernada por un rey con funciones limitadas por los nobles terratenientes que formaban el Areópago<sup>9</sup> en la actualidad correspondería a un Órgano Judicial. El Areópago tenía amplios poderes, especialmente en la administración de Justicia. La sociedad ateniense estaba integrada por los Eupátridas: nobles propietarios de las tierras, se pertenecía a este sector por nacimiento, formaron un grupo selecto que gozaba de los derechos políticos y ocupaba los cargos administrativos. Lucharon contra la monarquía hasta disminuir totalmente sus poderes. El resto de la comunidad lo integraba el pueblo o demos, es decir, los artesanos, agricultores y soldados. No tenían derechos políticos, vivían del producto de su trabajo y soportaban las cargas usureras de los Eupátridas, la imposibilidad de poder pagar sus deudas los convertía en esclavos. A fines del siglo VII a.C. los eupátridas terminaron con la monarquía y establecieron un régimen aristocrático<sup>10</sup>. El Areópago se mantuvo reservándose incluso la designación de los demás magistrados, los Arcontes, el Arcontado estaba integrado por nueve funcionarios elegidos anualmente por el Areópago que se encargaba de administrar el gobierno de la polis. El régimen aristocrático sobrevivió por muchos años, pero subyacían en él profundos problemas sociales, las reivindicaciones del pueblo que no tenían leyes ni instituciones que lo protegieran dinamizaron la vida política ateniense y

---

<sup>9</sup> Según la leyenda, se llamaba así porque Ares había sido juzgado por los dioses y exonerado de ser ajusticiado por dar muerte al hijo de Poseidón, que había violado a una hija de Ares.

<sup>10</sup> Aristocracia se traduce como el gobierno de los mejores.



con el tiempo produjeron grandes transformaciones. Entre los primeros reformistas se mencionan:

Dracón 621 a.C. con reformas jurídicas, recopilación de las leyes antiguas, primer código escrito, las faltas se castigan severamente, muchas veces con la muerte. Los eupátridas pierden el monopolio legislativo, la costumbre de hacer justicia por sus manos. La responsabilidad del delito cae sólo en la persona y no en su familia.

Solón 594 a.C. cambios en lo social, con estas reformas la aristocracia pierde el monopolio político, pero los campesinos no logran solucionar el problema de falta de tierras. Se da la abolición de la esclavitud por deudas, se reforma el derecho de herencia, se divide a la población según su riqueza y no su origen. Quedan libres numerosos esclavos, la partición igualitaria entre los herederos, desaparecen los latifundios, se da mayor participación ciudadana, se benefician los comerciantes.

En lo político la fundación de la Bulé o Consejo de los Cuatrocientos, integrado por los miembros de las tres clases sociales superiores. Redactaba las leyes. La Asamblea Popular o Ecclesia estaba integrada por ciudadanos de todas las clases, se ocupaba de asuntos de interés general y de la administración de justicia a través de Tribunales populares.

Tribunal de los Heliastas. En medio de la inestabilidad política se destacó un noble con inclinaciones populares: Pisístrato, sobrino de Solón, formó una guardia armada y se apoderó del gobierno, se inició así una Tiranía<sup>11</sup>, gobernaba sin derecho, sin tener en cuenta a las otras instituciones, asumía todo el poder político. Pisístrato se declaró defensor del pueblo, respetó las reformas de Solón, pero agregó otras, como en lo social por ejemplo: la construcción de grandes obras públicas: bibliotecas o templos, así como de dar trabajo a los desocupados. Al morir Pisístrato se desataron en Atenas una serie de guerras civiles en los años 527-510 a.C., la nobleza intentó imponerse nuevamente pero triunfó el Partido Popular con su dirigente Clístenes: quien a

---

<sup>11</sup> En Grecia se llamó tirano a quien llegaba al poder no por vía legal sino por medio de la astucia o violencia.



pesar de su origen noble favoreció al pueblo ateniense y logró dar estabilidad política y social a Atenas. A partir de sus reformas finalizó el régimen aristocrático y comenzó el tiempo de la democracia. Clístenes forma diez tribus con representantes de cada demos, se acaban las pretensiones aristocráticas. Reforma en las instituciones políticas. Desaparece el concepto de pertenencia por origen o por riqueza.

En la democracia ateniense, de acuerdo con las reformas de Clístenes, las instituciones políticas de Atenas quedaron integradas de la siguiente forma: Asamblea Popular o Ecclesia: integrada por ciudadanos mayores de 20 años, elección de funcionarios, promulgación de leyes, declaración de guerra o paz. El Bulé o Consejo de los Quinientos: Cincuenta ciudadanos mayores de treinta años que representaban a cada una de las diez tribus. Su función era preparar los proyectos de ley para presentarlos a la Asamblea. Los Arcontes o estrategas: diez ciudadanos, uno por cada tribu, dirección de operaciones militares, manejo de la política exterior. Los Tribunales Populares o de los Heliastas: seiscientos ciudadanos mayores de treinta años, nombrados anualmente. Supremo organismo de Justicia. El Areópago: ciudadanos que habían sido arcontes o estrategas: resolución de delitos de sangre no presentados ante los Tribunales populares.

A Clístenes se le debe la institución del Ostracismo: medida de castigo o precaución, este mecanismo pretendía evitar que se atente contra la estabilidad política, podía ser aplicado una sola vez al año, se decidía en la Asamblea, allí cada ciudadano escribía el nombre de del condenado en un caparazón de ostra denominado "ostrakón", la persona que era nombrada por más de la cuarta parte de la Asamblea, tenía diez días para abandonar la ciudad y no podía regresar hasta transcurridos diez años. , esta medida no implicaba la pérdida de bienes, ni la deshonra, pero sí la exclusión de la comunidad política de cualquier otra polis, donde se lo consideraba extranjero.

La característica propia y original de la democracia ateniense era la participación directa de los ciudadanos en el gobierno. La Asamblea tenía la autoridad absoluta, todos los ciudadanos tenían derecho a tomar parte de las



decisiones; no existía jerarquización entre sus integrantes, se reunían semanalmente en la plaza o ágora para discutir temas relacionados con el gobierno de la ciudad, a pesar de que se habla de una democracia directa, la mayor parte de la población de Ática: esclavos y extranjeros, quedaban excluidos de este sistema.

La educación ateniense comenzaba cuando los niños y niñas cumplían siete años, desde esa edad acudían a la escuela acompañados por un esclavo o pedagogo que los asistía en sus lecciones. La enseñanza procuraba la armonía entre el cuerpo y el espíritu, basándose en el conocimiento de las artes, tales como: la poesía, la música, etc. y también el desarrollo físico mediante la práctica de ejercicios de gimnasia.

Cuando las mujeres cumplían catorce años residían en la casa de sus padres esperando ser prometidas en matrimonio. Los varones continuaban su instrucción, cuando cumplían dieciocho años, los jóvenes recibían adiestramiento militar. Al cumplir veinte años eran considerados mayores de edad y ya podían contraer matrimonio. La mujer estaba excluida de la participación política y social.

El siglo de oro ateniense: en el siglo V a.C. también se llamó el siglo de Pericles, quien fue un hábil político, introdujo una serie de reformas que consolidaron la democracia, eliminó las atribuciones del Areópago y se las otorgó a la Bulé y al Tribunal, de esta manera se fortalecieron a las instituciones en las que participaba el demos, que eran los ciudadanos. Estableció el pago de una retribución para los funcionarios.

La crisis de la polis: hacia finales del siglo V a. C. Atenas se había convertido en una de las polis más ricas y poderosas de Grecia, lo que generó rivalidades con el Imperio Persa y cambió la relación con las otras polis a las que se buscó unificar bajo su dominio; este predominio de la ciudad de Atenas debilitó entre los griegos el ideal de la polis. La crisis final se produjo cuando Macedonia, una polis del Norte de Grecia, sometió a la totalidad del mundo griego sobre su poder. Las guerras médicas 493-449 a.C. que fueron el



enfrentamiento entre griegos y persas (medos), la causa de esta guerra fue el malestar político y económico provocado en las colonias griegas de Asia menor por los Persas, razón por la cual los colonos organizaron una rebelión solicitando la ayuda de las Ciudades madres de Grecia Continental, como consecuencia de la guerra se detuvo la expansión del Imperio Persa. Atenas se convirtió en una potencia naval y comenzó su expansión, Atenas igualó a Esparta en poderío militar, la liga de Delos pretendía unificar toda Grecia bajo su dominio, aumento la rivalidad entre Atenas y Esparta lo que terminaría fatalmente en las guerras de Peloponeso durante los años 431-404 a.C., fue un conflicto fratricida que culminó con desolación, la causa de esta lucha fue referente a los opuestos intereses económicos y políticos. Estas guerras tuvieron su origen en el incidente protagonizado entre Corcira que era aliada de Atenas y Corinto, se disputaban el dominio de la colonia de Epidamos, los espartanos solicitaron ayuda a Persa, Esparta triunfó, Atenas fue destruida. Como consecuencia de esta guerra el Imperialismo Ateniense terminó, se impusieron regímenes políticos oligárquicos, las colonias Griegas de Asia menor pasaron a dominio Persa. La hegemonía Espartana solo duró nueve años, Atenas se reconstruyó, convirtiéndose en centro intelectual y comercial de Grecia

Época Helenística: 500 a. C- 146 a.C. En el año 359 a.C. un rey llamado Felipe II organizó un poderoso ejército de mercenarios<sup>12</sup>. En el año 338 a.C. se logró dominar a toda Grecia en la batalla de Queronea, lo que puso fin a la libertad política griega. Felipe II fue asesinado antes de comenzar su campaña para destruir al imperio Persa. Su hijo y sucesor Alejandro Magno, El Grande, conocido así por haber constituido el más grande Imperio hasta ese momento. Fue educado por Aristóteles, Alejandro Magno construyó un Imperio universal en once años, enfrentándose a los Persas, con éxito conquistó Siria y Palestina se apoderó de puertos Fenicios y entro en Jerusalén, conquistó Egipto, allí se lo recibió como un salvador, fue nombrado faraón y fundó la ciudad de Alejandría, actualmente es el Cairo. En el año 331 a. C. se puso fin al Imperio Persa, luego extendió su conquista hacia la India en el año 327, Alejandro

---

<sup>12</sup> Eran los soldados extranjeros que combatían por una paga.





murió cuando tenía treinta y tres años, el imperio de Alejandro Magno fue una monarquía absoluta de tipo oriental, con una política de tolerancia con los pueblos conquistados fomentando los matrimonios mixtos. Su aspiración fue unir la civilización oriental con la occidental por medio de un intercambio de intereses protegidos por un gran estado, al no dejar herederos su imperio se desmoronó y terminó dividiéndose en varios estados.

Grecia en el año 146 a.C. cayó en poder de Roma.

Egipto bajo el reinado de Cleopatra, pasó a ser provincia romana en el año 40 a.C.

El intercambio cultural entre oriente y occidente dio origen a una nueva cultura la Helenística: producto de la combinación de elementos griegos con orientales.

ROMA fue el Estado más poderosos del mundo antiguo. La historia de Roma puede dividirse en tres períodos:

-Monarquía: año 756 a.C. según la leyenda de Roma ésta fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, hijos de la princesa Rea Silvia y del dios Marte, su abuelo era el héroe troyano: Numitor. Al nacer fueron arrojados en una canasta al río Tíber por el rey usurpador, su tío Amulio. Fueron rescatados por una loba y el pastor Fausto. Cuando fueron adultos conocieron su historia y decidieron vengarse de su tío, devolviéndole el reino a su abuelo, quien en señal de agradecimiento les regaló unas tierras a orillas del río Tíber. Los hermanos compitieron por el trono del nuevo reino, Rómulo triunfó y mató a su hermano, así nació Roma. Tomando en consideración esta leyenda podemos obtener datos interesantes: marca el origen de Roma vinculado a Troya, además Grecia confirma que Roma tendría un destino militar al ser los gemelos hijos del dios Marte. De acuerdo con las investigaciones el origen de Roma data del año 756 a.C., como una ciudad de casco urbano denominada la urbe y de instituciones propias del Estado: las civitas. La sociedad romana se dividía en diferentes sectores:



**Patricios:** que era la aristocracia romana, eran los únicos considerados ciudadanos, con derecho al voto, a ocupar cargos políticos y religiosos, eran los dueños de las tierras. Se los consideraba como descendientes de los fundadores de Roma. Las familias patricias se agrupaban en Gens: que eran los descendientes de un mismo antepasado. Diez Gens formaban una Curia, de carácter religioso y más tarde político.

**Cientes:** no pertenecían a ningún gens, eran extranjeros y pobres que se ponían bajo la protección de un patricio que les brindaba ayuda económica y los defendía ante la Justicia y participaban en las ceremonias religiosas. A cambio el cliente lo acompañaba a la guerra y lo ayudaba en algunos trabajos.

**Plebeyos:** eran los extranjeros, refugiados, clientes enemistados con los patricios. Eran libres pero no tenían derechos políticos ni religiosos, hasta las reformas de la República, tampoco podían integrar el ejército ni casarse con patricios.

**Esclavos:** conformado por los prisioneros de guerra o deudores insolventes, se dedicaban a las tareas serviles; carecían de libertad y de derechos. A medida que Roma fue conquistando territorios se incrementó notablemente su número.

-En sus inicios Roma fue una ciudad-Estado gobernada por la Monarquía: el rey era elegido por los Comicios: su cargo era vitalicio, a su muerte el poder volvía al Estado.

**Senado:** estaba integrado por los Pater Familia, quienes eran los jefes de las familias patricias, asesoraban al rey en sus actividades.

**Comicios Curiados:** Integrados por los ciudadanos, eran diez y se encargaban de votar leyes, declarar la guerra y elegir al rey.

-República: año 509 a.C. tuvo carácter aristocrático a pesar de las reformas sociales que permitieron el acceso a los plebeyos a ciertas magistraturas. La organización política estuvo conformada por cuerpos colegiados, de elección anual.



El Senado: estaba integrado por trecientos miembros vitalicios, sus miembros eran sólo patricios que habían ocupado antes otra magistratura, se ocupaban de los asuntos militares, política exterior, asuntos económicos y del culto público. Era el dueño del poder.

Asambleas o Comicios: se distinguieron tres tipos:

Comicios Curiados: subsistieron desde la monarquía, estaban integrados por los pater familia reunidos en curias, después de reformas, tuvieron funciones puramente ceremoniales, como otorgarle a los magistrados una vez elegidos el derecho a acceder al poder o imperio.

Comicios Centuriados: integrados por los generales del ejército o centuriones que eran los jefes patricios de las centurias, era una compañía de cien hombres. Se reunían en el campo de Marte en las afueras de Roma para evitar rebeliones. Sus funciones eran electorales: elegían a los cónsules y magistrados superiores; funciones legislativas: aprobar o rechazar las leyes, declarar la guerra o la paz; funciones judiciales: recibir las apelaciones de los condenados a muerte. El cónsul presidía los comicios, leía las listas de los candidatos; todas las decisiones de los Comicios debían ser ratificadas por el Senado.

Comicios por Tribus: integradas por los plebeyos, derogaban las leyes que no los favorecían. Sus Resoluciones o Plebiscitos no tuvieron el valor de leyes, se tomaban como sugerencias para favorecer a la comunidad.

Dentro de las Magistraturas tenemos a:

Los Cónsules, eran dos, quienes duraban un año desempeñando sus funciones, eran elegidos por los Comicios Centuriados y confirmados por el Senado, no se dividía el poder, cada uno tenía la totalidad de las atribuciones, aunque sí podía oponerse a las decisiones del otro, este derecho se denominó: Intercessio. Manejaban la administración, dirigían el ejército y resolvían cuestiones judiciales de suma importancia.



Los Cuestores: cobraban los impuestos y calculaban los gastos de guerra y del Estado.

Los Pretores: dos magistrados encargados de administrar justicia. El Pretor Urbano, atendía los problemas presentados por los ciudadanos romanos; el Pretor Peregrino se ocupaba de los problemas presentados por los extranjeros. Duraban un año en el cargo; aplicaban las leyes pero no podían anularlas o crear nuevas leyes.

Los Censores: eran dos funcionarios elegidos para desempeñar sus funciones durante cinco años, realizaban el censo a la población con el objetivo de reclutar centurias y cobrar impuestos. Además, indagaban en la vida de los votantes para determinar quiénes eran dignos de ocupar las magistraturas.

Los Ediles se ocupaban del control económico y urbanístico de las ciudades como la construcción de puentes, caminos, edificios públicos.

Los Tribunos de la Plebe, estaba integrada por plebeyos, proponían proyectos de ley y convocaban a los Comicios por Tribus, eran los representantes y defensores de la plebe, tenían carácter sagrado, cualquier atentado a su persona era castigado con la muerte, gozaban del derecho de veto, ejercían el derecho de asilo: sus casas servían de refugio a los plebeyos perseguidos.

Dictador: reemplazaba a los cónsules en época de grave peligro exterior o interior; no podía permanecer más de seis meses en sus funciones.

Para desempeñar los cargos en estas magistraturas se establecieron edades mínimas, por ejemplo, para ocupar el escalón inferior se requería haber cumplido mínimo veintiocho años de edad.

Los magistrados no cobraban por su labor, razón por la que el sistema aristocrático se mantenía porque sólo podían gobernar quienes poseían fortuna.

La importancia de los plebeyos creció en Roma, no tenían una participación política, eran explotados; así iniciaron una serie de reclamos



marcados por un largo período de guerras civiles que iniciaron en el año 494 a.C. cuando miles de plebeyos se amotinaron con armas en una colina cercana a Roma negándose a trabajar y a prestar servicios en el ejército hasta que se les concediera algunos derechos, así obtuvieron la Ley Valeria, con la que se abolió la esclavitud por deudas y se crearon dos organismos de gobierno que les permitía participar en las decisiones: los Comicios por Tribus y el Tribunal.

Debido a la expansión romana se produjo el empobrecimiento de los pequeños propietarios rurales, con el crecimiento de la población urbana surgió una masa de desocupados. Aumentó el número de esclavos y presos de guerra y debido a la modificación de las costumbres: la austeridad romana cedió al lujo. Con el debilitamiento de las instituciones republicanas, el poder se concentró en el Senado, integrado por los nobilitas u oligarquía terrateniente.

La crisis de la República se produjo desde fines del siglo III a.C. algunos magistrados propusieron reformas para mejorar la situación de los plebeyos; los hermanos Tiberio y Cayo Graco, tribunos de la plebe, fueron los más sobresalientes, deseaban acabar con el gobierno oligárquico. Ambos murieron asesinados.

Imperio Romano: desde el año 30 a.C. - 476 d.C.

La Roma Imperial. En el Alto Imperio se controló el poder creando un régimen imperial. Imponiendo entre los romanos el culto imperial que consistía en la divinización de la figura imperial. El Emperador se reservó el gobierno directo sobre las imperiales situadas en la frontera, se le atribuyeron al Emperador todas las magistraturas de forma vitalicia y el cargo de Pontífice Máximo. Reunía la totalidad del poder político, militar, judicial y religioso.

Los dos primeros siglos de la era cristiana se caracterizaron por la concentración de poder unipersonal.

El siglo III d.C. en los años 193-284, se produjo una fuerte crisis, debido a que el imperio Romano experimentó profundos cambios políticos y económicos. Roma fue perdiendo su autoridad como centro del Imperio y las



provincias adquirieron cada vez un mayor poder con lo que se provocaron conflictos que debilitaron la figura imperial. Debido a esto los pueblos germánicos cruzaron las fronteras y ocuparon grandes territorios y los saquearon.

Los elementos que Roma creó para asegurar su unidad se volvieron en su contra debido a la difusión de una nueva religión: el cristianismo.

En el Bajo Imperio en los años 284-476 d.C. con la finalidad de controlar este caos y expulsar a los invasores germánicos fue necesario un gobierno fuerte y centralizado; así apareció el Dominus que significa señor sagrado o dueño absoluto; a este nuevo sistema de gobierno se lo llamó Dominado.

En el año 284 gobernó el general Diocleciano, quien intentó reorganizar al imperio como una monarquía oriental que consistía en que el Emperador tenía carácter divino y la población no tenía participación política, así inicia la Tetrarquía que era el gobierno de los cuatro, para ello, se dividió al Imperio Romano en dos partes: al frente de cada una estaba un Augusto o Emperador, para evitar problemas sucesorios se atribuyó el poder militar a dos Césares nombrados por los Augustos, que les sucederían pasados veinte años de su reinado.

El Imperio Romano de Oriente estableció en Nicomedia (Asia Menor) la capital de su gobierno, mientras en el Imperio Romano de Occidente la capital fue Milán y su augusto fue Maximiliano.

En el año 323 Constantino quien era hijo del César de Occidente, quedó como único gobernante después de diecisiete años de lucha por el poder. Reunificó el Imperio y estableció su capital en la antigua colonia griega de Bizancio, a la que denominó "Constantinopla". Para administrar de mejor manera dividió el Imperio en cuatro prefecturas dependientes del Emperador: Oriente, Galia, Illiria e Italia. Se aseguró la tolerancia religiosa y la libertad de culto.





Después de la muerte de Constantino en el año 337 d.C. en el año 395 d.C. el Emperador Teodosio intentó restaurar el Estado e instauró como religión oficial al cristianismo, antes de morir dispuso en su testamento la división del Imperio entre sus dos hijos: Occidente: Roma, en el año 476 d.C. Odoacro destituyó al Emperador y se proclamó Rey de Italia. En el Oriente: Constantinopla, con el reinado de Arcadio, el Imperio subsistió mil años más como monarquía oriental.

Durante el siglo IV d.C. se aceleró el proceso de disolución del Imperio Romano debido a la ruina del comercio, decadencia de la vida urbana, anarquía militar, la crisis de la antigua religión, difusión del cristianismo, la falta de soldados, carencia de dinero, decaimiento de la fuerza de trabajo y las constantes invasiones contribuyeron a la caída del Imperio Romano de Occidente; de esta manera se asiste al fin de la Edad Antigua.

En la Edad Media al hablar de Estados Nacionales, esto no implica la existencia del concepto moderno de nacionalidad, sino más bien con relación a la figura del Príncipe y no de la Patria.

La organización estatal se basaba en el poder unipersonal del príncipe, se produjo un desarrollo burocrático por lo que, los cargos públicos fueron una fuente de ascenso social así como de riqueza.

Tiempos Modernos<sup>13</sup>: la economía fomentó la aparición de banqueros y comerciantes que dieron origen a una nueva clase social: los burgueses.

En el siglo XV, se produce una radical modificación del pensamiento humano que se centró en el estudio del hombre como ser racional, superior a las demás especies y también se tenía el afán de conocer la naturaleza. Este cambio de mentalidad colectiva permitió el apareamiento de una corriente

---

<sup>13</sup> Cabe recalcar que según los historiadores no existe un acontecimiento único y exacto que nos permita diferenciar entre el Medio Evo y la Modernidad, por lo que las fechas posibles son: 1450 la invención de la Imprenta por Juan Gutemberg, 1492 la llegada de Cristóbal Colón a América. La historiografía fijó el comienzo de la Edad Moderna en 1453 cuando los turcos toman la ciudad de Constantinopla lo que significó la caída del Imperio Romano de Oriente o Bizancio.



literaria llamada Humanismo, por estar referida al hombre. Se provocó una renovación cultural conocida como Renacimiento, referido al arte y a la ciencia.

Los conocimientos tuvieron un grandioso desarrollo.<sup>14</sup>

En lo político fracasa la concepción unitarista vigente en la Edad Media, como fue el establecimiento y consolidación de la República Cristiana, basada en la autoridad del Pontífice y del Emperador.

En el siglo XV, el continente europeo se fragmentó políticamente por la diferenciación climática y la diversidad geográfica que dificultó la creación de un poder unificado a nivel continental, lo que favoreció a la existencia de poderes descentralizados como: reinos, clanes, confederaciones, señoríos, etc.

Europa logró el liderazgo mundial.

Se iniciaron así la monarquías bajo una forma autoritaria y nacional, los reyes europeos del siglo XV inauguran una nueva etapa de organización del Estado, la consecuencia mediata es la aparición del Estado moderno. Se uniforma la vida del país, se implantan instituciones y órganos de gobierno comunes a todas las regiones, se promulgan leyes generales para todo el país y se fomentan los ideales colectivos, por ello, no se debe hablar de monarquía absoluta sino autoritaria. Los monarcas fueron intransigentes en mantener su autoridad pero buscaban garantizar a la misma mediante una justicia eficaz y completa, manteniendo el bien universal, dando paso al uso de la libertad de los individuos, se derrumba la estructura feudal.

Se origina así el concepto de Nación que en la actualidad se entiende como Soberanía.

Los primeros elementos unificadores de cada población serían la lengua y más tarde la literatura.

---

<sup>14</sup> Especialmente en el mundo de la física por la utilización del sistema experimental, el mayor adelanto se dio en la óptica, sobre todo con la invención de los lentes, más tarde el telescopio, luego el microscopio, se da desarrollo en la medicina descubriendo la circulación de la sangre, estudio anatómico del cuerpo humano, disección de los cadáveres humanos para su examen y estudio.



En tiempo de guerra se produce la revolución de la pólvora con el uso de los cañones tanto en la tierra como en el mar, pero en tiempo de paz las relaciones con los demás Estados Nacionales se formaron a través de la actividad diplomática y jurídica.

La ola reformadora en Europa en el Siglo XVIII tuvo su origen en los intelectuales franceses, se buscaba la renovación y el cambio pero la oposición de la reina y la nobleza, así como del Parlamento, no lo permitieron; lo que, conllevó a convocar a los Estados Generales en el año de 1789, cuyas fuertes deliberaciones llevaron a la conformación de la Asamblea Nacional. Dentro de los ideales de la Revolución estaba convertir a la Monarquía en Constitucional con la participación de representantes populares. Abolir los privilegios señoriales mediante la igualdad de todos los ciudadanos y la Equidad Impositiva: que es el pago de impuestos proporcionales a la riqueza individual.

Las etapas de la Revolución fueron la Asamblea Nacional durante los años 1789-1791, período en el que se dicta la Constitución; desde octubre de 1791 a septiembre de 1792 con la Monarquía Constitucional se produce un desacuerdo entre la Asamblea Legislativa y el Rey, se da una alianza secreta entre Luis XVI con Prusia y Austria. Posteriormente se da la declaración de guerra por parte de Francia a Austria, suspensión del Rey y disolución de la Asamblea Legislativa. Con la Convención nacional de 1792-1804 se da la abolición de Monarquía y se proclama la República, se condena a muerte a Luis XVI. Una Coalición europea formada por: Austria, Prusia, Inglaterra, Holanda, Nápoles, España y Portugal contra Francia, estas Coaliciones sufrieron sucesivas derrotas a manos de Napoleón Bonaparte, hasta que Inglaterra quedó sola firmando en 1802 la paz de Amiens, por la que, devolvió la mayor parte de sus conquistas. Debido a los logros de Napoleón, Francia se convirtió en un verdadero Estado Moderno, semejante a su rival inglesa. En lo internacional significó la difusión y toma de consciencia de los derechos naturales del hombre.



### 1.3.- Breve referencia al sistema oral y escrito

Tal como acertadamente lo manifiesta el célebre jurista uruguayo Eduardo Couture: “El proceso debe ser un proceso idóneo para el ejercicio de los derechos: lo suficientemente ágil como para no agotar el desaliento al actor y lo suficientemente seguro como para no angustiar por restricción al demandado”.

Según Petit Eugene (1989), en el proceso civil el sistema oral se comenzó a utilizar desde aquellas etapas históricas en las cuales la escritura ofrecía dificultades y no estaba al alcance de todos; los procedimientos eran de escasa complicación y no existía la necesidad de conservar las actuaciones para un nuevo examen por no existir la apelación.

En la antigua Grecia las sesiones eran públicas y orales, no podían durar más de una jornada. El juez no tenía la obligación de conocer las leyes porque éstas debían ser expuestas por las partes intervinientes, el Juez podía dar muestras de incapacidad en la interpretación de la ley. Las penas no estaban rígidamente determinadas. El Juez podía juzgar según su consciencia y cuando las penas e indemnizaciones no estaban definidas, el acusador y el acusado proponían una pena públicamente y el Juez debía elegir entre una de las dos sin poder graduarla, razón por la que ante una misma conducta el Juez podía resolver entre aplicar la pena capital o un castigo insignificante. El tiempo que podía durar la defensa estaba limitado y marcado por un reloj de agua hecho de arcilla denominado Clepsidra. La sentencia se pronunciaba mediante los votos emitidos por medio de guijarros que eran negros en caso de que el fallo sea condenatorio y blancos si era absolutorio. La figura de Procurador se reconocía sólo para representar a las mujeres. El Acusado y el Acusador debían comparecer personalmente y si no sentían capaces de preparar sus discursos acudían ante los logógrafos quienes eran filósofos, no eran abogados porque no eran responsables del éxito o fracaso dentro de la causa y se mantenían en el anonimato.



El sorteo de los miembros de cada Tribunal ya se practicaba en Grecia, lo que se pretendía con el sorteo era evitar la corrupción y el soborno, los magistrados eran elegidos por el sistema de las habas: consistía en poner habas negras y blancas y según el haba que sacase tenía o no acceso al cargo, si obtenía una blanca si, caso contrario no accedía al cargo. Existía la denominada Kleroterion, que era una máquina de piedra o madera que sorteaba los puestos en los tribunales, se mezclaban bolas blancas en igual número al de jueces disponibles que debían elegir ese día, con negras hasta completar el número de filas totales. Se echaban por un costado de la máquina y caían, cada bola negra eliminaba a una fila de candidatos, mientras las blancas los confirmaban.

Los Heliastas rendían un juramento al desempeñar sus funciones: “Juro por Zeus, por Poseidón y Deméter, a quienes ruego que si violo mis juramentos envíen castigo sobre mí y mi familia, pero también les suplico que me concedan toda clase de prosperidades si cumplo mis promesas”.

En Roma se utilizó una oralidad compuesta por gestos y palabras presentados ante el Magistrado, se denominaba como Procedimiento de las Acciones de Ley. Cabe mencionar que el Procedimiento Formulario Romano también se desarrollaba de manera oral pero las decisiones eran registradas por escrito.

Como tan claramente el Doctor Jorge Morales Álvarez en su Libro “Lecciones de Derecho Civil Romano” (2011) explica las tres fases históricas del Sistema Procesal Romano: la de la Legis Acciones, la del Proceso Formulario y la del Proceso Extraordinario. En las dos primeras encontramos una separación del proceso en dos instancias, la primera instancia se desarrollaba ante un Magistrado y se llamaba *In Iure*; la segunda instancia se desarrollaba ante un Tribunal de ciudadanos seleccionados o ante un Juez Privado y se llamaba *Apud Iudicem* que significa “delante del juez”. En la primera instancia se determinaba lo jurídico del caso; en la segunda, se ofrecían, se admitía y se desahogaban pruebas, después de lo cual la Partes presentaban sus alegatos y el Juez dictaba sentencia. En el período formulario se vigilaba que se



planteara correctamente el problema jurídico ante el árbitro iudex privatus imponiéndole un programa de actuación y prescribiendo la sentencia que se debía dictar, según la investigación de los hechos. (p.187-188). El Derecho Extraordinario se abolió el sistema de la división del proceso en dos etapas, facultando al Magistrado a que él mismo finalizara el proceso y pronunciara el fallo, se lo llamó Extraordinario porque al principio era excepcional, sin embargo, llegó a ser el procedimiento general y ordinario de la última época del derecho procesal, también se constituyó el sistema de “Recursus” contra las sentencias, la más importante de estos recursos fue la “Apellatio” mediante la cual se solicitaba la “Intercessio” de los magistrados superiores con el fin de que se corrija las violaciones del derecho que se hayan producido en la sentencia.

En la Edad Media el formalismo procesal era excesivo, a partir del siglo XII con el apareamiento de los Tribunales Eclesiásticos y con el proceso canónico se crea un régimen jurídico que se extiende por muchos países europeos. Eran actuaciones escritas, secretas, con fases cerradas, regido por la tarifa legal en la valoración de la prueba. El demandado debía probar que era inocente y la confesión obtenida bajo tortura eximía de toda prueba.

Realizando una breve comparación entre el sistema oral y el escrito, pues más adelante analizaremos el sistema oral, nos referimos al primero como un sistema vivo, oído, censurable, transparente, inmediato, rápido. Para muchos autores defensores de la oralidad como veremos posteriormente, el sistema oral es considerado como infinitamente superior al escrito, asegurando la inmediación, ya que, existe un contacto directo entre los sujetos procesales y los medios de prueba.

En el proceso escrito hay muchas etapas en las que no está presente la Jueza y se delegan muchas funciones, es el secretario o ayudante judicial quien se encargaba del proceso, algunas veces ni se conocía personalmente al Juez. Con el sistema escrito se hace notoria la acumulación física de los actos procesales y como consecuencia la acumulación de expedientes. Mediante el sistema escrito hay una sobredimensión de lo formal, incurriéndose en el



formalismo procesal y aún en el ritualismo. Se produce una dispersión de los actos y falta de inmediación en la recepción de la prueba. Propicia conductas dilatorias. Se torna en un proceso lento, formal y burocrático, el Juez es mero espectador, falta de publicidad. Excesivas diligencias escritas, mera legalidad, principio dispositivo, principio de exhaustividad, dilación procesal, congestión procesal, actuaciones sin inmediación. En el proceso escrito existe la proliferación de dilatorias maliciosas e incidentes. El sistema escrito es muerto, repetitivo, mecánico, marcado por un trajín de papeles. Mediato, indirecto, lento. El sistema escrito se presta para abusos con incidentalismos exagerados que vulneran a la Justicia.

En el sistema procesal ecuatoriano, para poner un ejemplo, una abogada solicita que se señale fecha y hora para que se lleve a cabo una audiencia de conciliación en un divorcio causal, debe dirigirse a las oficinas de la Función Judicial, entregar el escrito, acompañando una copia, pedir la fe de presentación, esperar que el documento se coloque en el expediente y sea trasladado al despacho del señor juez, esperar ser notificado; todo esto se convierte en muchas gestiones para un solo acto procesal. Lo que busca el nuevo sistema procesal es que en la misma audiencia de juzgamiento sin pedir por escrito, se practique la prueba y las partes procesales se vean obligadas a hacer uso de esta etapa y lleguen a la audiencia con todas las pruebas que fueron debidamente anunciadas.

Dentro de las fortalezas del sistema oral podemos considerar que está condicionado por la exigencia de mayor sencillez en los actos procesales, es menos formalista. Diligencias verbales, garantías de derechos, principio de oficiosidad, principio de concentración, principio de celeridad, descongestionamiento procesal, principio de inmediación. Se publicita más el proceso, es mucho más rápido, como las actuaciones se concentran se reducen las citaciones, notificaciones entre otras diligencias, lo que permite la inmediación y una relación directa de las partes procesales con el juez, por lo tanto se puede generar una profundización sobre cualquier tema que no esté del todo claro.





La Jueza se convierte en el directora del proceso, ya que, se da una participación más activa, mejor calidad de la información respecto del objeto del proceso. Se suprimen incidentes, se sanea el proceso y los que se proponen se resuelven en la misma audiencia. Se logra llegar a más acuerdos y transacciones, se fortalece el diálogo y la posibilidad de llegar a acuerdos. Las partes procesales también desempeñan un rol trascendental porque deben comparecer a las audiencias o diligencias dispuestas, interviniendo directa y activamente, manejando el caso concreto con responsabilidad. Los abogados y abogadas ejercen un rol esencial, lo que requiere una preparación profesional técnica y jurídica, asesorando adecuadamente, controlando la calidad de la prueba, manejándose con ética profesional, basándose en el principio de lealtad procesal y de buena fe, asistiendo con puntualidad a las audiencias considerando que ya no existe la hora judicial, de los diez minutos de espera, tal como lo expresa el Dr. Gustavo Jalkh (2015): “no se puede institucionalizar la impuntualidad”. Opino que es una acertada decisión, es muy necesario un cambio de cultura.

Este modelo procura aprovechar las técnicas y herramientas jurídicas y tecnológicas, un sistema basado en audiencias como eje de trabajo de las unidades judiciales, así como la oralidad y la inmediatez como método de trabajo en audiencias, siendo el Juez garantista del debido proceso, así como el director de la causa. Tal como lo dijo el sabio filósofo griego Sócrates: “Cuatro características corresponden al Juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”.

Lo formula Sócrates en Critón en el diálogo de Platón: *“¿Crees que puede persistir, sin arruinarse, aquella Ciudad en que las decisiones judiciales nada pueden y en que los particulares las anulen y depongan a su señorío?”*. Por lo tanto, debemos considerar a la Justicia como un servicio esencial para la sociedad, garantizando la publicidad y la transparencia de las actuaciones tanto del administrador de justicia, como de las partes procesales, así como de todos quienes intervengan dentro de una causa: peritos, secretarios, ayudantes



judiciales, testigos, entre otros. Asegurando la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así como la seguridad jurídica, en la toma de decisiones.

Me ha parecido muy interesante considerar un estudio realizado por el Banco Mundial, Doing Business 2010, al realizar una comparación respecto al tiempo de reclamación del cumplimiento forzoso de contrato, tomado desde la presentación de la pretensión hasta el cumplimiento o pago efectivo, en países con sistema escrito se obtuvo como tiempo promedio 1080 días existiendo casos de más de 1700 días; mientras que en países con sistema oral el tiempo promedio fue de 300 días.

Debemos considerar un aspecto muy importante: los principios, en este caso concreto la oralidad, por sí sola no asegura ningún resultado, ya que, debe ser un medio para que se logre alcanzar el fin que es la Justicia.

#### **1.4.-La Oralidad en la administración de Justicia**

Según la teoría de las inteligencias múltiples<sup>15</sup>, la Inteligencia lingüística no sólo abarca a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas de comunicarse como la escritura, la gestualidad, etc. Los abogados hemos desarrollado esta inteligencia lingüística a diferencia de otras profesiones, por ejemplo: un economista, quien ha desarrollado una inteligencia lógico matemática. Por lo que en el campo del derecho el lenguaje que mejor se adapta es el oral. A los seres humanos nos atrae dar a conocer nuestras opiniones, muchas veces sin que estas sean reflexivas ni meditadas; también en nuestra cultura se ha desvalorizado el valor de la palabra, razón por la cual a menudo el lenguaje oral se ha visto desprestigiado y descalificado frente a un lenguaje escrito. Depende mucho la preparación de la abogada y abogado, que deben expresar lo que corresponde a la realidad de los hechos y dar a conocer claramente lo que exige. Para los abogados, el lenguaje es un instrumento de trabajo, porque mediante el lenguaje se puede influir en el sentido deseado.

---

<sup>15</sup> Fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, propuso que la vida humana requiere el desarrollo de varios tipos de inteligencia.



La filosofía analítica ha comenzado a reevaluar la palabra lo que equivale a comprender que así como es verdad que no se habla si no se piensa, también es cierto que no se piensa eficazmente si no se habla.

El jurista brasileño Sérgio Cruz Arenhart (2008) menciona sobre el principio de la oralidad lo siguiente:

La doctrina ha tratado de demostrar que este principio no se puede resumir, solamente, en la predominancia de la forma oral en la práctica de los actos procesales. De hecho, aunque ese elemento sea el más evidente de la caracterización del principio de la oralidad, su incidencia debe hacer nacer otras características, que son, generalmente, más importantes para la formación de un proceso efectivo, tempestivo y adecuado.

Se alude así, a la oralidad en sentido amplio y a la oralidad en sentido estricto<sup>16</sup>. La primera noción equivale a aquel sentido amplio y sencillo, indicado anteriormente, de pensar la oralidad apenas en relación a la forma de la práctica del acto procesal. Así, todo proceso en el que prevalezca, como instrumento de realización de los actos, la forma oral debe ser caracterizado como un proceso oral. Sin embargo, mucho más interesante es el segundo sentido atribuido a ese principio. En efecto, pensar en la oralidad-inmediación es pensar en un complejo de sub principios que deben estar presentes cuando se examina un proceso oral.

Para el jurista italiano: Giuseppe Chiovenda (1927)

Cuando se piensa en proceso oral se pretende el contacto directo del magistrado con las partes y con la prueba del proceso, a fin de permitir la solución más adecuada y apuración más precisa de los hechos de la causa. Por ello, examinar la oralidad bajo el prisma también de la inmediación, es reconocer que el proceso, al mismo tiempo que se desarrolla predominantemente por la vía oral, debe observar los principios de la convicción racional del juez, de la inmediatez, de la publicidad, de la concentración y del incremento de los poderes instructores del juez, además de tantos otros que son consecuencia de los mismos. (p. 152)

---

<sup>16</sup> También es llamada oralidad-inmediación.



Trocker (1974) refiere:

De hecho, es evidente que el principal interés en tornar un proceso predominantemente oral es permitir no solamente la simplicidad en la forma del acto procesal, sino, sobre todo, el perfeccionamiento de la instrucción de la causa. La oralidad, vista desde este prisma, democratiza el proceso, ya que impone a quien juzga el contacto directo con las partes y el diálogo entre los mismos. Además, permite una mejor averiguación de los hechos, ya que el juez tendrá una percepción más próxima de la prueba y de sus matices. Como consecuencia, posibilita la elaboración de decisión más de acuerdo con la realidad del caso concreto, ya que esa proximidad de las partes y del hecho le permite al magistrado refinar su conclusión.

Aunque el proceso oral puro tenga la característica de ausencia de documentación, esta no es la forma por la cual este principio normalmente se expresa en el Derecho Contemporáneo.

El proceso oral puede y debe ser documentado, esta es la orientación de la doctrina más autorizada que siempre defendió la prevalencia del principio de la oralidad. Esta característica evidencia el carácter democrático de los procesos orales, debido a que si un proceso fuera puramente oral y no se guardara ningún registro se tendería fácilmente al arbitrio, ya que, no habría la posibilidad de control de esa decisión judicial, tampoco sería posible valorar la comprensión de la prueba por parte del Juez, violentando la garantía de motivación de la decisión judicial y violentando también el principio de doble conforme. El proceso oral debe ser documentado sin que se desnaturalice su esencia.

La caracterización de la oralidad debe ser analizada desde el aspecto formal: el proceso se desarrolla predominantemente oral, aunque se registre ya sea por escrito o mediante sistemas informáticos; y desde el aspecto sustancial por la prevalencia de los principios de inmediatez, de la convicción racional, de la concentración, entre otros.



Algunos prestigiosos y reconocidos juristas nacionales dan a conocer su punto de vista respecto a este tema:

Washington Baca Bartelotti (2005)

Emitidos a viva voz los fundamentos de la postulación del actor, sus pruebas, deducciones, alegatos y respondidos a viva voz los antagonismos del demandado para destruir las pretensiones del que le arrastra el juicio, sus pruebas, deducciones, alegatos, expresados sin intermediarios y en presencia de litigantes, juzgador, testigos, dentro de un tiempo prudencial apto para permitir y garantizar el más amplio derecho del ataque y defensa, sin demorar el fallo, todo en un proceso reunido, nos acerca más al acierto y a la oportunidad para hacer justicia... La cultura oral debe ser el camino para que aparezca una justicia, que efectivamente satisfaga las necesidades de la vida. (p.55).

Según Galeas:

El Sistema Procesal Oral representa una nueva concepción de la Administración de Justicia, porque considera que las resoluciones judiciales que resuelven el caso concreto, en cualquier materia jurídica, solamente pueden ser justas cuando se han hecho efectivas las garantías del Debido Proceso... porque sin el conocimiento de éstas, el Sistema Procesal Oral es incomprensible (p. 27)

El Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh Röben (2016), señala que: “El COGEP es la herramienta de transformación procesal más importante de la vida republicana del Ecuador, y que por ello es necesario socializarla con todos los operadores de justicia, a nivel nacional”.

### **1.5.-Características de la Oralidad en la administración de Justicia**

El lenguaje oral tiene sus características peculiares: se ejecuta en presencia del destinatario. Es más concreto que el escrito. Está más cerca de alcanzar la satisfacción de lo que se desea o necesita. Es el principal, históricamente el primero, mientras el escrito constituye una prolongación



artificial de las posibilidades comunicativas del lenguaje. Tiene múltiples ventajas respecto del escrito.

Entre las principales características de la oralidad tenemos:

- Todos los actos procesales, al menos los fundamentales, deben ejecutarse en presencia del juzgador y de las partes. Teniendo el lenguaje oral, la particularidad de ser utilizado sin intermediarios, esta virtuosidad se la emplea directamente, de frente, cara a cara, inmediatamente.

- Exige la presencia de todos los que intervienen en el juzgamiento: juzgadores, defensores, partes procesales, testigos, peritos, secretarios, etc. Esto permite asumir responsabilidades de los participantes, someter al análisis directo e inmediato sus afirmaciones o negaciones, pruebas, contrapruebas, peritajes, informes, alegatos, etc.

- Aquello que parece un defecto censurable de la oralidad, en la administración de justicia, se convierte en la más importante virtud: economía del tiempo y proximidad en el espacio. En virtud de lo primero no se puede dilatar el trámite y hacerle interminable; no se puede abusar de la oralidad para hacer lo que permite el lenguaje escrito: transferir actos procesales fuera de la jurisdicción del juzgador, receptar y dirigir diligencias sin la presencia de éste. Esto sin duda es lo más importante de la oralidad.

- Se consolida el proceso impidiendo que los numerosos y distintos actos procesales se sucedan con intervalos largos o que un mismo acto procesal se suspenda para continuar luego de semanas o meses. Hay continuidad en el tiempo. En el procedimiento escrito para pasar de un acto procesal a otro puede demorar meses y a veces años. Para citar un ejemplo, para pasar de audiencia a prueba se debe reclamar varias veces por la desesperante demora. Interrumpida una inspección o una audiencia se demora meses en reinstalarla.

- Las impugnaciones, ampliaciones, apelaciones, aclaraciones, no caben en la forma y modo como ocurre en el procedimiento escrito.



- La oralidad permite reunir en uno o en poquísimos actos lo que en el escrito se separa artificialmente contrariando la naturaleza propia de un proceso. Además le da a la causa vitalidad, vivencia, oportunidad.

- La concentración unida a la vivacidad en el desarrollo de la audiencia de juzgamiento motiva a los involucrados a buscar la verdad.

- Condicionado por la exigencia de mayor sencillez en los actos procesales, menos formalista.

- Es mucho más rápido que el sistema escrito.

- Se amplía la publicidad del proceso.

- Al concentrarse las actuaciones se reducen las notificaciones, citaciones y otras diligencias

#### **1.4.- Impugnadores y defensores de la oralidad**

Es pertinente analizar cada una de las posiciones frente a este tema, para ello he considerado la opinión tanto de los defensores de la oralidad en la administración de justicia, así como los impugnadores:

Para el autor ecuatoriano Jorge Vicente Paladines (2015):

La posibilidad de esgrimir una motivación y argumentación jurídica para una mejor decisión es mayor si el registro de este tipo de actos se lo hace a través de la redacción de un documento. Así, la idea de oralizar no significa de manera alguna verbalizar cada rincón del procedimiento judicial, sino proyectar espacios o escenarios estratégicos sin negar el gran potencial o contribución que tiene la toma de decisiones a partir de formas escritas. De esta manera, la oralidad serviría como un parámetro para transparentar el despacho judicial a la vez de acercarlo más a la ciudadanía. , sin eliminar el gran aporte que tiene consigo el desarrollo detenido y consensuado de un fallo jurídico documental, tal como lo han hecho y lo siguen haciendo los grandes tribunales de justicia del mundo como la Supreme Court de los Estados Unidos, el Bundesverfassungsgericht de Alemania, el Tribunal Europeo de





Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, la Corte Constitucional de Colombia y demás corporaciones cuyas decisiones fundamentales y finales se dan a conocer estratégicamente por escrito. Por el contrario, si se invierte el sentido de proyectar a la oralidad como un todo, entonces no se estaría universalizando su aporte metodológico para el proceso sino totalizando al método por encima del fin.

A criterio del ecuatoriano Jorge Vicente Paladines, quien al analizar el tema de la oralidad en nuestro país repara en los siguientes argumentos:

-La oralidad no es sinónimo de modernización de las reformas judiciales en América Latina, el proceso oral no es un invento de la modernidad ni de la evolución de las nuevas técnicas de litigación procesal, ya que, su herencia data de miles de años atrás, quizá incluso desde antes que se comiencen a registrar los procesos por escrito.

-Menciona que es muy común encontrar modelos orales de actuación procesal con andamiajes inquisitivos o pre modernos, tal como ocurre en la cultura jurídica anglosajona, a través de países como Sudáfrica, Reino Unido o Estados Unidos, mediante la implementación de estrados de madera iguales a los contruidos por el Tribunal de la Santa Inquisición hace cientos de años atrás; el uso de togas y pelucas así como el mantenimiento del protocolo en el lenguaje de litigación a través de expresiones medievales como “Su Señoría” o la iniciación sacramental del juicio mediante la juramentación de las partes ante la Biblia.

-El autor ecuatoriano repara en que a simple vista, ninguna de estas prácticas merece llamarse como moderna; sin embargo, estas costumbres procesales están imbricadas en el desarrollo de la oralidad del mundo anglosajón, pues las tradiciones y demás formas jurídicas sí importan al momento de administrar justicia, negando la noción que la oralidad tienda a reducir las formas, toda vez que ella en sí mismo es una forma jurídica dependiente en muchos casos de la tradición de los pueblos.



-Descarta la relación entre su implementación con la tecnología, debido a que se pueden mantener modernos sistemas y nuevas tecnologías de gestión judicial en modelos aún escriturarios, sin que ello afecte la producción y productividad y, aún más, la calidad de las decisiones judiciales, parámetro que por cierto es poco tomado en cuenta al momento de plantearse una reforma judicial.

-Menciona que la economía procesal se ha convertido en el principio más importante cuando se habla de reformas al aparato judicial.

-Reflexiona que la oralidad no es más que un medio para la transformación de la justicia supeditada a saber si se resuelven más o menos causas.

-Indica que las reformas judiciales de América Latina, lamentablemente, han tomado como principal parámetro la medición del funcionamiento de los modelos de gestión a partir de la mayor o menor productividad del despacho, dejando por fuera o de manera coyuntural problemas mucho más importantes como la independencia judicial, la calidad de la argumentación en sus decisiones, las nuevas competencias para la capacitación y formación burocrática, la implementación de tecnologías de la información y comunicación, los modelos de atención ciudadana y de composición del despacho judicial, la arquitectura e ingeniería judicial bajo claros lineamientos de distribución territorial, entre otros.

-Considera Vicente Paladines que así, el simple dato sobre la saturación o represamiento de causas se presenta como suficiente para determinar una reforma judicial, emergiendo entonces como única solución la economía procesal.

-Expresa que la econometría jurídica se puede aplicar tanto a sistemas procesales orales como escriturarios. Por ello, el aumento o la reducción de burocracia judicial depende en gran medida de la gestión procesal y no necesariamente del modelo oral.



-Comenta que al elevarse una técnica de gestión procesal como principio de justicia correríamos el riesgo de asociarlas bajo un mismo rango; en consecuencia, podría ser más importante la economía procesal que el debido proceso, generando con ello la idea que el derecho a recurrir atentaría a la oralidad y velocidad procesal.

-Manifiesta que en otras palabras: lo que son sencillas técnicas para un mejor servicio de la administración justicia no deben elevarse como principios del Derecho procesal. Al parecer la idea de “justicia que tarda no es justicia” se imprime como un óptimo que podría incluso marginar los derechos fundamentales, olvidando seguramente también que “justicia con decisiones apresuradas tampoco lo es”.

-Insiste en que la oralidad no es sólo un lenguaje para la burocracia judicial. La oralidad se activa como un código de comunicación entre quienes realizan el quehacer judicial, manifestando fonéticamente lo que antes se decía por escrito. En este sentido menciona Paladines que, la oralidad se articula como una transformación lingüística corporal del argot de la conversación judicial, sin necesidad que los usuarios entiendan del momento procesal que los requiere. La retórica de litigación procesal sigue siendo ininteligible para el usuario que poco encuentra de común o familiar expresiones como “proceso monitorio”, “recurso de apelación”, “medidas preliminares preparatorias”, “prueba material”, “reconvención”, “costas procesales”, entre otras. La retórica judicial se reconstituye nuevamente como un lenguaje de poder, muy parecido al que tienen otras profesiones que requieren de un mayor vínculo con la ciudadanía tales como la medicina. Las personas usuarias del proceso en general pueden ser cosificadas en las audiencias, es decir, usadas como un instrumento judicial de requerimiento corporal para que éstas se lleven a efecto. Lo que se diga oralmente en las audiencias sólo es competencia de la burocracia entendida en derecho, recayendo en el excluyente rol que tenemos las y los abogados. Sin embargo, la oralidad debe ser usada principalmente como un medio para acercar la justicia a quienes necesitan de ella, haciendo que las etapas, instancias, diligencias y actuaciones procesales sean



mínimamente inteligibles para las personas que posiblemente tengan que correr con sus consecuencias. No se debe tergiversar esta reflexión exigiendo que las personas usuarias se conviertan de la noche a la mañana en juristas, sino que comprendan mínimamente de lo que se dice y se hace en su defensa. Es así que aparecen como nuevas técnicas de litigación oral dudosos estudios que carecen de sustento empírico en el plano del derecho, la psicología o la economía. Estas “técnicas” se alojan desde análisis decisionistas que no hacen más que usar esotéricamente un discurso psico jurídico para la reforma judicial del modelo de gestión. Tales recomendaciones son: “no hable más de siete minutos porque de lo contrario se va a cansar al juez”; “remítase exclusivamente a los hechos y no necesariamente al derecho ni sus dogmas”; “mire a los ojos a los testigos y hágalo poner nervioso”; “no hable mucho”; etc. La oralidad tiende a someterse a los modelos estándar del comportamiento judicial, donde la posibilidad de llevar la razón al juez depende del manual de gestión y no de los derechos fundamentales, es decir de la forma y no del contenido.

-Enfatiza que la oralidad tiende a presentarse en forma de manuales, protocolos o resoluciones judiciales, que no hacen más que imprimir en un formulario oral lo que antes se decía por escrito. Sin duda que esto atenta a su espíritu que, por el contrario, está muy anclado en la necesidad de aproximar los términos judiciales a sus usuarios, cambiando su posición de actores periféricos del proceso a sujetos centrales del derecho procesal general.

-Paladines concluye: “La oralidad no es el fin, es sólo un camino”. La oralidad no es supremamente mejor que lo escriturario en la vida judicial. Existen espacios y momentos del proceso que siendo orales pueden llevar consigo una precipitada y arbitraria decisión judicial. Por tanto, se produce una mayor garantía de concretar mejores decisiones a través de documentos detenidos y consensuados en su elaboración, pues al final la oralidad siendo un mecanismo para reducir o evitar las formas jurídicas no deja de ser por sí misma una formalidad hablada. No obstante, por ahora ha sido el modelo de gestión el principal objeto de la reforma y no la oralidad. Por esta razón la



reforma judicial en el COGEP no es un qué sino simplemente un cómo, sin ninguna transformación conceptual de la justicia, pues lo que hay no es más que un cambio normativo del despacho judicial por materias.

Otro autor: Mario Oderigo, ha sido el más abierto y duro opositor a la oralidad en el procedimiento. Quienes opinan como él sostienen que sus mayores debilidades pueden llevar a decisiones precipitadas, puede producir sorpresas irreparables, que habría de cuidarse de aquellos abogados formados en las escuelas de oradores que pondrían en evidencia a quienes no son y administrativamente exigiría mayor número de personal para el servicio de la función judicial.

El mismo Oderigo, a pesar de ser el más severo crítico de la oralidad, no puede dejar de reconocer que cuesta menos hablar que escribir, que la palabra tiene mayor capacidad expresiva, las personas se entienden mejor cuando conversan que cuando escriben, hay liberalidad de signos fonéticos y signos accesorios: las contracciones fisonómicas, los ademanes, las reacciones, los movimientos corporales, sean voluntarios o involuntarios, convencionales o libres que enriquecen a la persona; hay una evidente economía de esfuerzo y tiempo; reducción de costos; se da una versión más completa del pensamiento; se dice más cosas cuando se habla que cuando se escribe; se abunda en detalles que ayudan a la comprensión; es más completa la transmisión del conocimiento formado en la mente del emisor; es más eficaz el diálogo.

La escrituración de la vida jurídica, sin embargo, es compleja y dinámica a la vez que milenaria. La instauración de modelos procesales a través de audiencias en Europa, sobre todo continental y Asia no ha eliminado la posibilidad de mantener la organización escrituraria del proceso.

Desde la antropología jurídica se han denotado las debilidades, pero a su vez las fortalezas de contener socialmente las intervenciones y decisiones judiciales en documentos (Hull, 2012), con lo cual no solo hay un mayor registro de la causa al menos en sus partes fundamentales como: sentencias,



autos definitivos, etc., sino también que se evita la improvisación que podría devenir de una precipitada decisión judicial oral.

En nuestro país, Ecuador, el Presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh exhorta a la Corte Nacional de Justicia a sumarse a este proceso (2016) “El desafío es enorme en todos los ámbitos, desde los modelos de gestión y la infraestructura adecuada hasta, fundamentalmente, los temas de capacitación y el cambio de cultura litigiosa en el país: hábitos y costumbres vinculados con un sistema escrito”.

El doctor Mauro Andino, Presidente de la Comisión de Justicia (2016) “Sin lugar a dudas, la vigencia del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) es un hito en la historia republicana del Ecuador, en lo que tiene que ver con la transformación de la administración de justicia en el país. No se trata de un cambio de ley o de una renovación de normas. Es un cambio en el sistema de litigación procesal en toda el área jurisprudencial no penal.”

## **CAPITULO II**

### **La oralidad en el Código Orgánico General de Procesos “COGEP”.**

#### **2.1.- Generalidades**

La Asamblea Nacional discutió y aprobó el “PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS”, en primer debate el 21 y 26 de agosto de 2014; en segundo debate el 10, 12 y 26 de marzo de 2015. En sesión de 12 de mayo de 2015, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial presentada por el Presidente de la República Rafael Correa Delgado y se publicó en el Registro Oficial<sup>17</sup>.

Néstor Árbito Chica, vocal del Consejo de la Judicatura, indica que para hablar del Código Orgánico General de Procesos “COGEP”, hay que ubicarlo dentro de un entorno cronológico y constitucional. La Constitución del año 1998 disponía que toda la tramitación, sustanciación y etapas de los procesos se llevaran a través de la oralidad y eso propició la reforma penal del año 2000;

---

<sup>17</sup> Información obtenida del Registro Oficial Registro Nº 506 -- Viernes 22 de mayo de 2015



sin embargo, todas las materias no penales, tales como el Derecho Civil, Contencioso Administrativo, Contencioso Tributario, seguirían tramitándose en el sistema escrito y en los temas de familia y de lo laboral se incluyeron, dentro de la primera instancia, en una etapa de audiencia. Esto no quiere decir que contar con una audiencia sea contar con la oralidad en todo sentido.

En el 2008, la Constitución ratificó la disposición del año de 1998 y actualmente, se ve la necesidad de cumplir la disposición constitucional. Hubieron algunos esfuerzos para elaborar cierta normativa, por ejemplo: “Projusticia” trabajó en un Código de Procedimiento Civil Oral, que puede considerarse un antecedente a este. El Consejo de la Judicatura (CJ) y la Corte Nacional de Justicia (CNJ) presentaron el proyecto de ley que propuso la oralidad procesal en todas las materias no penales a la Asamblea Nacional, para su análisis, discusión, socialización y aprobación.

## **2.2.- Antecedentes históricos del COGEP**

Para Lovato (1957) antes y después de 1835 se expidieron leyes con diversas denominaciones que normaron el “Enjuiciamiento Civil” en el Ecuador. Sin embargo, la historia del derecho ecuatoriano reconoce como primer Código de Procedimiento Civil al que se promulgó con el título de Código de Enjuiciamientos en Materia Civil, expedido en 1869, por la Asamblea Nacional Constituyente. El Código de Enjuiciamientos en Materia Civil de 1869 tenía dos secciones: la primera: De la jurisdicción civil, de las personas que la ejercen y de los que intervienen en los juicios, parte que a su vez se subdividía en dos títulos: el inicial: De la jurisdicción y el fuero y el restante: De los jueces, de los asesores, del actor y del reo, de los abogados, de los defensores públicos, de los procuradores, de los secretarios relatores, de los escribanos, de los alguaciles, de los peritos y de los intérpretes. La segunda sección trataba sobre: Los juicios, dividiéndose en tres especies: De los juicios en general; De la sustanciación de los juicios y De las disposiciones comunes. Diez años después, en 1879, fue sustituido por el Código de Enjuiciamientos en Materia Civil. En el Código de 1890, por primera vez, se dividió el proceso civil de la organización judicial, al emitirse la Ley Orgánica del Poder Judicial.





La denominación Código de Procedimiento Civil, vigente desde 1938, se empezó a utilizar en el cuerpo legal expedido con ese título, bajo la administración del General Alberto Enríquez Gallo.

La Disposición Transitoria Vigésima Séptima de la Constitución de 1998 ordenó la implementación de la oralidad en la sustanciación de los procesos, para cuyo efecto, el Congreso Nacional debía reformar las leyes vigentes o crear nuevos instrumentos normativos, en un plazo de cuatro años. Estas modificaciones se efectuaron en algunas materias, siendo uno de los pendientes el procedimiento civil.

En el año 2009, con el Código Orgánico de la Función Judicial, se evidenció un verdadero avance en el desarrollo de principios que permiten hacer del proceso judicial un medio para la realización de la justicia.

El 12 de julio de 2005, la Función Legislativa expidió la Cuarta Codificación del Código de Procedimiento Civil que, con algunas reformas.

Adicionalmente, lo que norma el Código son los procesos, es decir, la sucesión de actos dirigidos a la aplicación del Derecho a un caso concreto. Diccionario Jurídico Espasa (1995) (p. 802).

Se dice sobre el proceso en la Enciclopedia Jurídica Omeba (1976):

Es el instrumento necesario y esencial para que la función jurisdiccional se realice, toda vez que no es posible concebir la aplicación del Derecho por virtud de los órganos estatales pre instituidos, sin que le haya precedido un proceso regular y válidamente realizado. Los actos que las o los juzgadores y las partes realizan, en la iniciación, desarrollo y extinción del mismo tienen carácter jurídico porque están pre ordenados por la ley instrumental. (p. 292).

### **2.3.- Estructura del Código Orgánico General de Procesos.**

En cuanto al diseño del Código Orgánico General de Procesos, el instrumento propone cinco Libros: I. Normas Generales, II. Actividad Procesal, III. Disposiciones Comunes a todos los Procesos, IV. De los Procesos y V. Ejecución.



A esta estructura se suman otros aspectos:

a) El sistema de gestión que haga efectiva la propuesta legislativa, cuyo contenido está dirigido a incorporar a la normatividad las herramientas provenientes de las tecnologías de la información y de la comunicación.

b) El Consejo de la Judicatura ha ideado e implementado un modelo de gestión de los órganos jurisdiccionales, que resulta prioritario para perfeccionar un esquema normativo, a través de mecanismos financieros, operativos, de talento humano y de mitigación de riesgos, que garanticen al país los resultados esperados.

c) La imperativa distinción entre funciones de los juzgadores frente a las atribuciones de los servidores públicos de apoyo o auxiliares, que deben proceder en el orden administrativo, debidamente capacitados, dentro de un marco de gestión flexible, que se adapte a las necesidades de la administración de justicia. Esto permitirá que la actividad de quienes deben impartir justicia no se encuentre distorsionada y confundida a causa de aspectos ajenos a la responsabilidad del juzgador.

d) Las regulaciones normativas apuntan a identificar, impregnar y consolidar valores institucionales propios, diferentes de aquellas que lamentablemente han contribuido a desacreditar a la administración de justicia. En esta línea, la publicidad y la transparencia en las actuaciones judiciales, junto a la rendición de cuentas, serán las credenciales del nuevo sistema de administración de justicia. Contrarresta por tanto la litigiosidad superflua, temeraria o basada en la deslealtad procesal y promoviendo en contrario sensu la vigencia de la observancia de la buena fe, el trato justo y la progresiva solución alternativa de conflictos, como mecanismos válidos para sustentar un clima favorable para el desarrollo de acuerdos, obligaciones, negocios e inversiones que permitan dinamizar y diversificar la economía de nuestro país.

e) La calidad del servicio público que se ofrezca a la ciudadanía empata directamente con la propuesta normativa. Todo el texto provoca una acción articulada y eficiente que se sitúe en la dimensión de las expectativas



ciudadanas, que requieren justicia para resolver las controversias y vivir en un ambiente de paz social.

f) En cuanto a la evaluación de los servidores judiciales, el sistema de administración de justicia debe tener parámetros para medir la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas, así como para conocer y verificar la conducta y profesionalización de los servidores públicos. Es indispensable que la aplicación de las normas procesales dignifique a todos los intervinientes de un proceso.

En suma, las directrices de la reforma normativa se fundamentan en la dinámica de acercar la ciencia del Derecho a la ciudadanía, para que la solución de las controversias sea confiada al Estado sin temores, con la seguridad de que se cumplirán los principios de la administración de justicia y se garantizarán los derechos de las partes procesales.

Se fomenta la intermediación, la transparencia, la eficacia, la economía procesal, la celeridad, la igualdad ante la ley, la imparcialidad, la simplificación, la uniformidad.

Principalmente, precavemos los derechos y garantías constitucionales y procesales.

#### **2.4.- Las vías procesales contempladas en el COGEP: Ordinario, Sumario, Monitorio y Ejecutivo, en cuyas audiencias se deberán emitir las sentencias orales. Voluntario, de Ejecución y Concursal.**

El Código Orgánico General de Procesos reduce los procesos a los siguientes: el Ordinario, el Sumario, el Monitorio, el Ejecutivo, el Voluntario, el de Ejecución y Concursal<sup>18</sup>. Conforme lo establece el artículo 141 del Código Orgánico General de Procesos, todo proceso comienza con la presentación de

---

<sup>18</sup> Al revisar el COGEP en el libro IV que trata de los procesos reparamos en que el proceso de Ejecución y el Concursal no constan, pero sí se constituyen como procesos, por la manera en que encuentran desarrollados en el Libro V. Son procesos especiales por sus propios y específicos procedimientos. Por lo tanto, debemos tener clara la diferenciación entre proceso y procedimiento. Cada Proceso se diferencia de otro por su Procedimiento.



la demanda a la que podrá precederle las diligencias preparatorias<sup>19</sup>. Todo proceso podrá ser precedido por una diligencia preparatoria, a petición de parte con la finalidad de determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso y de anticipar la práctica de prueba urgente que pudiera perderse. La competencia para conocer y ordenar la práctica de las diligencias preparatorias se radica por sorteo de acuerdo con la materia del proceso en que se pretenda hacer valer y determina la competencia del juzgador para conocer el proceso principal. Si el peticionario no concurre a la diligencia, tendrá los mismos efectos de la falta de comparecencia a las audiencias. La parte que solicita la diligencia preparatoria debe señalar los nombres, apellidos y domicilio de la persona contra quien promoverá el proceso, así como deberá hacer constar el objeto y la finalidad del acto solicitado. El juez calificará la petición y dispondrá o rechazará la práctica de dichas diligencias. Si se dispone la práctica de la diligencia, se debe citar a la persona contra quien se la pide y se señalará fecha para que se lleve a cabo la diligencia. La persona contra quien se promueve la diligencia al ser citado puede oponerse a la práctica de la diligencia o puede solicitar la modificación o ampliación. El juez resolverá lo que corresponda. Si existe agravio, el solicitante o la parte contra quien se dicta la diligencia solicitada podrá apelar con efecto diferido. Si el Juez niega la diligencia solicitada, la parte afectada podrá interponer recurso de apelación con efecto suspensivo.<sup>20</sup>

---

19 Conforme el artículo 122 del COGEP.- Diligencias preparatorias. Además de otras de la misma naturaleza, podrá solicitarse como diligencias preparatorias:

1. La exhibición de la cosa mueble que se pretende reivindicar o sobre la que se practicará secuestro o embargo; la del testamento, cuando la o el peticionario se considere la o el heredero, legataria o legatario o albacea; la de los libros de comercio cuando corresponda y demás documentos pertenecientes al comerciante individual, la sociedad, comunidad o asociación; exhibición de los documentos necesarios para la rendición de cuentas por quien se halle legalmente obligado a rendirlas; y en general, la exhibición de documentos en los casos previstos en este Código.
2. La exhibición de los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida, por parte de su enajenante en caso de evicción o pretensiones similares.
3. El reconocimiento de un documento privado.
4. El nombramiento de tutora o tutor o curadora o curador para las o los incapaces que carezcan de guardadora o guardador o en los casos de herencia yacente, bienes de la persona ausente y de la o del deudor que se oculta.
5. La apertura de cajas o casilleros de seguridad en las instituciones del sistema financiero.
6. La inspección preparatoria si la cosa puede alterarse o perderse.
7. La recepción de las declaraciones urgentes de las personas que, por su avanzada edad o grave enfermedad se tema fundadamente puedan fallecer o de quienes estén próximos a ausentarse del país en forma permanente o por un largo período.

<sup>20</sup> Título II COGEP, artículos 120-123



Referente a las providencias preventivas, cualquier persona puede antes de presentar su demanda y dentro del proceso, solicitar el secuestro o la retención de la cosa sobre la que se litiga se va a litigar o de los bienes que aseguren el crédito. El secuestro<sup>21</sup> o la retención se solicitará al juzgador de primera instancia, aun cuando la causa se halle en la corte provincial. Se presenta la solicitud de providencias preventivas conforme los requisitos de la demanda, el juzgador en el término de 48 horas convocará audiencia en la que resolverá dicha solicitud. El deudor podrá interrumpir las providencias preventivas asegurando con caución suficiente. Se podrá ordenar el secuestro de bienes y sus frutos, cuando se tema su deterioro, la parte contra quien se pida el secuestro podrá oponerse prestando caución suficiente. El secuestro de bienes inmuebles se inscribirá en el registro de la propiedad. Mientras subsista el gravamen no podrá inscribirse otro, excepto la venta en remate forzoso. La retención se verificará en las rentas, créditos o bienes que tenga la o el deudor en poder de una o un tercero. Ordenada la retención, bastará que se notifique a la persona en cuyo poder estén las rentas, créditos o bienes que se retengan, para que no se los entregue sin orden judicial. Esta orden podrá impugnarse en el término de tres días. El acreedor que tema que el deudor se ausente para eludir el cumplimiento de una obligación, puede solicitar el arraigo, siempre y cuando demuestre la existencia del crédito, que la o el deudor es extranjero y que no tiene bienes raíces suficientes en el país. Las providencias preventivas no serán apelables sino en efecto no suspensivo. Las providencias preventivas, si no se propone la demanda en lo principal, caducarán en el término de quince

---

<sup>21</sup> Para que se ordene el secuestro o la retención, es necesario: Que se pruebe la existencia del crédito y que se pruebe que los bienes de la o del deudor se encuentren en tal estado, que no alcancen a cubrir la deuda o que pueden desaparecer u ocultarse o que el deudor trate de enajenarlos. El juzgador, en los casos permitidos por la ley y a solicitud de la o del acreedor, podrá prohibir la enajenación de bienes inmuebles de la o del deudor, para lo cual se notificará al respectivo registrador de la propiedad quien inscribirá la prohibición de enajenar sin cobrar derechos.

Mientras subsista la inscripción no podrán enajenarse ni hipotecarse los inmuebles cuya enajenación se ha prohibido, ni imponerse sobre ellos gravamen alguno.

Para la prohibición de enajenar bienes inmuebles, bastará que se acompañe prueba del crédito y de que la o el deudor, al realizar la enajenación, no tendría otros bienes saneados, suficientes para el pago. (artículos 125-126 COGEP)



días de ordenadas o de que se hizo exigible la obligación. En este caso, la o el solicitante pagará los daños y perjuicios ocasionados.

Respecto a las diligencias preparatorias y a las providencias preventivas, existe un debate sobre si se las debe considerar como un proceso o no, debido a que las mismas siguen un conjunto de actos, presentando la solicitud, el sorteo, el juez califica, se cita y el juez dispondrá o rechazará la práctica, por lo que, se podría considerar como un proceso, sin embargo, personalmente considero que no debe ser considerado como un proceso, sino debe ser considerado de manera especial, ya que es una diligencia preparatoria como tal, porque el COGEP es claro al considerar que todo proceso comienza con la presentación de la demanda a la que **podrá precederle** las diligencias preparatorias. No obstante es un tema interesante para reflexionar profundamente.

Un tema que resulta beneficioso en el Código Orgánico General de Procesos es que los medios alternativos de solución de conflictos reconocidos en la Constitución de la República y en la ley, tales como la conciliación, la mediación y el arbitraje, se fortalecen y se integran.

Se deben acompañar a la demanda los documentos que sean necesarios según cada proceso, éstos se encuentran establecidos en el artículo 143 del COGEP, por ejemplo: se debe adjuntar a la demanda la copia de la cédula de ciudadanía, se deben adjuntar todos los medios probatorios, también los documentos que exija la ley, entre otros. Una vez presentada la demanda el Juez en el término máximo de cinco días calificará la demanda como clara y completa si cumple con los requisitos legales, generales y especiales que sean aplicables al caso, si los cumple, calificará, tramitará y dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas. Si la demanda no cumple con los requisitos el juzgador dispondrá que el actor la complete o aclare en tres días, si no lo hace se archiva el proceso y se devuelven los documentos, (art. 146- COGEP). Se inadmitirá la demanda cuando el Juez sea incompetente



y la demanda contenga una indebida acumulación de pretensiones. Si el juzgador estima que la demanda es manifiestamente inadmisibile, la declarará así en la primera providencia, con expresión de los fundamentos de su decisión y ordenará devolver los anexos y el archivo del expediente. Esta providencia será apelable (art. 147 del COGEP). La demanda podrá reformarse hasta antes de la contestación por parte del demandado. Si después de contestada sobreviene un hecho nuevo podrá reformarse hasta antes de la audiencia preliminar. El juzgador cuidará que el demandado pueda ejercer su derecho de contradicción y prueba. Luego se cita a la parte demandada<sup>22</sup>.

Entiendo que a medida de que el COGEP entre en vigencia se irán presentando una serie de inconvenientes, considerando que el derecho es perfectible, los organismos competentes, así como quienes somos parte de la administración de justicia, debemos comprometernos para encontrar soluciones.

a) El Proceso Ordinario en el Código Orgánico General de Procesos, es el proceso matriz, ya que, en caso de que no exista una norma procesal que señale una vía especial para una determinada pretensión, se deberá tramitar en la vía ordinaria<sup>23</sup>. La parte demandada contestará a la demanda en un término de treinta días, cumpliendo con los requisitos formales previstos para la demanda, pronunciándose en forma expresa sobre las pretensiones de la parte actora, sobre la veracidad de los hechos alegados a la demanda y sobre la autenticidad de la prueba documental que haya acompañado, con la indicación categórica de lo que admite y de lo que niegue, debe deducir además todas las deducciones de las que se crea asistida contra las pretensiones de la parte actora, con expresión de su fundamento fáctico. Las excepciones podrán reformarse hasta antes de la audiencia preliminar. En el término de tres días de calificada la contestación, se notificará con su contenido la parte actora, quien en el término de diez días, podrá anunciar nueva prueba que se referirá a

---

<sup>22</sup> Se cita en cualquiera de las formas contenidas en el Libro II de la actividad procesal, Capítulo 1 referente a la citación.

<sup>23</sup> Artículo 289 COGEP.- Procedencia.- Se tramitarán pro el procedimiento ordinario todas aquellas pretensiones que no tengan previsto un trámite especial para su sustanciación.





hechos expuestos en la contestación <sup>24</sup>(art.151). La falta de contestación a la demanda podrá ser considerada por el Juez como negativa de los hechos alegados, a excepción de que la ley le atribuya otro efecto.

Este proceso está compuesto por dos audiencias: la Preliminar y la de Juicio. En el próximo capítulo dentro del análisis jurídico me referiré detalladamente al desarrollo de la Audiencia Preliminar, en esta Audiencia, el Juzgador saneará el proceso, admitirá la prueba que sea anunciada y presentada, resolverá los puntos de debate, resolverá sobre la participación de terceros, sobre la Litis consorcio, convalidará o subsanará los aspectos formales, entre otros. El Juez y las Partes Procesales pueden interactuar, revisar el proceso de tal manera que no adolezca de vicios o pueda ser depurado. Se sanea el proceso y el juez decide inmediatamente si el proceso es válido o no. De no ser válido pero sí subsanable, el mismo juez lo arregla, sin citar a un codeudor; de lo contrario, se cita al codeudor para que conteste y, con él, se retoma la audiencia. No hay sorpresas posteriores. En caso de no ser subsanable, por ejemplo, si alguien ha demandado en Quito cuando debió haber demandado en Cuenca y así lo reconoce el juez, este archiva el caso y dispone que se inicie el juicio en el lugar donde debió habérselo hecho desde un principio. Otro aspecto de la audiencia preliminar es la determinación de los puntos de litigio. Un tema muy importante es que una vez que se sabe exactamente por qué motivo se está litigando, se anuncia y presenta la prueba que nos permitirá corroborar lo alegado. Ya no existe la probatoria posterior; es decir, las pruebas se anuncian completamente con la demanda, con lo que se logra una contestación inmediata de la misma. El juez, utilizando la calificación de pertinencia de pruebas, es decir, desechando pruebas que no tengan que ver o no sean necesarias para el proceso que se lleva a cabo, hace que el proceso tenga más solvencia y credibilidad. En cuanto a la prueba, se pretende simplificar lo más posible los procedimientos, de forma que los medios probatorios sirvan efectivamente para aportar en la decisión de la o del

---

<sup>24</sup> En materia de niñez y adolescencia el término es de un día de calificada la contestación, se notifica con su contenido a la parte actora, quien en el término de tres días podrá anunciar nueva prueba que se referirá a los hechos expuestos en la constitución.



juzgador para resolver el caso. Esto de ninguna manera afecta el derecho a la defensa, por el contrario, se otorga la mayor amplitud al derecho de presentar pruebas a cada una de las partes procesales, pruebas que serán evaluadas dentro de los principios generales de contradicción, oportunidad y pertinencia.

La obligación de anunciar la prueba en la demanda y la contestación a la demanda, facilita la determinación temprana del grado de contradicción en los hechos que se alegan. También permite el conocimiento de la prueba aportada por la contraparte, los términos de la confrontación jurídica, para asumir estrategias que eviten controversias judiciales, viabilizar acuerdos y posibilitar allanamientos sin mayores costos y en el menor tiempo.

-La Audiencia de Juicio, en el próximo capítulo analizaremos detalladamente el desarrollo de la audiencia de juicio. Ésta se realizará en el término máximo de treinta días a partir de la culminación de la audiencia preliminar, en la cual se alegará al inicio y al final, se introducirá y confrontará la prueba, y se emitirá la resolución.

-Recurso de apelación: La admisión por el juzgador del recurso de apelación oportunamente interpuesto da inicio a la segunda instancia. El recurso se fundamentará en el término de diez días<sup>25</sup> lo que se notificará a la otra parte para que conteste en diez días<sup>26</sup>. Recibido el expediente el tribunal convocará a la audiencia en el término de quince días, conforme las reglas generales de las audiencias<sup>27</sup>. Una vez finalizado el debate, el tribunal pronunciará su resolución.

Como hemos revisado, este proceso ofrece en sus audiencias términos amplios, la posibilidad de reconvenir, la actuación de la prueba en la segunda instancia en una nueva audiencia; este proceso ofrece la posibilidad de ejercer a plenitud los derechos de las partes, tanto en el patrocinio de la causa, así como para la defensa de la misma.

---

<sup>25</sup> Excepto en asuntos de niñez y adolescencia que será de cinco días.

<sup>27</sup> En materia de niñez y adolescencia la audiencia se convocará en el término de diez días.



b) El proceso sumario empieza con la presentación de la demanda que reunirá todos los requisitos y que contendrá el anuncio de prueba, una vez calificada la demanda se realizará la citación correspondiente al demandado quien tiene quince días para contestar la misma, dicha contestación debe cumplir con los requisitos legales y deduciendo sus excepciones fundamentadas<sup>28</sup> en la contestación solo podrá proponer reconvencción conexa<sup>29</sup>, el actor debe contestar en quince días, luego se convoca a audiencia única que se realizará máximo en el término de treinta días contados desde la contestación<sup>30</sup>.

Este proceso está compuesto por una sola audiencia, pero dividida en dos etapas: primero: la fase preliminar: el saneamiento del proceso, fijación de puntos de debate y conciliación; la segunda de prueba y alegatos y, luego, el juzgamiento, el Juez dictará la sentencia oralmente. Conforme el art. 80 del COGEP la dirección de las audiencias corresponde al juzgador, como garantes de los derechos y de las normas, dentro de sus facultades de dirección podrá indicar a las partes los asuntos a debatir, moderar la discusión, impedir que sus alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes y ordenar la práctica de pruebas cuando sea procedente así mismo podrá limitar el uso de la palabra de las personas que intervengan, interrumpiendo a quien haga uso manifiestamente abusivo o ilegal de su tiempo. Ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y garantizar su efectiva realización. El juzgador dirigirá la audiencia de tal manera que las partes y el público comprendan lo que ocurre.

Todos los temas sociales, tales como laborales, de familia, de menores, entre otros, se sustancian por la vía sumaria.

c) El proceso ejecutivo: conforme lo establece el artículo 347 del COGEP son títulos ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar o hacer: declaración de parte hecha con juramento ante el juzgador

---

<sup>28</sup> Excepto en niñez y adolescencia en el que tendrá diez días

<sup>29</sup> Excepto alimentos, la reconvencción no procede en materia de alimentos.

<sup>30</sup> Excepto en niñez y adolescencia, en que se realizará en un término no menor a diez días y no mayor a 20 días.



competente<sup>31</sup>, copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas, documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por decisión judicial, letras de cambio, pagarés a la orden, testamentos, transacción extrajudicial y los demás que la ley les otorgue la calidad de título ejecutivo. Un título ejecutivo tiene características especiales como la presunción de autenticidad y el valor de prueba pre-constituida, conforme el artículo 348 del COGEP, la obligación contenida en el título para que sea admitida en procedimiento ejecutivo debe ser clara, pura, determinada y actualmente exigible. Cuando la obligación es de dar una suma de dinero debe ser, además, líquida o liquidable mediante operación aritmética. Una novedad que se encuentra en el COGEP es que si uno de los elementos del título está sujeto a un indicador económico o financiero de conocimiento público, contendrá también la referencia de éste y si la obligación es en parte líquida, el actor acompañará una liquidación pormenorizada siguiendo los criterios establecidos en el título. No se puede aceptar a trámite una demanda en la que no vaya acompañada el título que reúna las condiciones de ejecutivo. La omisión de este requisito no será subsanable y producirá la inadmisión de la demanda. Si el juzgador considera que el título aparejado a la demanda no presenta mérito ejecutivo, delegará de plano la acción ejecutiva. El proceso inicia con la demanda, después de calificada como clara y completa en el término de tres días, se cita al demandado quien tendrá tres días para su cumplimiento de la obligación o para deducir excepciones, si no cumple con su obligación o deduce alguna excepción, el juez pronunciará sentencia, ordenando que el deudor cumpla con la obligación, decisión sobre la cual no habrá recurso alguno. De haber oposición se convocará a audiencia única que debe realizarse dentro del término de veinte días, contados desde que concluyó el término para realizar oposición. La Audiencia se cumplirá en dos fases: la primera de saneamiento, fijación de los puntos de debate y tratar de encontrar la conciliación entre las partes y la segunda fase de prueba, alegato y resolución. Este recurso se interpondrá de manera oral en la respectiva audiencia.

---

<sup>31</sup> Suple a la confesión judicial.



En este proceso cabe la reconvención fundada en otro título ejecutivo. Se puede apelar pero únicamente con efecto no suspensivo. Si se quiere suspender la providencia preventiva dictada, el deudor debe rendir caución, lo podrá hacer en cualquier momento del proceso, hasta antes de la sentencia. No cabe el recurso de casación en este proceso. A falta de norma propia se aplica de manera supletoria las normas del proceso sumario.

El proceso ejecutivo se sustancia en una sola audiencia, al igual que el proceso sumario, pero ahora el Código determina las causales de excepción en este tipo de juicios; es decir, en el que se admite únicamente excepciones taxativas: 1.-Pagar o cumplir con la obligación, 2.-formular oposición acompañando la prueba conforme lo previsto en el COGEP, 3.- rendir caución con el objeto de suspender la providencia preventiva dictada, lo cual podrá hacer en cualquier momento del proceso, hasta antes de la sentencia y 4.- puede reconvenir al actor con otro título ejecutivo. A través de una audiencia y un trámite expedito que amerita este tipo de controversias, evitando así las negativas improcedentes. Si el deudor dentro del respectivo término<sup>32</sup> no cumple la obligación, ni propone excepciones o si las excepciones propuestas son distintas a las permitidas por el COGEP para este tipo de procesos, el juzgador en forma inmediata pronunciará sentencia mandando que el deudor cumpla con la obligación. Esta resolución no será susceptible de recurso alguno.

En el procedimiento ejecutivo la oposición solamente podrá fundarse en estas excepciones: 1.- Título no ejecutivo, 2.- Nulidad formal<sup>33</sup> o falsedad de título, 3.- Extinción total o parcial de la obligación exigida 4.- Llamamiento a juicio por delito de usura o enriquecimiento privado no justificado, en el que la parte demandada del procedimiento ejecutivo figure como acusadora particular o denunciante del proceso penal y el actor del proceso ejecutivo sea el procesado. En caso de que el auto de llamamiento a juicio sea posterior a la

---

<sup>32</sup> 15 días. Si hay reconvención 15 días más. Considerando que serán aplicables las normas del proceso Sumario.

<sup>33</sup> La nulidad formal consiste en que el título no cumple con los requisitos establecidos y pasará a ser un principio de prueba por escrito.



contestación a la demanda, el demandado podrá adjuntarlo al proceso y solicitar su suspensión<sup>34</sup>. 5.- Excepciones previas contenidas en este código.

La manera en que está previsto el proceso ejecutivo en el Código Orgánico General de Procesos que ahora sí es un proceso de ejecución, es efectivo.

d) El proceso monitorio es un juicio que está diseñado para el cobro de deudas menores a 50 salarios básicos unificados (18.300 dólares) que no están contenidas en títulos ejecutivos. Para demandar en el proceso monitorio no se requiere de un título ejecutivo que contenga una obligación ejecutiva sino que la obligación sea ejecutiva más el título no. Este proceso no es de conocimiento porque busca una manifestación de la voluntad, en este proceso, el actor presenta un requerimiento de pago; una vez que este requerimiento es calificado por el juez, se cita al demandado, quien puede adoptar tres acciones:

a. Aceptar el requerimiento y la paga, terminando así el proceso.

b. Guardar silencio y no contestar la demanda, con lo cual se dicta sentencia aceptando el requerimiento de pago y se procede a la fase de ejecución.

c. Oponerse al pago, lo cual se sustancia por la vía sumaria, es decir, en una sola audiencia.

Se presenta la demanda. El juez califica como clara y completa dictará auto de pago y se citará al demandado para que pague en quince días. Si el deudor no comparece o si lo hace sin oponerse, el auto quedará firme y se procederá a su ejecución, mediante el embargo, avalúo y remate. Si el demandado comparece con oposición y formula excepciones, el Juez convocará a audiencia única que se cumplirá en dos fases: una de saneamiento, fijación de los puntos de desacuerdo y la conciliación y la otra fase de prueba, alegatos y sentencia, contra la cual no caben otros recursos

---

<sup>34</sup> Hasta que se determine en el juicio penal mediante sentencia. Si es inocente se continúa con el juicio ejecutivo, caso contrario no.



que los de aclaración, ampliación y apelación. En este proceso no cabe ni la reforma a la demanda, ni la reconvención.

Una novedad en el COGEP es que en estos tipos de procesos no es obligatorio presentar la demanda con firma de abogado; para eso existen unos formularios que las personas llenan adjuntando la prueba necesaria, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, sin embargo, la práctica nos da a conocer otra situación, por ejemplo: en el trámite de alimentos a pesar de que existe un formulario facilitado por el Consejo de la Judicatura, la mayoría de usuarios acuden a las diligencias acompañados de un abogado, considero que va a surgir la misma situación, la ciudadanía prefiere sentirse respaldada y guiada por un profesional de derecho. En el proceso se anuncia la totalidad de las pruebas; luego de esa etapa ya no se puede anunciar más, pues se anunciaron con la demanda. En un segundo punto, se cataloga o relaciona la prueba con lo que se quiere demostrar. La prueba impertinente no es aplicable. Si alguien lleva veintisiete testigos para demostrar un mismo hecho y ninguno de ellos aporta realmente algo nuevo, el juez puede decidir que no escuchará veintisiete veces la misma versión. Esto tiene relación con el tema de la lealtad procesal: se demanda con las pruebas. Y esta lealtad procesal se exige a actor y demandado, cuando alguien demanda, anuncia su prueba; pero cuando se es demandado y se sabe que la parte demandante tiene todas las pruebas, se debería buscar un acuerdo, y no hacer lo que sucede hoy en día: contestar la demanda y demorar el proceso.

Esto ya no sucederá porque, como se tiene que anunciar la prueba también con la contestación, lo primero que vendrá después será una audiencia; y en la audiencia, si la prueba es incongruente, el juez la desechará. El Código Orgánico General de Procesos obliga a que, en todos los juicios, el juez decida si se condenan o no se condenan costas. No es simplemente la condena o no; es decir, se puede condenar en costas porque la parte no practicó ninguna prueba. El tema de costas es trascendente porque, por ejemplo, si alguien demanda por 100 dólares a otra persona, la persona que sin pruebas pierda el juicio puede estar pagando más de 100 dólares.





e) Se determinan como procedimientos especiales a los procesos contencioso tributario y contencioso administrativo que, dependiendo de la acción, seguirán la vía ordinaria o sumaria. Estos permiten a los administrados demandar al Estado o a sus instituciones con el objeto de obtener la tutela de sus derechos, garantizar o restablecer la legalidad de los hechos, los actos o los contratos de la administración pública sujetos al derecho tributario o al derecho administrativo y resolver diversos aspectos de la relación jurídico tributaria o jurídico administrativa, incluso la desviación de poder.

Un tema que ha generado polémica es la incorporación de lo Contencioso Administrativo dentro de este Código, se menciona que lo óptimo sería que esta materia tenga su propio código con sus propias especificidades y singularidades, que regule los principios propios de esta disciplina jurídica. Lo óptimo sería que exista una Ley de lo Contencioso Administrativo, y que, dicha ley contenga una cláusula supletoria general que se remita al COGEP en lo que sea aplicable. Con el Código Orgánico General de Procesos, se busca generar seguridad jurídica bajo el principio de Uniformidad pero se debate por el conflicto con el principio de Especialidad Procesal, debido a que lo Contencioso Administrativo, tal como lo mencionamos anteriormente, tiene sus propios principios. He hecho referencia a esta situación, sin embargo su análisis sería muy extenso, para ser desarrollado en otro trabajo investigativo.

f) Se prevé además el procedimiento voluntario que facilita a la o el ciudadano una ágil petición y la resolución inmediata. Conforme el artículo 334 del COGEP El Juez ejerce jurisdicción voluntaria o de simple administración, los asuntos que se van a tratar de jurisdicción voluntaria como el otorgamiento de autorizaciones o licencias y aquellas en las que por su naturaleza o por razón del estado de las cosas se resuelven sin conflicto y sin contradicción.

g) Existen otras formulaciones normativas, como la regulación a los derechos difusos, derechos de cuarta generación, a las comunidades, nacionalidades y pueblos que pueden demandar como colectivo. En este sentido se ha incorporado como partes procesales a estos grupos y a la



naturaleza. Se ha instrumentado el mandato constitucional que les confiere derechos y su tutela judicial.

h) El de Ejecución: es el conjunto de actos procesales para hacer cumplir las obligaciones contenidas en el título de ejecución, son títulos de ejecución: la sentencia ejecutoriada, el laudo arbitral, el acta de mediación, el contrato prendario y de reserva de dominio. La sentencia, el laudo arbitral o el acta de mediación expedidos en el extranjero, homologados conforme las reglas del COGEP, las actas transaccionales y las demás que establezca la ley. (Artículo 362 COGEP). Tomando en consideración el artículo 75 de nuestra Constitución que parte de la tutela judicial imparcial y expedita es la ejecución de la sentencia y es este proceso el que garantiza el cobro de las deudas y el Juez puede acceder a los registros de datos para obtener información relativa a los bienes.

i) Concursal.- el Doctor Jorge García Falconí, docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Central del Ecuador dice:

“Contempla el proceso concursal, que se encamina hacia la protección del negocio jurídico realizado a través de la actividad económica, que conlleva la preservación del empleo y la protección del sistema crediticio y, por tal de la economía en general, que garantiza el Art. 284.2 de la CRE.

De tal manera, que cuando no se cumplen estos compromisos y obligaciones, se regula la facultad del Estado para garantizar el libre desarrollo de la economía, por lo que se establece el concurso de acreedores, que es un procedimiento judicial, cuya petición resulta exigida para todo aquel deudor que se halla inmerso en los casos de cesión de bienes o en estado de insolvencia, y en la cual se examina si el deudor puede cumplir con todo o parte de la deuda con su patrimonio con las obligaciones de pago pendientes y, por último caben también los acuerdos colectivos entre el deudor y los acreedores, con la finalidad de reducir o aplazar el pago de algunas deudas, buscando la solución consensuada menos gravosa para todos”. (2015)



## **2.5.- Análisis jurídico de la Oralidad en el Código General de Procesos COGEP.**

En la opinión de la Abogada ecuatoriana María Daniela Bolaños, el Código Orgánico General de Procesos, cumple con el mandato constitucional de sustanciar los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias mediante el sistema oral.

El sistema oral se caracteriza por brindar celeridad a los usuarios, lo que significa mayor acercamiento a la justicia. En este sistema, la diligencia esencial es la audiencia o audiencias, dependiendo de los procesos, y es fundamental debido a que en ella estarán físicamente presentes las partes, sus abogados y los juzgadores. En la audiencia se llevarán a cabo los diferentes momentos procesales que, como señalan los artículos 79 y 93 del Código Orgánico General de Procesos, deberán terminar siempre con la resolución expresada de manera oral por el juzgador.

Las audiencias se celebrarán en los casos previstos en este Código. En caso de que no pueda realizarse la audiencia se dejará constancia procesal. Al inicio de cada audiencia la o el juzgador que dirija la misma se identificará, disponiendo que la o el secretario constate la presencia de todas las personas notificadas. La o el juzgador concederá la palabra a las partes, para que argumenten, presenten sus alegaciones y se practiquen las pruebas, cuidando siempre que luego de la exposición de cada una, se permita ejercer el derecho a contradecir de manera clara, pertinente y concreta lo señalado por la contraria. Iniciará la parte actora. Durante la audiencia, la o el juzgador puede autorizar que las partes intervengan personalmente. En ese caso, la o el defensor se debe limitar a controlar la eficacia de la defensa técnica. Las partes tendrán derecho a presentar de forma libre sus propuestas, intervenciones y sustentos. La o el juzgador concederá la palabra a quien lo solicite y abrirá la discusión sobre los temas que sean admisibles. El idioma oficial es el castellano, de no poder entender o expresarse con facilidad, las personas intervinientes serán asistidas por una o un traductor designado por la o el juzgador. Las personas intervinientes, en caso de no poder escuchar o



entender oralmente, serán asistidas por un intérprete designado por la o el juzgador, quien podrá usar todos los mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan su inclusión. Lo anterior no obsta para estar acompañados por un intérprete de su confianza. Se resolverá de manera motivada en la misma audiencia. Las personas serán notificadas con el solo pronunciamiento oral de la decisión. Para la interposición de recursos, los términos se contarán a partir de la notificación de la sentencia o auto escrito. Cualquier solicitud o recurso horizontal presentado por alguna de las partes antes de la fecha de audiencia, no suspenderá su realización. La o el juzgador resolverá dichas peticiones en la misma audiencia. (Art. 79 COGEP).

Pronunciamiento judicial oral. Al finalizar la audiencia la o al juzgador pronunciará su decisión en forma oral. Excepcionalmente y cuando la complejidad del caso lo amerite podrá suspender la audiencia por el término de hasta diez días para emitir su decisión oral. Al ordenar la suspensión determinará el día y la hora de reinstalación de la audiencia. La resolución escrita motivada se notificará en el término de hasta diez días. El incumplimiento del término para dictar sentencia será sancionado conforme con lo dispuesto por la ley. (Art. 93 COGEP).

De acuerdo a los procesos establecidos existen dos tipos de audiencias: la preliminar y de juicio. La audiencia preliminar tiene como objetivo principal sanear el proceso, fijar los puntos del debate y resolver respecto a la admisibilidad de la prueba. Una característica muy importante de esta audiencia es que las partes están obligadas a comparecer personalmente, y que podrá ser diferida por una sola vez, siempre que exista mutuo acuerdo entre las partes. La audiencia deberá contener la resolución de excepciones y de recursos, si existe un auto interlocutorio que rechace excepciones previas. Esta decisión será apelable con efecto diferido, es decir, se continuará con la tramitación de la causa hasta que, de existir una apelación a la resolución final, sea resuelta de manera prioritaria por el Tribunal de alzada. Sin embargo, si se resuelve una excepción que ponga fin al proceso, esa resolución será apelable



con efecto suspensivo, y los recursos horizontales que se presenten en la audiencia deberán ser resueltos inmediatamente por el juzgador.

El juzgador, en audiencia preliminar, de acuerdo al contenido del artículo 294 del Código Orgánico General de Procesos, deberá desarrollar la Audiencia conforme las siguientes reglas:

1. Instalada la audiencia, la o el juzgador solicitará a las partes se pronuncien sobre las excepciones previas propuestas. De ser pertinente, serán resueltas en la misma audiencia.

2. La o el juzgador resolverá sobre la validez del proceso, la determinación del objeto de la controversia, los reclamos de terceros, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso, con el fin de convalidarlo o sanearlo. La nulidad se declarará siempre que pueda influir en la decisión del proceso o provocar indefensión. Toda omisión hace responsables a las o los juzgadores que en ella han incurrido, quienes serán condenados en costas.

3. La o el juzgador ofrecerá la palabra a la parte actora que expondrá los fundamentos de su demanda. Luego intervendrá la parte demandada, fundamentando su contestación y reconviniendo de considerarlo pertinente. Si la parte actora es reconvenida, la o el juzgador concederá la palabra para que fundamente su contestación. Si se alegan hechos nuevos, se procederá conforme a este Código.

4. La o el juzgador, de manera obligatoria, promoverá la conciliación conforme a la ley. De darse la conciliación total, será aprobada en el mismo acto, mediante sentencia que causará ejecutoria.

5. En caso de producirse una conciliación parcial, la o el juzgador la aprobará mediante auto que causará ejecutoria y continuará el proceso sobre la materia en que subsista la controversia.

6. La o el juzgador, de oficio, o a petición de parte, podrá disponer que la controversia pase a un centro de mediación legalmente constituido, para que



se busque un acuerdo entre las partes. En caso de que las partes suscriban un acta de mediación en la que conste un acuerdo total, la o el juzgador la incorporará al proceso para darlo por concluido.

7. Concluida la primera intervención de las partes, si no hay vicios de procedimiento que afecten la validez procesal, continuará la audiencia, para lo cual las partes deberán:

a) Anunciar la totalidad de las pruebas que serán presentadas en la audiencia de juicio. Formular solicitudes, objeciones y planteamientos que estimen relevantes referidos a la oferta de prueba de la contraparte.

b) La o el juzgador podrá ordenar la práctica de prueba de oficio, en los casos previstos en este Código.

c) Solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieren prueba.

d) La o el juzgador resolverá sobre la admisibilidad de la prueba conducente, pertinente y útil, excluirá la práctica de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han obtenido o practicado con violación de los requisitos formales, las normas y garantías previstas en la Constitución, los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y este Código, y que fueron anunciadas por los sujetos procesales.

e) Para el caso de las pruebas que deban practicarse antes de la audiencia de juicio, la o el juzgador, conjuntamente con las partes, harán los señalamientos correspondientes con el objeto de planificar la marcha del proceso.

f) Los acuerdos probatorios podrán realizarse por mutuo acuerdo entre las partes o a petición de una de ellas cuando sea innecesario probar el hecho, inclusive sobre la comparecencia de los peritos para que rindan testimonio sobre los informes presentados. La o el juzgador fijará la fecha de la audiencia de juicio.



8. Concluidas las intervenciones de los sujetos procesales la o el juzgador comunicará motivadamente, de manera verbal, a los presentes sus resoluciones, inclusive señalará la fecha de la audiencia de juicio, que se considerarán notificadas en el mismo acto. Se conservará la grabación de las actuaciones y exposiciones realizadas en la audiencia.

Las manifestaciones de dirección de la audiencia, incluso la proposición de fórmulas de arreglo entre las partes y las ordenadas para el cumplimiento de las actividades previstas en la misma, en ningún caso significarán prejuzgamiento. Por esta causa, la o el juzgador no podrá ser acusado de prevaricato, recusado, ni sujeto a queja.

La o el secretario elaborará, bajo su responsabilidad y su firma, el extracto de la audiencia, que recogerá la identidad de los comparecientes, los procedimientos especiales alternativos del procedimiento ordinario que se ha aplicado, las alegaciones, los incidentes y las resoluciones de la o el juzgador”.

El juzgador tiene la obligación de promover fórmulas de arreglo, lo cual se vincula con la importancia y la necesidad de que las partes asistan a la audiencia, hecho que inobjetablemente acarreará transparencia en la administración de justicia y mayor credibilidad por parte de la ciudadanía.

La audiencia de juicio tiene como objetivo la práctica e introducción de las pruebas admitidas en la audiencia preliminar. Los alegatos de las partes se presentan de manera equitativa, y el juzgador tiene la posibilidad de solicitar aclaraciones o precisiones pertinentes durante cada una de las exposiciones.

Cuando el proceso establece una audiencia única, comprende dos fases: la primera, de saneamiento y fijación de los puntos de controversia y conciliación (objetivos de la audiencia preliminar), y, la segunda, de práctica e introducción de pruebas y exposición de alegatos (objetivos de la audiencia de juicio).





Al referirnos a justicia en audiencia, insistimos en que la implementación del sistema oral no pretende incluir una diligencia más al proceso, sino que los juzgadores, efectivamente, administren la justicia en la propia audiencia.

El juez ya no basará su decisión en la lectura de expedientes sino en la contradicción que generan las partes respecto de las pretensiones, alegatos y hechos probatorios, la audiencia no puede enfocarse en la simple realización de un acto procesal; debemos verla como el motor en el que se basa el nuevo sistema.

En la audiencia se generarán todos los elementos que fabriquen la convicción del juzgador. Por eso podemos afirmar que, en la audiencia, las partes tienen la obligación de presentar todos sus aportes para la decisión del juez. Así mismo, las partes tienen el derecho de recibir en la audiencia la respuesta a sus pretensiones, ya que, incluso el juzgador puede pedir que una de las partes se exprese y oralmente manifieste su pretensión.

Respecto del sistema de audiencias, podemos destacar las siguientes características:

a. En la audiencia preliminar, en aquellos procesos de doble audiencia o en la etapa preliminar de los procesos de audiencia única, el juzgador deberá:

- Atender las excepciones previas planeadas y, por lo tanto, sanear el proceso.
- Fijar la controversia, es decir, determinar los puntos en los que se basa el conflicto.
- Calificar la pertinencia de la prueba que se va a exponer en la audiencia de juzgamiento, y aprobarla.

b. Las audiencias se realizan en la fecha y hora previstas.



Se elimina la llamada “hora judicial”<sup>35</sup>.

c. Hay una obligación de comparecencia personal en el caso de ser personas naturales. La inasistencia de las partes ocasiona efectos en el proceso. Si la ausencia es de la parte actora, se dispondrá el abandono de la causa sin oportunidad de volver a presentar la demanda. Si la ausencia es de la parte demandada, la audiencia continuará y la parte demandada perderá el momento procesal para actuar en los momentos y diligencias a los que ha faltado, es decir, perderá la oportunidad de hacer valer sus derechos respecto de esos momentos en los que no estuvo presente.

d. La audiencia debe concluir, por regla general, con una decisión del juez, si bien el Código señala que en casos calificados como complejos se puede diferir la decisión del juez para una audiencia posterior, que no puede realizarse en más de diez días. La calificación de complejidad debe ser fundamentada por el juez, aunque es claramente entendible que el abuso de esta calificación ocasionaría una evaluación deficiente del juez respecto de sus capacidades para atender los temas puestos en su conocimiento.

### Apelación

La apelación debe ser fundamentada, señalando las normas violentadas y el momento procesal en que ha ocurrido tal violación. Para interponer la apelación no basta el desacuerdo llano contra la decisión del juez, pues es fácilmente entendible que quien pierde el litigio no estará de acuerdo con el fallo. La ley señala los efectos de la apelación según el caso. En este sentido, se prevén los siguientes efectos a la apelación:

a. Efecto suspensivo: Cuando se detiene la ejecución del auto o sentencia hasta la decisión del tribunal de alzada.

b. Efecto no suspensivo: Cuando, sin perjuicio del análisis y conocimiento del tribunal de alzada, no se suspende la ejecución del auto o sentencia.

---

<sup>35</sup> Que se otorguen a las partes procesales diez minutos de gracia después de la hora señalada para una diligencia.



c. Efecto diferido: Es un nuevo efecto, en este caso, los efectos de la apelación quedan en suspenso, hasta la eventual apelación de la sentencia. Cuando la ley lo establezca (261 y 262)

Contra resoluciones dictadas en audiencia preliminar que denieguen procedencia de (rechace la) excepción previa o la práctica de determinada prueba (262 y 296).

Algunas de las acciones previstas como jurisdicción voluntaria, es decir, aquellas en las que no existe controversia, fueron remitidas con funciones exclusivas a los notarios. En estos casos, la norma señala que, al presentarse controversia, se deberá suspender la tramitación ante notario y pasar a conocimiento de un juez por la vía sumaria.

La oportunidad probatoria, sólo la prueba anunciada en la demanda o en la contestación a la misma y presentada en audiencia, será válida en el proceso. Esto quiere decir que las partes procesales, al momento de presentar la demanda o al contestarla, deberán anunciar todas las pruebas de las que quieran hacer uso en el proceso.

Es importante señalar que la demanda y la contestación a la demanda no solo contendrán las pretensiones o posturas de las partes, sino, además, las pruebas que demuestren o respalden su posición. En este sentido, el anuncio de prueba no se refiere a un listado de actos probatorios, sino es necesario determinar su relación con la argumentación de las partes, deben estar explicadas su pertinencia y su finalidad.

## **2.6.- Principio de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, dispositivo, de contradicción**

En concordancia con el cumplimiento del mandato constitucional, una vez analizadas las necesidades prácticas de la administración de justicia, es transcendental analizar el cumplimiento de los principios procesales contenidos



en la Constitución de la República: simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, respecto a la justicia en audiencia.

El principio de simplificación, de acuerdo a la jurisprudencia costarricense, consiste en que “las estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión y entendimiento”, lo que tiene una vinculación determinante con la justicia en audiencias pues éstas incluyen a la ciudadanía directamente, haciéndola parte del proceso. Es importante simplificar el proceso y brindar la posibilidad de que sea entendido por todos los presentes. Asimismo, la simplicidad se refiere a procesos sencillos y uniformes, lo que tiene relación directa con el principio de uniformidad, el mismo que implica que debe existir equilibrio entre forma y fondo. La forma hace referencia a las actuaciones procesales, y el fondo, al criterio y la aplicación de la norma como órgano administrador de justicia. El principio de eficiencia involucra obtener mejores resultados, con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros, lo que se aplica directamente al proceso oral y principalmente, a la administración de justicia en audiencia, pues en esta diligencia medular se concentran muchos momentos procesales.

De acuerdo a lo manifestado por el jurista uruguayo Ángel Landoni Sosa,

La efectiva inmediación del juez con las partes y con las pruebas, así como de las propias partes entre sí, ha posibilitado que en el proceso se logre una justicia más próxima a la realidad de las circunstancias de hecho, ya que el juez conoce en profundidad y en mejor forma las cuestiones a decidir.

En aplicación al principio de inmediación, el COGEP permite expresamente que, de considerarlo necesario, la parte interesada puede intervenir directamente en la audiencia, cristalizando y garantizando la aplicación del principio de inmediación que se asegura también al existir contacto directo entre el juez, las partes y el conocimiento de la prueba.

El jurista italiano, Giuseppe Chiovenda, definía al principio de economía procesal como “la obtención del máximo resultado posible con el mínimo de



esfuerzo. Este principio se refiere no solo a los actos procesales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen”. Es decir, la aplicación del principio garantiza que el proceso sea subsanado de errores, con el objetivo de evitar costos innecesarios al Estado y a las partes afectadas.

El principio de celeridad “consiste en que el proceso se concrete a las etapas esenciales y cada una de ellas limitada al término fijado por la norma”. En observancia a este principio, el juez deberá cumplir con los términos establecidos en la norma para las respectivas diligencias.

El profesor mexicano Enrique Ramírez Martínez señala:

La oralidad no es el único sistema de impartición de justicia que garantice la protección de los derechos esenciales, pero sí facilita la realización de tales fines, ya que permite, entre otras cosas, la inmediación y contacto directo de los sujetos del proceso con los elementos probatorios. Bajo las reglas de concentración y continuidad hace realidad el principio del “contradictorio”, es decir, que los sujetos intervengan controlando, discutiendo o “contradiciendo” las pruebas y argumentos de unos y otros. Garantiza, asimismo, la publicidad y el control ciudadano sobre el juzgamiento de los individuos bajo un régimen de libre apreciación probatoria (sana crítica) y con la exigencia (para los jueces de derecho) de justificar debidamente sus decisiones (deber de fundamentación)”. Encontramos entonces que, además de tratarse de una disposición constitucional lo cual debería bastar para trabajar en esta reforma, el sistema oral es el que mejor se ajusta a la adopción de los principios procesales, como lo podemos ver si hacemos una comparación entre el sistema escrito y el sistema oral. Debemos destacar dos aspectos fundamentales: la inmediación y la oportunidad.

Tomás Alvear, Director de la Escuela de la Función Judicial, recalca que este proceso histórico que vive el país tiene un fin: humanizar la justicia, darle un rostro, refiriéndose a la relación directa que tendrán las partes con el juez, en audiencia. La sustancia es el contacto personal: en Derecho esto se llama inmediación. Con el COGEP se garantiza que las partes sean escuchadas. De este modo, juez, ciudadanos en conflicto, pruebas correspondientes al caso y



abogados, con sus pretensiones expuestas de manera oral, celebrarán un proceso legítimo en que se dictará sentencia sin demora.

### **CAPÍTULO III**

#### **2.7 CONFORMIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL: Constitución y Código General de Procesos: ¿Similitudes o Diferencias?**

Toda norma legal debe tener como base un precepto constitucional. La Constitución de la República de 2008 modifica sustancialmente el esquema jurídico en el Ecuador de allí la necesidad de emprender una profunda transformación en la estructura del Estado incluyendo primordialmente a la administración de justicia, pues de su eficacia jurídica depende el pleno y oportuno ejercicio de los derechos constitucionales, a cuyo efecto, este Código guarda conformidad con las disposiciones constitucionales e impulsa el ejercicio de los derechos ciudadanos.

El primer elemento, contenido en la descripción conceptual específica que consta en el artículo 1 de la Constitución de la República, declara y reconoce, entre los principios fundamentales, que: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia...”.

El segundo, al determinarse, entre los derechos de protección, a partir del artículo 75 de la Constitución de la República, que el Estado reconoce a todos los habitantes del país, sin discriminación por causa alguna, el “...acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad...”. Como medio de materializar el derecho a la seguridad jurídica que al decir de lo previsto en el artículo 82 de la Constitución del Ecuador se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, que faciliten el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos contenidos en el artículo 83 de la norma supra en referencia, asegura con ello, la convivencia pacífica de toda la población, requisito



indispensable para promover la competitividad y bienestar de toda nuestra nación.

El tercero, aparece en el artículo 167 de la Constitución de la República, que trata sobre los principios de la administración de justicia, al señalar que las o los juzgadores son únicamente un instrumento del Estado, pues la voluntad popular es la que les confiere su autoridad: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones previstos en la Constitución”.

Y, finalmente, el cuarto elemento está en el artículo 169 de la Carta Fundamental que determina que: “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”.

El acatamiento de la supremacía constitucional, sumado a la integración concreta entre los derechos de las personas, la voluntad popular como fundamento para la administración de justicia, y el entendimiento de que el sistema procesal significa justicia y permite la resolución imparcial y expedita de los conflictos propios de la convivencia social, permitirá abordar con lógica el Código Orgánico General de Procesos.

Si aceptamos que el derecho es la expresión de las conductas individuales y sociales, para regularlas y solucionar controversias bajo el imperio de la ley que emana de la autoridad del Estado, coincidiremos en que la concepción constitucional debe asentarse en normas procesales y materiales que viabilicen los mandatos dogmáticos y orgánicos de la Norma Suprema.

Para Guillermo Cabanellas (1981) “El instrumento es un código, por tratarse de una ley única, con plan, sistema y método, que regula progresivamente los procesos en diversas materias”. (p. 181).





Como acertadamente lo expresa el doctor ecuatoriano Néstor Árbito Chica: “es vital una nueva cultura procesal”. No hay nada más ajeno al cumplimiento de esos principios que el proceso escrito, pues en él no existe inmediación: el juez no está cercano a las partes, sino cercano a los papeles que le van presentando. No hay economía procesal, porque el juez toma contacto con el juicio recién al final, cuando va a dictar sentencia. Cuando el juez califica una demanda, abre una etapa, una instancia, en la cual se limita, a manera de buzón de correo, a recibir papeles que le presentan las partes, pero que él no analiza en cada etapa sino al final, cuando dice auto para dictar sentencia; además, puede suceder que descubre una nulidad en el inicio del juicio, con lo cual debe regresar todo a la citación, y los años de litigio nadie los devuelve. Se ha desperdiciado el tiempo, pero, sobre todo, las partes han perdido, más que el dinero, el costo de creer en el sistema de justicia. La siguiente vez, la parte procesal pensará dos veces antes de iniciar un juicio, pues para perder dos o tres años y que le digan que es un juicio nulo y que tiene que regresar al inicio, preferirá, sin duda, perder el dinero, lo cual va generando frustración social o buscará mecanismos de auto tutela para satisfacer su necesidad directamente.

No fueron pocos los casos que funcionaban con estos sistemas de cobro. Había personas que iban acompañadas de ciudadanos temerarios que amedrentaban a los deudores y de cierta manera presionaban para que paguen. Estos sistemas alternativos se fueron generando porque el sistema judicial no daba ninguna respuesta.

Hacemos énfasis en que en el Código Orgánico General de Procesos, los medios alternativos de solución de conflictos establecidos en nuestra Constitución de la República y en la ley, tales como la conciliación, la mediación y el arbitraje, se fortalecen y se integran.

### **Análisis Comparativo:**

Se realizará una comparación con otras leyes del sistema jurídico ecuatoriano: “Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial y Código Orgánico General de Procesos.”



Las normas adjetivas y sustantivas de nuestro ordenamiento jurídico deben guardar armonía y correlación que viabilicen los mandatos dogmáticos y orgánicos de nuestra Constitución, razón por la cual hago referencia a las normas jurídicas contenidas en la Constitución, en el Código Orgánico de la Función Judicial y del Código Orgánico General de Procesos, que guardan armonía con este tema de análisis que es la oralidad.

Por mandato constitucional, los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes, a base de derechos de igualdad, no discriminación, acceso gratuito a la justicia, tutela efectiva imparcial y expedita, debido proceso y seguridad jurídica, conforme lo prevén los artículos 11, 75, 76 y 82 de la Carta Fundamental.

La Constitución de la República en el artículo 167, consagra que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones previstos en la Constitución.

La Constitución de la República en los artículos 168 y 169 prescribe que la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, fases y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral.

El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal.

El Código Orgánico de la Función Judicial en los artículos 7 y siguientes prevé que la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los principios de legalidad, jurisdicción y competencia, independencia, imparcialidad, unidad jurisdiccional y gradualidad, especialidad, publicidad, responsabilidad, servicio a la comunidad, dispositivo, concentración, probidad, buena fe y lealtad procesal, verdad procesal, obligatoriedad de administrar justicia, interpretación de normas procesales, impugnación en sede judicial de los actos administrativos.



Las facultades y deberes genéricos, facultades jurisdiccionales, facultades correctivas y facultades coercitivas de las y los juzgadores previstas en los artículos 129, 130, 131 y 132 del Código Orgánico de la Función Judicial deben desarrollarse a través de normas procesales que coadyuven a la cabal aplicación de los preceptos constitucionales, de las normas de los instrumentos internacionales y de la estricta observancia de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías procesales que orientan el ejercicio de la Función Judicial.

Es imperioso armonizar el sistema procesal actual a las normas constitucionales y legales vigentes, a través de un cambio sustancial que propone, bajo el principio de la oralidad, la unificación de todas las materias, excepto la constitucional y penal.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República y el numeral 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expide el CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS

Artículo 1.- Ámbito. Este Código regula la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y penal, con estricta observancia del debido proceso.

Artículo 2.- Principios rectores. En todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y los desarrollados en este Código.

Artículo 3.- Dirección del proceso. La o el juzgador, conforme con la ley, ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias.



En función de este principio, la o el juzgador podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones correctivas.

Artículo 4.- Proceso oral por audiencias. La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible.

### **Constitución del 2008**

El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de: Simplificación, Uniformidad, Eficacia, Inmediación, Celeridad y Economía procesal. Y harán efectivas las garantías del debido; no se sacrificará por la sola omisión de formalidades.

#### **Métodos alternativos de solución de conflictos**

Los medios alternativos de solución de conflictos consignados en la Constitución de la República y en la ley, tales como la conciliación, la mediación y el arbitraje, se fortalecen y se integran.

Art. 30.- Principio de colaboración con la Función Judicial.- Las Funciones Legislativa, Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, con sus organismos y dependencias, los gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, y más instituciones del Estado, así como las funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados y más servidoras y servidores que los integran, están obligados a colaborar con la Función Judicial y cumplir sus providencias.

La Policía Nacional tiene como deber inmediato, auxiliar y ayudar a las juezas y jueces, y ejecutar pronto y eficazmente sus decisiones o resoluciones cuando así se lo requiera.



Las juezas y jueces también tienen el deber de cooperar con los otros órganos de la Función Judicial, cuando están ejerciendo la facultad jurisdiccional, a fin de que se cumplan los principios que orientan la administración de justicia.

Las instituciones del sector privado y toda persona tienen el deber legal de prestar auxilio a las juezas y jueces y cumplir sus mandatos dictados en la tramitación y resolución de los procesos.

6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.

**El Código Orgánico de la Función Judicial** por su parte en el artículo 18 dispone: "El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades" (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009).

El artículo 4 del COGEP, en el tema del proceso oral por audiencias, establece que: "La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollará mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible".

El art. 95 del Código General de Procesos establece que "la dirección de las audiencias corresponderá exclusivamente a la jueza o juez competente y en la Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales y tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo y fiscales, a la jueza o juez ponente".

## **CAPITULO IV**



## 4.1.- Análisis crítico de casos prácticos

### 4.1.1 Caso Ordinario Abreviado por Daños y Perjuicios.

Debido a que todavía no está rigiendo de manera total el Código Orgánico General de Procesos, me voy a referir a un juicio ordinario abreviado por daños y perjuicios, regulado en el Código de Procedimiento Civil. He considerado este trámite por cuanto se asemeja al trámite del Código Orgánico General de Procesos, ya que se tiene que realizar el anuncio de prueba en la demanda. El caso es el siguiente: un ciudadano, licenciado, de 25 años de edad, desempeñaba su trabajo como profesor en una Unidad Educativa del cantón Gualaceo, provincia del Azuay. Mientras se encontraba impartiendo sus clases, el vehículo de su propiedad estaba estacionado en el parqueadero de dicha institución, de pronto un estudiante menor de edad, estaba manejando un vehículo Nissan Patrol, con dicho auto se realizaban las prácticas de mecánica automotriz en el colegio, este alumno con impericia e irresponsabilidad se estrella violentamente contra el automóvil del profesor, ocasionándole significativos daños materiales llegando hasta el punto de no poder encenderlo y de ser trasladado con una grúa. El señor profesor intentó llegar a un acuerdo con los implicados: padres del adolescente, autoridades de la institución; a quienes nunca les intereso solucionar el problema.

Se les demanda a los padres de familia, al rector, al inspector y al jefe de talleres, debido a que son todos solidariamente responsables, conforme lo establece el artículo 2220 del Código Civil: "Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de los que estuvieren a su cuidado. Así, los padres son responsables del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa.

Así, el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado.

Así, los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, mientras están bajo su cuidado; y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso.



Pero cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho”.

Art. 2221.- “Los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de la mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir”.

En este caso la cuantía se fijó en tres mil quinientos dólares, dentro de este trámite ordinario abreviado, la particularidad es que, se deben anunciar las pruebas con la demanda, la parte actora anunció: prueba documental: un informe técnico presentado por un perito calificado por el Consejo de la Judicatura, ingeniero en mecánica automotriz y quien acudiría a la Audiencia de juicio para ser consultado. Se solicitó que se reproduzca todo lo que de autos sea favorable, el contrato de compra y venta del automóvil afectado, con lo que se demostraba el dominio sobre el mismo; se presentó un certificado otorgado por la Dirección Distrital de Educación de Gualaceo, con lo que se evidencia la calidad de rector, inspector y jefe de taller, de los implicados. Se adjuntaron fotografías, se acompañó a la demanda los datos de filiación del adolescente, una proforma del taller General Motors MIRASOL S.A, con lo que se determina el valor de los repuestos, se anuncia prueba testimonial de tres personas y se solicita que los demandados rindan confesión judicial personalmente.

La contestación de los demandados: los padres del adolescente y el señor jefe de talleres, comparecen con el mismo abogado, quienes deducen las siguientes excepciones: 1.-Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; 2.- Improcedencia de la acción; 3.- Illegitimidad de personería tanto activa como pasiva; 4.- La demanda planteada no cumple los requisitos formales de los artículos 67 y 407 del Código de Procedimiento Civil. 5.- Existe ilegal mala formación de la litis consorcio pasiva. 6.- Alegan en forma expresa nulidad de la acción, pues no se ha contado con el menor adolescente, requisito taxativo conforme lo establece el artículo 60 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Además indica que al Jefe de Talleres





le han demandado sin que exista razón jurídica para ello, lo que implica llamarle inmotivadamente a litigar, por lo que se calificará la demanda de maliciosa y temeraria en el momento oportuno. Señala que la Institución a la que supuestamente representa es pública y el automotor es propiedad pública, se debió notificar a la Procuraduría General del Estado, según el artículo 6 inciso segundo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado.

Cabe recalcar que el rector e inspector quienes a pesar de haber sido legalmente citados no comparecieron.

El proceso se deriva al Centro de Mediación de la Función Judicial, en la ciudad de Cuenca, con la finalidad de llegar a un acuerdo, la parte actora acudió, sin embargo ninguno de los demandados asistió el día y hora señalados.

Al no existir una conciliación, se declara iniciada la diligencia: en la Audiencia la señora Jueza multicompetente concede la palabra a la parte actora para evacuar la prueba anunciada, quien solicita: “téngase en consideración para los fines legales consiguientes: todo lo que de autos nos sea favorable, fundamentalmente por reproducida la documentación adjunta al libelo inicial”. En este estado se convoca al señor de profesión Ingeniero Mecánico, quien presente se toma el juramento de ley. Advertido de las penas de perjurio y de su obligación de decir la verdad con claridad y exactitud en su informe, acepta el cargo conferido y promete desempeñarlo conforme a Ley. Se receptaron las confesiones judiciales a los demandados; comparece la señora madre del adolescente, quien previo el Juramento de ley y de su obligación de decir la verdad con claridad y exactitud, dice: que su hijo estudia en el colegio Técnico Gualaceo, responde que su hijo estaba en el sexto curso cuando surgió el accidente; en la especialidad de Automotriz. Que sí conoce del accidente suscitado con el señor profesor. Lo que conoce es porque su hijo le contó que el accidente sucedió a las once y media de la tarde, por lo que llegaron a buscarla, que no sabía nada; su hijo estaba demostrando con su tesis de trabajo lo que como estudiante había aprendido, es decir, un armado de motor, responde que su hijo le contó que estaba manejando el carro, en una



cuesta; y el momento que culminada, los chicos del colegio de habían subido, y por el peso del vehículo el carro retrocedió y se produjo el accidente. Manifiesta que su hijo se encontraba conduciendo el vehículo. Llegó a tener conocimiento que a consecuencia del accidente se vio afectado el vehículo del señor profesor.

Comparece el señor Jefe de Talleres del colegio, quien previo el juramento de ley, y advertido de su obligación de decir la verdad con claridad y exactitud, manifiesta que es docente de Electromecánica y Matemáticas, que el taller automotriz está a su cargo. Que sabe aconteció el accidente, con el vehículo con el que se lleva las prácticas; responde: “Eran las exposiciones de prácticas por fin de año y es allí donde los alumnos exponían sus trabajos. Se día se produjo el accidente por lo cual nos tiene aquí. El vehículo afectado era del señor profesor”.

Ni el señor rector ni el Inspector estuvieron presentes. Por lo tanto en rebeldía de los mismo se continua con la diligencia; solicita la parte actora sea declarado confeso conforme lo dispuesto en el Inciso Primero del artículo 131 del Código Civil con lo cual se formula las preguntas.

Se solicita también en este momento el ingreso de las testigos, quienes son profesoras que laboraban en la Unidad Educativa del cantón Gualaceo. Al efecto, juramentada en forma legal y advertida de su obligación de decir la verdad con claridad y exactitud, dicen que laboran en el colegio de Gualaceo donde se produjo el accidente, responden que era un carro de color verde estaba manejando un estudiante, él se había impactado con el vehículo del señor profesor.

Se dispone exponer los alegatos a las partes procesales, se concede la palabra al actor, quien manifiesta: “Que la pretensión que hemos planteado en esta oportunidad es exclusivamente civil, esto es absolutamente importante que lo tengamos en consideración al momento de resolver, el motivo es para reclamar por los daños sufridos a consecuencia de un accidente; daño que tiene que ser resarcido, fundamentalmente porque no he tenido la obligación de



soportar la carga y los causantes de aquello tiene que hacerlo, de tal manera insisto lo que vengo a reclamar es la reparación de daños y perjuicios, en materia civil . Son conscientes todos los demandados, ya que ninguno de ellos se ha excepcionado. Léanse las contestaciones y lo único que se proponen son excepciones dilatorias; El Código. Civil es claro fundamentalmente artículo 2220 del Código Civil, la teoría objetiva: que quien genera un daño tiene que responder por ello; en la especie está demostrado que el causante del accidente fue el menor, la propia madre lo ha reconocido, en realidad no puede haber otra cosa. Se cumplió con lo que se tenía que justificar: la existencia de esta infracción, lo que ha quedado verificada; todos han declarado firmemente; lo que ha quedado visible la existencia del accidente con lo que resultó dañado el automóvil; en esta diligencia ha quedado comprobado el responsable; No hay excepción en competencia. Es un tema de civil. Hemos exigido el pago a los padres de menor. En lo demás advertimos nosotros en relación a la práctica de la prueba hemos sido suficientemente claros para justificar el hecho dañoso y la responsabilidad, por lo que se nos debe mandar a pagar. El perito ha declarado y ha expresado con claridad su informe, hasta se ha contrainterrogado al perito. Presentamos documentación con la demanda, el momento para impugnar esta documentación se encuentra en el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, estos tiene que hacer fe en el juicio. Respecto de la prueba testimonial la preocupación era saber quién era el responsable de los hechos y en esta ocasión sin mayor esfuerzo la señora madre se encargó de decir que fue el menor . Con la confesión del responsable del taller; las confesiones fictas también son claras. Hemos demandado a título personal, no hemos demandado al Estado. Para nosotros se ha probado el daño, es el responsable, que tiene que responder: sus padres, la resolución de su parte debe acoger nuestra pretensión; ordenar el pago de daños y perjuicios”.

Ser concede al palabra a la parte demandada para que alegue: “La defensa técnica no ha leído la contestación a la demanda, hemos impugnado todas las prueba presentadas; está impugnada la prueba; en cuanto al peritaje, el debido proceso Art. 76 tenemos el derecho a la contradicción, no fuimos



informados con el peritaje. Tener presente el Art. 60 de la Niñez y la adolescencia, es orgánico necesariamente tenía que notificarse al adolescente, es sujeto de derechos, tenía que estar presente; en cuanto a las confesiones judiciales han sido circunstanciales. El perito cuando ha sido interrogado nunca ha sido posesionado, le pagaron los actores sus honorarios; no se dio lectura al informe pericial. Se ha manifestado que no se ha demandado a la institución”.

En contrarréplica, el actor dice: “Primero; las confesiones judiciales; dos aspectos CIRCUNSTANCIAL; No hemos necesitado testigos presenciales, hemos acumulados pruebas para conseguir la verdad.- SEGUNDO, creo que ante la manifestación de la madre no hay otra fuerza jurídica que desbarate este particular.- TERCERO, la validez de las confesiones fictas, sabemos que se tiene el valor, no sirven para nada, sin embargo cobran mucha fuerza cuando ha y otras pruebas que pueden permitir administrar justicia. Se tiene que reparar el daño por responsabilidad por hechos ajenos. Las demanda es subsidiaria”

Se corre traslado a la parte contraria: “La parte actora dice haberse comprobado; se sabe que ese día había mucha gente, y no se ha presentado un testigo”.

Respecto a lo manifestado, en lo que fuere legal para el momento procesal oportuno; por así determinar el Art. 407 del Código de Procedimiento Civil, corresponde pronunciarse a la señora Jueza, por considerar que la misma y la prueba no ha sido actuada conforme manda la Ley, DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA

Llega el momento de emitir la resolución motivada pertinente, para así hacerlo, se ponen de manifiesto las siguientes reflexiones: PRIMERO: VALIDEZ PROCESAL. La causa se ha sustanciado con arreglo a la normativa propia del juicio ordinario determinado en el Art. 407 del Código de Procedimiento Civil, observando las solemnidades comunes a todos los juicios e instancias por lo que su validez se declara. SEGUNDO: CARGA DE LA PRUEBA. En la forma como se traba la litis, incumbía a cada parte la carga de



la prueba de lo argüido en la demanda y contestación, con excepción de los hechos que se presumen conforme a ley, en los términos que prescriben los Arts. 113 y 114 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: TRANSGRESION DE LA NORMA. En forma preliminar se analiza inmediatamente, si se ha transgredido lo que dispone el artículo 169 de la Constitución de la República, que se fundamenta en que la norma suprema dispone que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades, “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la Justicia por la sola omisión de solemnidades”; CUARTO.- En el presente caso se demanda a los señores padres del menor involucrado; la parte demandada si bien manifiesta que se debía contar con el menor en este caso, conforme lo dispuesto en el Código de la Niñez y Adolescencia; no obstante son precisamente los demandados, quienes a través de su patrocinador, en la Audiencia de Conciliación y Juzgamiento en sus alegatos hacen referencia al Art. 2220 del Código Civil que textualmente dispone: “Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de los que estuvieren a su cuidado. Así, los padres son responsables del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa. Así, el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado. Así, los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, mientras están bajo su cuidado; y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso. Pero cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho.” En el caso que nos ocupa han sido demandados los representantes del menor. Y lo que aquí cabe es llegar a justificar la responsabilidad del hecho que se le atribuye. QUINTO: EVACUACION DE LA PRUEBA. De las Confesiones Judiciales y declaraciones testimoniales actuadas por la parte accionante “Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, y que ha negado el reo...”; es decir, al no estar



probado que el causante del accidente sea el menor, pues una cosa es que el mismo; tal vez, estuvo manejando el automotor antes del accidente y otra cosa diferente es determinar cuáles fueron las causas que ocasionaron la colisión del mismo, por lo que la responsabilidad del menor y la obligación que de ella derivare no se ha demostrado. SEXTO: DETERMINACIONES JURÍDICAS QUE IMPOSIBILITAN ACCEDER A LA PRETENSIÓN DEL ACTOR. En la especie, se optó demandar por la vía ordinaria especial (Art. 407 C.P.C), Daños y Perjuicios, en base de los presupuestos fácticos que han esgrimido los demandantes, y con la cuantía que han fijado, más no se ha demostrado fehacientemente la responsabilidad del menor involucrado; más la suscrita considera que no se han tenido presente una de las garantías primordiales del debido proceso (Art. 76 numeral 4) de la Constitución de la República así como lo dispuesto en el Art. 75 Ibídem, es decir las medidas procesales para asegurar un juicio imparcial, en el que se posibilite en forma plena el ejercicio de los derechos a la acción y a la defensa, de tal modo que las partes en litigio obtengan de los órganos judiciales tutela efectiva, imparcial y expedita; y concretamente el numeral 7 literal a) de la norma invocada: “Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento”. En el caso que nos ocupa no se ha dado cumplimiento a lo establecido en la norma antes referida al existir un peritaje preexistente, el mismo que se adjunta a la demanda, sin permitir que la parte contraria como ya se indicó se refiera al mismo. Devis Echandía, (Teoría General del Proceso, 2ª edición, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1997, p. 377) al respecto, advierte que no debe creerse que las solemnidades de los actos procesales “obedecen a simples caprichos, o que conducen a entorpecer el procedimiento en perjuicio de las partes. En realidad se trata de una garantía de los derechos y de las libertades individuales, pues sin ellas no se podría ejercitar eficazmente el derecho de defensa”. El mismo autor nos recuerda que Couture opina que una de las garantías constitucionales más importantes es la del debido proceso con sus secuelas de la garantía de defensa, de petición, de prueba y de igualdad ante los actos procesales, y que nada de esto se conseguiría sin la previa regulación de las formas de los actos procesales, que son la única manera de hacer



efectivas esas garantías. SEXTO: RESPONSABILIDAD CIVIL.- Al estar demandados los padres del menor y los señores en sus calidades de Rector, Inspector General y Docente encargado del taller de Mecánica del Colegio Técnico Gualaceo, en su orden por no tener el debido cuidado y diligencia al permitir el acceso de las llaves del vehículo a los estudiantes y por no tener el deber objetivo de cuidado hacia sus alumnos; pese a ser declarados confesos los señores Cando y Grijalva en la Audiencia respectiva; y, de la Confesión rendida por el Jefe de Talleres; y demás prueba aportada por la parte actora, caben las siguientes consideraciones: Como regla general que gobierna al punto, la responsabilidad civil tiene establecida nuestra legislación que todo aquel que ocasione un daño a otro es obligado a su reparación. Art 2214 del Código Civil: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.”. Es decir que la responsabilidad civil, así entendida persigue trasladar las consecuencias del “quebranto padecido por el actor, en orden al retorno de aquella en su situación anterior, específicamente de ser factible y de no en dinero, dentro de un criterio social de justicia y solidaridad, con determinación de quien ha de sufrir las consecuencias que derivan del acontecimiento, así como la responsabilidad emergente de un daño, o sea de la lesión de un interés jurídicamente protegido que de este modo adquiere una determinada relevancia. Demostrada la autoría de la conducta dañosa, el daño y perjuicio sufrido por el demandante, se impone entonces conforme lo dicho su indemnización; los daños materiales comprenden el lucro cesante y el daño emergente, los dos deben ser demostrados, conforme a las reglas que rige la carga de la prueba, so pena de no prosperidad de la pretensión indemnizatoria; y, al NO haberse cumplido a cabalidad con esa carga procesal, no se ha podido establecer la responsabilidad de los demandados, ni mucho menos obligaciones que estos hayan adquirido con el actor. SÉPTIMO: DECISIÓN: En la especie, por lo expuesto, y sin otras consideraciones la suscrita Jueza de la Unidad Multicompetente Primera de lo Civil del cantón Gualaceo “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR





AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, declara sin lugar la demanda sin costas ni honorarios que regular.

#### **4.1.1 Comentario personal referente al fallo considerado.**

COMENTARIO PERSONAL: Consideré el análisis de este caso porque lo conocí muy de cerca, sin embargo, he intentado ser lo más objetiva posible con esta situación y he advertido que la oralidad es un instrumento muy poderoso, pero que requiere mucha preparación por parte de quienes administran justicia, en este caso en concreto pese a que los demandados estaban conscientes del daño que causaron, no quisieron llegar a un acuerdo, no buscaron una solución extrajudicial, razón por la cual, el afectado acude a la administración de justicia. El actor es oriundo de la ciudad de Cuenca y conjuntamente con su prestigioso abogado patrocinador se trasladaron a Gualaceo para asistir a la Audiencia, a la que fueron convocados por tres ocasiones. La primera vez no se llevó a cabo por razones internas, la señora jueza comunicó que no estaba en posibilidad de pasar la audiencia por la carga procesal y la segunda vez por razones formales relacionadas con un acta de mediación, pese a que el proceso ya llegó el día anterior con dicha razón, por fin, se lleva a cabo la audiencia en la tercera convocatoria, violentándose completamente los términos establecidos en la ley. En la Audiencia se notó la apatía hacia el abogado patrocinador del actor por parte de la señora jueza, quien hacía notoria su incomodidad, incluso el abogado de los demandados mientras contestaban el interrogatorio realizaba señales induciendo a la respuesta y la señora jueza hizo caso omiso. Además, el señor secretario no estaba debidamente preparado, interrumpía constantemente el avance de la audiencia y al momento de concluida la misma, nos hizo esperar dos horas para entregarnos el acta y firmarla, que a más de la demora estaba plagada de faltas ortográficas (considero que somos seres humanos proclives al error, pero dichas faltas eran imperdonables y garrafales, más aún, porque provenían de un abogado secretario que debe estar debidamente formado profesionalmente para desempeñar su trabajo), encontramos errores como: “aviamos” en lugar de habíamos. Luego, inconsistencias en el testimonio de la señora madre del



adolescente que el secretario lo hizo constar así: “que estaban demostrando con su tesis de trabajo lo que como estudiante había demostrado, la demostración consistía en demostrar las prácticas”. “Estube” en lugar de estuve, “inoportunidad” en lugar de oportunidad, “reparación de daños y perjuicios” en lugar de daños y perjuicios, “acumulados un cúmulo” y para mayor sorpresa hace constar en el acta que el abogado del actor dijo: “se dice que no se ha practicado conforme a la ley y eso es cierto” nunca fue dicho por el profesional de derecho, afortunadamente existe el respaldo de las grabaciones; razón por la cual el actor sintió desconfianza por la administración de justicia, sintió tedio, se sintió perjudicado.

Haciendo referencia a un análisis jurídico, considerando que como estudiante de la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, el hecho de prepararme diez ciclos, me permite formar un criterio y más aún en materia civil. En esta causa se está demandando a los padres, al rector, al inspector y al jefe de talleres como personas naturales, basándonos en el deber objetivo de cuidado, no a la institución, ni al adolescente; de ser así hubiéramos tomado otras vías como la Contencioso Administrativa o la Niñez y Adolescencia, pero no era el caso, tampoco lo consideramos en el ámbito de la Legislación de Tránsito, razón por la cual se acudió a la vía civil, sin embargo, no se da lugar a la demanda. Además, el abogado de los demandados propone la excepción de negativa de los fundamentos de hecho y de derecho, situación que me sorprende, pues niega la ley y la existencia del accidente, a pesar de que ninguno de los demandados lo negó, sino más bien reconocieron que sí sucedió, además se atreve a calificar a la demanda como maliciosa y temeraria, situación que deja mucho que pensar sobre la formación profesional y moral del abogado de los demandados, que por obtener dinero, perjudica y manipula a su conveniencia, tal como se vio persuadiendo a sus defendidos con señales y se notaba claramente como inventó los hechos y manipuló a sus defendidos, personas honestas que no sentían cómodas mintiendo, razón por la que la señora madre confesó la realidad. Sorprende también que se haga caso omiso a lo que en un gesto de honorabilidad dijo la madre del adolescente que si era él quien chocó.



Referente al perito estaba acreditado por el Consejo de la Judicatura y asistió a la Audiencia para ser consultado ante la señora Jueza. Al leer la sentencia daba la impresión de que era favorable sin embargo se declaró sin lugar la demanda. Consciente estoy de que en la vida los seres humanos ganamos y en ocasiones perdemos, sin embargo la injusticia y la inseguridad jurídica en la administración de justicia, deja un sin sabor que produce impotencia y más aún por parte de los usuarios que se sienten decepcionados de la misma.

Motivo por el cual se apeló la sentencia a la Corte Provincial de lo Civil y lo Mercantil, porque se consideró que habían méritos suficientes para conseguir una sentencia justa y por conocer que los jueces más capacitados están en la sala provincial, nos encontramos con la sorpresa de que uno de los jueces más prestigiosos y honestos, fue cambiado a desempeñar otras funciones administrativas, confiamos en la administración de justicia y esta fue la sentencia:

“En el caso concreto se observa que se ha presentado esta demanda en contra de autoridades y funcionarios del Colegio Técnico Gualaceo, en consecuencia al tratarse de una institución pública se debía dar cumplimiento con lo que dispone el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado que manda que “El Procurador General del Estado es el representante judicial del Estado”, disposición que en concordancia con lo que dispone el artículo 3 que se refiere a las funciones del Procurador General del Estado indica que “Corresponden privativamente al Procurador General del Estado, las siguientes funciones: d) Representar al Estado Ecuatoriano y a las entidades del sector público en cualquier juicio o reclamo que deban proponer o que se plantee en su contra en otro Estado de acuerdo con la Constitución Política de la República, los tratados o convenios internacionales vigentes y las leyes del Estado Ecuatoriano.” Y finalmente de conformidad con lo que dispone el artículo 5 literal b del mismo cuerpo normativo “Del ejercicio del patrocinio del Estado.- Para el ejercicio del patrocinio del Estado, el Procurador General del Estado está facultado para: b) Intervenir como parte procesal en los juicios penales, controversias y procedimientos administrativos de impugnación o



reclamo, que se sometan a la resolución de la Función Judicial, tribunales arbitrales y otros órganos jurisdiccionales, en los que intervengan los organismos y entidades del sector público, que carezcan de personería jurídica;...”. Como se ha indicado anteriormente revisado el proceso el Tribunal encuentra que no se ha dado cumplimiento con la normativa antes indicada pues no se ha contado en esta causa con la intervención del señor Procurador General del Estado o su delegado, lo cual evidentemente incide en la falta de legitimación AD CAUSAM, que consiste en la vinculación de un sujeto con un objeto litigioso determinado que le habilita para solicitar una sentencia de fondo, tratándose de una cuestión preliminar, ya que consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito, que determina una aptitud o idoneidad para ser parte procesal pasiva, impidiendo en consecuencia pronunciarnos sobre el derecho sustancial discutido, puesto que no se configuró la relación procesal en forma correcta. DECISIÓN.- Por lo que este Tribunal de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de justicia del Azuay en base a estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA desechando el recurso de apelación interpuesto, en sentencia inhibitoria declara sin lugar la demanda, con costas pero sin honorarios que regular en esta instancia.”

#### **4.2 Análisis de un segundo caso: incidente de rebaja de pensiones alimenticias.**

JUICIO: En la ciudad de Cuenca, se constituye el Juzgado de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca, con el objeto de llevar a cabo la AUDIENCIA ÚNICA DENTRO DEL INCIDENTE DE REBAJA DE PENSIÓN ALIMENTICIA, señalada para este día y hora. Comparece el actor señor acompañada de su abogada defensora y por otra parte la señora en calidad de Representante legal de su hija quien mantiene una discapacidad mental, madre del beneficiario, acompañada de su abogada defensora, la reclamada da contestación a la demanda en los siguientes términos: se opone a la misma puesto que no existe motivo para haberla planteado ya que la



situación del actor no ha variado. Por clara y completa se califica la contestación a la demanda que presenta la señora en su calidad de representante de la madre del beneficiario en esta causa. Continuando con la audiencia se evacúan medios probatorios anunciados por el actor, Comparece la señora quien responde al cuestionario de preguntas: 1.- Que si le conoce al actor en este incidente. 2.- que el actor no está trabajando. 3.- Que no percibe ingresos por alguna actividad económica. Repreguntas que formula la demandada: responde a la: 1. Que el actor tiene casa propia. 2.- Que el actor no es propietario de vehículo. 3.- Que conoce de lo expuesto por cuanto pasa a dejarle a su hija a la escuela al igual cuando regresa y le ve en la casa del mismo. La defensora del actor manifiesta que prescinde de la declaración de la otra testigo por cuanto no ha traído sus documentos personales. De igual forma manifiesta que prescinde de evacuar la declaración directa solicitada a la reclamada. Por secretaria se da lectura en forma resumida a la prueba documental anunciada y presentada. La defensora del actor manifiesta que se encuentra conforme con los medios probatorios anunciados y evacuados en esta audiencia. La demandada evacua sus medios probatorios; se recepta la Confesión judicial de actor en este incidente: 1. Que el adolescente es su único hijo aclarando que tiene otros hijos, todos mayores de edad, de estado civil casados. 2.- Que es verdad que el beneficiario en este proceso se encuentra estudiando en el Colegio. 3.- Que es verdad que la madre de su hijo tiene una discapacidad severa. 4.- Que es verdad que es propietario de una casa de habitación aclarando que es pequeña y es de bloque. 5.- Que todos los sábados realiza compras para su subsistencia en compañía de su cónyuge. 6.- Que en la semana gasta unos treinta dólares para subsistencia ya que son solo dos personas. 7.- Que no dispone de telefonía celular. 8.- Que quienes cubren los gastos del confesante y su cónyuge son sus hijos. 9.- Que antes se dedicaba a pintar casa actualmente no realiza ninguna actividad. 10.- Que no es jubilado. 11.- Que subsiste por el apoyo de sus cinco hijos quienes colaboran en forma proporcional y semanalmente. 12.- Que sus hijos le ayudan en forma semanal. 13.- Que su cónyuge tampoco realiza ninguna actividad laboral. 14.- Que no conoce sobre la situación económica de la abuela de su



hijo. 15.- Que si cancela los servicios básicos. 16.- Que no aporta voluntariamente al IESS. El suscrito consulta si recibe apoyo del Gobierno a lo cual el confesante responde que no recibe ningún apoyo. Por secretaria se da lectura en forma resumida en la prueba documental anunciada y presentada en esta audiencia; la defensora de la reclamada expone que se encuentra conforme con la prueba. Encontrándose la causa en estado para resolver para ello se considera: PRIMERO.- Comparece el actor y en formulario para demanda de rebaja/disminución de pensión de alimentos demanda a la señora. Establece como fundamentos de hecho que junto con su cónyuge tiene la edad de 72 y 75 años, en su orden, son mayores adultos, están dentro del grupo de personas de atención prioritaria, no trabaja, sobreviven por ayuda del gobierno, con lo que cobran el bono de desarrollo humano. Los fundamentos de derechos en los que sustenta son el Art. innumerado 42 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia. Demanda la rebaja de la pensión de alimentos para su hijo a \$75,00 mensuales. Establece la cuantía. Anuncia los medios probatorios. Aceptada la demanda para su trámite y ordenada la citación a la demandada, constancia de la misma obra a fs. de los autos. SEGUNDO.- Que habiéndose observado en la tramitación de la causa, las garantías del debido proceso y seguido el trámite establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se declara la validez procesal. TERCERO.- El Art. 44 de la Constitución Política de la República determina que el “Estado, la Sociedad y la Familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderán al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas...”. El derecho a alimentos es connatural a la relación parento filial y está relacionado con el derecho a la vida, supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; Educación; Cuidado; Vestuario adecuado; Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; Transporte; Cultura, Recreación y



Deportes; y, Rehabilitación y ayudas técnicas si el derecho habiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva.” El artículo innumerado 5 establece que la obligación de la prestación de alimentos corresponde a los padres como los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad...”. El Art. 9 del mismo Código en concordancia con el Art. 83 numeral 16 de nuestra Carta Fundamental, dispone “Asistir, alimentar, cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también...”. CUARTO.- El Art. 42 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia establece que “...Si cualquiera de las partes demostrare que han variado las circunstancias y hechos que sirvieron de base para la resolución que fija la pensión alimenticia, el Juez podrá revisar y modificar la resolución, previo el procedimiento establecido en este capítulo....”. QUINTO.- Se ha convocado a las partes a audiencia única para este día y hora, lo cual ha sido notificado a las partes en sus domicilios legales, fs. 131 vta. En audiencia única cada una de las partes evacua los medios probatorios anunciados conforme consta del acta que antecede. SEXTO.- No se ha señalado una pensión provisional, por la naturaleza de la causa

Con el testimonio que rinde el testigo que anuncia el accionante en atención a las reglas de la sana crítica esta judicatura no la considera ya que lo que atestigua lo hace por cuanto es vecina del demandado, sin embargo esta manifiesta que conoce de los hechos por cuanto pasa una vez al día por la casa del demandado y le ve en su casa. A fs. 115 consta la partida de nacimiento del beneficiario y a fs. 116 una partida de nacimiento que no se la puede leer por cuanto esta mutilada, toda esta prueba actuada por el actor. La demandada en audiencia presenta prueba documental mismas que no ha sido objetada ni impugnada por el actor en el incidente de la cual se puede considerar un certificado de estudios del beneficiario por medio del cual se conoce que se encuentra estudiando; certificado de discapacidad de la madre de su hijo quien mantiene una discapacidad intelectual de 92%, nivel severo, con un diagnóstico retraso mental grave deterioro del comportamiento significativo que requiere atención; así como facturas por atención médica,





exámenes de laboratorio, útiles escolares etc. Con la declaración directa que rinde el actor se puede conocer que este es propietario de una casa de habitación, que tiene cinco hijos todos mayores de edad, quienes le ayudan en forma permanente para su subsistencia. El accionante en esta causa manifiesta en los fundamentos de hecho de la demanda que: "...junto con su cónyuge tiene la edad de 72 y 75 años, en su orden, son mayores adultos, están dentro del grupo de personas de atención prioritaria, no trabaja, sobreviven por ayuda del gobierno, con lo que cobran el bono de desarrollo humano...", al respecto el Art. 113 del Código de Procedimiento Civil dispone que: "...Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio..." y el Art. 114 de la ib. dispone que: "...cada parte está obligada a probar los hechos que alega...". El Art. 42 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia establece que, si cualquiera de las partes demostrare que han variado las circunstancias y hechos que sirvieron de base para la resolución que fija la pensión alimenticia, el Juez podrá revisar y modificar la resolución. En el presente caso el accionante no ha justificado lo dispuesto en la norma antes invocada esto es que han variado las circunstancias y hechos que sirvieron de base para haber fijado la pensión de alimentos, ya que con la prueba que actúa esta es contraria a lo que manifiesta en los fundamentos de hecho de su demanda, por un lado expone que recibe ayuda de sus hijos, mientras que en los fundamentos de hecho manifiesta que recibe el bono de desarrollo humano que brinda el gobierno a las personas de bajos recursos, lo cual incluso preguntado por el juzgador este manifiesta que no lo recibe, existiendo contradicción al momento de declarar; por otro lado este es propietario de una casa de habitación por la cual no paga arriendo, mientras que hijo actualmente tiene quince años cinco meses, se encuentra estudiando y requiere el apoyo de su padre, por cuanto su madre mantiene una discapacidad intelectual severa en un 92%, retraso mental que tiene al deterioro físico de la misma y es su abuela materna quien viene cuidado de su nieto y además de su hija, madre del beneficiario, situación humana que debe ser considerada en forma especial por el alimentante, quien debe realizar una reflexión al respecto, esta es que la



madre de su hijo es una persona discapacitada y se encuentra también dentro de las personas con atención especial que garantiza el Art. 35 de la Constitución de la República, por otro lado el actor, si bien es una persona de la tercera edad sin embargo en forma permanente recibe ayuda económica de sus cinco hijos todos mayores de edad, como el mismo lo ha expuesto; por la argumentación que antecede esta judicatura considera que el actor no ha justificado los fundamentos de hecho y de derechos constantes en el formulario de su demanda por lo que el suscrito Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca, en uso de sus atribuciones legales RESUELVE: declarar sin lugar el incidente de rebaja de pensión de alimentos.

#### **4.2.1 Comentario personal referente al caso considerado.**

COMENTARIO PERSONAL: Como estudiante de la Escuela de Derecho, realicé mis prácticas pre profesionales en el Consultorio Jurídico Gratuito “Gerardo Cordero y León” que pertenece a la Facultad de Jurisprudencia, ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca”, en el que he podido vincularme aportando con la sociedad y de cierta manera retribuyéndola, comprendiendo la importancia de la abogacía en conseguir justicia social, colocándome en el lugar del usuario, quien a más de permitirme poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, me ha convertido en su confidente. Uno de los casos que personalmente más satisfacción y confianza en la administración de justicia me ha causado es el siguiente: Una tarde mientras realizaba mi turno en el Consultorio Jurídico, una señora de aproximadamente 55 años de edad, muy seria y reservada, se acerca y me consulta qué debe hacer para dar contestación a un incidente sobre una disminución de pensión alimenticia, respondo a su consulta, aparentemente un trámite muy sencillo. Tres días después la señora regresa y me dice que desea que le patrocinemos en el Consultorio y me haga cargo de su caso, poco a poco va adquiriendo confianza y me cuenta la realidad social en la que vive ella y su hija, una señora de 27 años que padece de discapacidad intelectual de 92 por ciento, quien fue abusada sexualmente por un hombre de 65 años de edad (quien ya cumplió su condena en el ámbito



penal y en la actualidad está libre), la señora demandó alimentos y el alimentante de forma totalmente desleal asesorado y acompañado de su abogada solicitan una disminución de pensión alimenticia argumentando que es de la tercera edad, que pertenece a un grupo de atención prioritaria, que no puede trabajar por su edad y que sobrevive por ayuda del Bono de Desarrollo Humano, además que se encuentra muy enfermo. Se lleva a cabo la Audiencia correspondiente, nos oponemos a la rebaja de pensión alimenticia, pues la situación económica del alimentante no ha variado y además las necesidades del adolescente se van incrementando, al evacuar los medios probatorios, la prueba testimonial presentada por el alimentante, una señora que es su vecina menciona que él tiene casa propia, al verse descubiertos deciden prescindir de la declaración de la otra testigo mencionando que no trae consigo documentos personales. El alimentante tiene otros hijos todos mayores de edad. Mencionamos que el niño beneficiario se encuentra estudiando, que la madre tiene discapacidad severa, que el alimentante es propietario de una casa, que sus hijos mayores de edad cubren sus gastos, que subsiste por el apoyo económico de sus cinco hijos, dice que si recibe el bono de desarrollo humano y al ser consultado en la base de datos no es cierto. El señor juez actúa como director del proceso, demostró interés, miró a los ojos en las declaraciones y se dio cuenta de que no se decía la verdad, razón por la cual resolvió justamente considerando situaciones sociales que son una realidad humana, el Doctor Felipe Torres Borja, Juez, cumplió con las expectativas y nos dio una visión de los beneficios de la oralidad en la administración de justicia con un Juez director y capacitado.

## **CAPITULO IV**

### **4.1. Comentario de profesionales del Derecho respecto a la oralidad en el Código Orgánico General de Procesos.**



## **DOCTORA CATALINA MENDOZA.**

### **Profesora Universitaria.**

#### **Jueza de la Sala Provincial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Azuay**

“Pienso que el tema tendría que ser analizado desde el punto de vista del objetivo de la oralidad y también desde el punto de vista de las condiciones para que se implemente efectivamente la oralidad. Es plausible que el país camine hacia la oralidad porque es el mecanismo que le permitiría a la administración de justicia, primero hacer efectivo el principio de inmediación que no siempre se ha hecho efectivo, porque hemos estado más acostumbrados a relacionarnos con un expediente, otra cosa es escuchar a los sujetos procesales, otra cosa es que los abogados se preparen, porque hoy en día, se requieren abogados y abogadas preparadas, yo puedo poner en el papel una serie de alegatos, pedidos, demandas, pero otra cosa es enfrentarse con la contraparte y expresarle al Juez o al Tribunal las demandas, pedidos concretos que estoy haciendo y fundamentar el por qué lo hago, si una abogada o un abogado no está adecuadamente preparada o preparado, una audiencia oral le va a ser muy difícil sobrellevar, la audiencia oral también le va a permitir al sujeto de derecho, al cliente, al usuario; saber si es que cuenta con una adecuada defensa técnica y saber si es que esa defensa técnica le permite ejercer sus derechos. Entonces la oralidad y el contexto en el que se viene le va a permitir al país enfrentar una serie de retos, a los diversos actores de la administración de Justicia, creo que en ese sentido es positivo que nos estemos preparando hacia la oralidad, sin embargo habría que ver desde el punto de vista de las condiciones reales para la implementación de la oralidad si es que estamos o no preparados y desde mi personal punto de vista, si bien creo en la oralidad y en las posibilidades y oportunidades que esto le permite a la administración de justicia, creo también que la decisión ha sido una decisión vertical porque se adoptó un nuevo Código Orgánico General de Procesos y es después de su adopción que los operadores de la administración de justicia nos estamos preparando para la oralidad, cuando debió ser diferente, debimos



ser los actores quienes seamos parte de la construcción de la ley. Nuestra Constitución garantiza la participación de la gente en la elaboración de las leyes y de las políticas públicas, la ley no puede ser elaborada por un grupo de expertos, es ahora cuando nos estamos dando cuenta de las falencias del nuevo Código Orgánico General de Procesos, falencias que nos pudimos haber dado cuenta si es que el proceso de elaboración de la ley era un proceso realmente participativo en donde se hubiesen convocado a los Jueces y Juezas, se hubiese convocado a abogadas y abogados, se hubiera convocado a los usuarios y a otras personas que son parte de la administración de justicia o del contexto de la administración de Justicia, tengo la impresión de que por cumplir con un parámetro internacional en cuanto a lo que significan los parámetros para la administración de justicia, se aprobó la ley, pero no se aprobó como debió haberse aprobado con una amplia participación de expertos y también de la ciudadanía, esa es la primera dificultad, la segunda dificultad es que nos estamos formando en formatos de audiencias: cómo hacer la audiencia, pero no nos estamos formando en cómo escuchar a la gente, si estamos viviendo un sistema oral debemos estar capacitados o adiestrados en abrir nuestra mente y generar destrezas para escuchar, pero si no generamos esas destrezas va a ser muy difícil que en serio la audiencia oral sea una audiencia oral para escuchar, no una audiencia oral en la que simplemente cumpla un formato, cómo entro, cómo me presento, qué derechos, etc., debemos estar preparados para escuchar y yo no sé qué tan preparados estemos para escuchar después de haber estado décadas inmersos en papeles, ¿Qué significa escuchar? Poner atención, identificar los pedidos prioritarios, las demandas centrales, no es sólo la técnica, básicamente la oralidad nos debería formar a los profesionales del derecho en una demanda real que tiene el ciudadano o usuario y no en la formalidad de la audiencia, en las clases de apelación, ni en las clases de concesión de recursos que es fundamental pero no es lo único, ¿estamos preparados para escuchar? personalmente pienso que no, en este sistema que vivo actualmente, el contexto del país me muestra que no se escucha a la gente, no se escucha ni siquiera a los administradores de justicia, se nos imponen resoluciones,



decisiones; entonces estamos generando una cultura de las imposiciones, no la cultura del escucha, del diálogo, nos piden que generemos, por ejemplo, procesos de resolución alternativa de conflictos, ¿cómo? ni no aprendemos a resolver los problemas de nuestros propios compañeros de trabajo, si vivimos en una cultura de la competencia, si nos hacen competir a los jueces por el mejor puntaje, por quien más causas resuelve, entonces si nosotros decimos hay que generar la resolución alternativa de conflictos, pero al mismo tiempo vivimos en una administración de justicia vertical, impositiva, ¿cómo se va a generar este cambio en la administración de justicia? y la última dificultad que yo le veo es que en el contexto de crisis económica que vive el país las causas que están pendientes, las causas que van a venir rezagadas, van a hacer que no se cumplan los términos que nos da el nuevo sistema y en otros países conozco que el sistema colapsó y fue necesario que se busquen mecanismos para que si no se puede dictar la resolución, el veredicto en ese momento, lo va a tener que hacer después y la idea era que la oralidad le permita al juez con los elementos que le proporciona en ese momento el usuario y la defensa técnica se forme un idea y resuelva, pero con la sobrecarga de trabajo que tenemos y sobre todo mis compañeros de primera instancia ¿cómo van a poder ellos cumplir adecuadamente la oralidad si no es estudiando ya el proceso de antemano?, les va a tocar estudiar el proceso, preparar y tener una idea, hacer la audiencia y resolver conforme ellos ya se formaron una idea anterior, entonces a nosotros nos va a tocar poner en una balanza: los retos, los objetivos de la oralidad y también las condiciones adversas y a partir de allí hacer nuestro mejor esfuerzo para hacer que el sistema funcione realmente”.

### **DOCTOR JOSÉ ANDRADE VÉLEZ**

#### **Director del Consejo de la Judicatura del Azuay.**

“El Código Orgánico General de Procesos no es un simple cambio de leyes, es un cambio de sistema, es un cambio revolucionario en el área civil en la historia republicana del Ecuador, porque si bien en el área penal hemos estado de una u otra manera en la oralidad, en lo civil siempre hemos estado en un sistema escrito, entonces pasamos de un sistema en que todo se hacía a



través de papeles, un sistema epistolar en el cual los abogados se comunicaban con el juez a través de escritos y el Juez también se encerraba en su despacho y a través de escritos les devolvía mediante las casillas judiciales, es decir, un sistema de cartas entre abogados y las partes, podía llegarse a un extremo de que el abogado nunca vio a las partes, que no necesariamente debían estar presentes, también se daba el caso de que las pruebas se iban haciendo durante la etapa de prueba y que podían demorarse mucho tiempo. En el sistema escrito se podían delegar funciones, el Juez a veces no tomaba las resoluciones directamente, sino le encargaba al secretario o al auxiliar que le dé tomando y luego de meses o de años resolvía revisando expedientes. Ahora toda la prueba se realiza en una sola audiencia oral, pública y contradictoria, se escuchan en esa misma audiencia todos los alegatos jurídicos de las partes y el juez en esa misma audiencia resuelve, entonces es evidente que una de las primeras ventajas y la más aceptada es la agilidad, la rapidez, la celeridad que garantiza la Constitución, sin embargo también es importante resaltar que el resultado puede ser mejor, revisar expedientes que van acumulándose a través de los meses y los años para resolver sobre una prueba que recién se la está presenciando, toda la recepción de la prueba, entonces la calidad del resultado es evidente que va a ser mucho mejor, se van a disminuir, eliminar no es posible, las posibilidades de error en las resoluciones”.

## **DOCTOR JORGE MORALES ÁLVAREZ**

### **Profesor Universitario**

### **Jurista**

“En general y no solamente en el tema de la oralidad el Código Orgánico General de Procesos tiene un antecedente histórico que es muy rico en contenidos, se trata precisamente del Procedimiento Civil Romano que es conocido propiamente con el nombre de Procedimiento Formulario nombre que debería ser empleado inclusive en la actualidad porque obedece a las necesidades que actualmente se han detectado para justificar la existencia de





este nuevo código de procesos generales. Yendo a la materia el Código Orgánico General de Procesos, básicamente divide al proceso en dos etapas: la fase de la audiencia preliminar y la fase de la audiencia de juzgamiento que es exactamente igual a las fases que componían el procedimiento civil o procedimiento formulario romano sino que el procedimiento formulario romano conocía a estas fases con nombres mucho más apropiados, mucho más significativos y ricos en conocimiento, es así como la primera fase del derecho civil romano era conocida como fase *In lre* digamos ahora sería la Audiencia Preliminar y la segunda etapa del procedimiento formulario romano era conocida con el nombre de Procedimiento *Apud Iudicem*, es decir en la que las partes debían presentarse para el juzgamiento ante el juez, ahora a la segunda audiencia conocida con el nombre de Audiencia de Juzgamiento. En la primera fase del procedimiento formulario conocida con el nombre de fase de derecho era una fase en la que básicamente se daba una depuración de las acciones y de las excepciones que actualmente correspondería a la Audiencia Preliminar en la que justamente lo que discuten las partes son aquellas excepciones que se van a aceptar y aquellas que no se van a aceptar por falta de fundamento, exactamente como sucedía en el derecho romano. La fase *In lre* justamente empezaba con la notificación en las cuales el demandado tenía algunas posibilidades por ejemplo: la posibilidad de negando los hechos alegados por el actor en este caso se encontraba en la necesidad de reunir pruebas el demandado o bien el demandado tenía la facultad de alegar otros hechos que destruyeran el fundamento de la acción y pedir su inserción en el juicio o bien cumplir durante esta fase con la obligación reclamada que puede también darse actualmente en la audiencia preliminar. En la segunda fase que el código conoce como fase de juzgamiento es más parecida a la segunda fase del procedimiento Formulario Romano se llevaba a cabo de presencia ante el juez los hechos controvertidos deben ser comprobados igual que lo que sucede ahora en la segunda fase. El derecho escrito no requiere de pruebas igual principio se observa en el actual, justamente existe el principio jurídico: "*Iura Novit Curia*" es decir, el Tribunal conoce el derecho y lo que exige es el conocimiento de los hechos. Para la práctica jurídica esta materia probatoria



era de fundamental interés en cuanto al “Onus Probandi” la carga de la prueba, la regla negativa no hay necesidad de comprobar hechos negativos así fue producto de la Edad Media pero se sigue aplicando en el proceso general actual. Y lo mismo respecto a las pruebas que conocía el derecho romano y que se las debe actual en la fase de juzgamiento son exactamente iguales a las que se acepta ahora en el código de procedimiento, por ejemplo: en los testigos que era la prueba preferida en tiempos clásicos, el juramento, la declaración de una parte, el peritaje, la fama pública, la inspección judicial, las presunciones humanas o legales que más o menos eran las pruebas que se admitían en esta segunda fase de juzgamiento. De tal manera que yo encuentro que hay una gran similitud entre el Proceso Formulario Romano y el proceso civil actual que ha sido acogido en el nuevo código. Desde que leí el Código Orgánico General de Procesos, yo le vi el asunto positivamente porque le encuentro desde el punto de vista académico, una gran similitud con el Procedimiento Formulario Romano que es lo que enseñé a mis estudiantes de los primeros ciclos de tal manera que cuando mis estudiantes vayan a los últimos ciclos a estudiar el nuevo código ellos van a tener los antecedentes, van a tener un conocimiento rico en contenidos históricos, académicos, doctrinarios que son justamente el precedente del Código Orgánico General de Procesos, yo le veo muy positivamente el asunto e inclusive esto facilita el trabajo de los jueces porque ya en la fase preliminar es una fase de estudio del derecho como lo conocían los abogados romanos, es decir, el estudio de aquellos temas que debían interesar en la segunda fase, depurando aquellos temas que podían solamente consistir en asuntos que más bien tendían a demorar los juicios, dilatorias de los juicios, de tal manera que yo encuentro positivo este Código Orgánico General de Procesos, con ciertos temas que hay que irlos depurando un poquito en cuanto a la evacuación de pruebas, creo que con la ejecución, con el ejercicio del nuevo código van a ir configurándose de mejor forma”.



## **DOCTOR GEOVANNY SACASARI**

### **Profesor universitario**

### **Abogado en libre ejercicio profesional**

“En principio considero que la implementación de la oralidad en la tramitación de los juicios vinculados con todo lo que tiene que ver con el derecho privado, los trámites contenciosos administrativos y los trámites contencioso tributario fiscal son una respuesta a lo previsto en la Constitución del 2008 y evidentemente es una situación trascendente y muy importante para todo el país, no solamente para quienes ejercemos la profesión, para quienes estamos en la docencia, para quienes están en la administración de justicia sino fundamentalmente para los ciudadanos en general, creo que el tema de la oralidad además de cumplir con esta exigencia vendrá por fin a solventar una de las dificultades más grandes que nosotros hemos tenido en los últimos tiempos y que tiene relación con la demora innecesaria, incomprensible en la tramitación de toda clase de juicios, con lo que actualmente tenemos previsto en el Código Orgánico General de Procesos posiblemente las causas se resuelvan con más agilidad, simple y llanamente porque se han previsto máximo una o dos audiencias en las que sean debatidos los inconvenientes que existen entre las partes y resueltos de manera terminante, al menos eso acontecerá en la primera instancia, lo cual implica que los tiempos anteriores que se utilizaban para las mismas, es decir, para resolver las dificultades se van acortar considerablemente adicionalmente creo que el tema de la oralidad en la forma en las que está implementada actualmente en el Código Orgánico General de Procesos, es relevante porque de todas las maneras nos va permitir que por fin las personas que acudimos a la administración de Justicia, acudamos a la misma con total transparencia, que ya no lo hagamos con cosas vinculadas a la sorpresa, a la falsedad, a la mentira, a la poca responsabilidad a la ninguna transparencia al probar cualquier situación, nos va a obligar la implementación del Código Orgánico General de Procesos a que ahora



trabajemos en esa línea, es decir, con todas las cartas sobre la mesa debidamente presentadas para que ya no hayan este tipo de situaciones, para que tampoco el juzgador tenga mucho a donde orillarse con su criterio subjetivo, sino para que ahora a través de la participación de él permanente en cada una de las diligencias tenga la posibilidad de hacer de mejor manera administración de justicia que es el rol que se le encargó, tengo la esperanza de que esto funcione y de que efectivamente la administración de justicia sea un espacio al cual las partes quieran recurrir permanentemente sin temor de ninguna naturaleza, sabiendo y confiando de que allí van a encontrar una respuesta positiva a sus divergencias. También creo que para que funcione el sistema debemos poner empeño y aquí si básicamente los abogados y los administradores de justicia. Este nuevo sistema no demanda que se conozca exclusivamente cómo se tiene que proceder en las audiencias de una y otra parte, no se trata de que el juez sepa exclusivamente de cómo sacar delante de manera brillante a la audiencia se trata también de que el juez y los abogados debatamos y discutamos en las audiencias las cosas de fondo con el mayor de los conocimientos, con toda responsabilidad y de parte de los administradores de justicia conocimiento profundo para que puedan tomar una decisión inmediata porque como sabemos casi todo tiene que resolverse en la misma audiencia y solo por excepción puede suspenderse la misma por diez días para que eso ocurra, porque así tienen que ser las cosas, caso contrario hemos de fracasar. Tengo la firme convicción de que el mandato constitucional de implementar la oralidad en esta materia, será también para todos nosotros al fin nos va a permitir creer en la administración de justicia siempre y cuando se hagan las cosas bien de parte de la Función Judicial, caso contrario nos hemos de ver avocados a que el sistema fracase y de nuevo optar a otra opción. Creo que es la oportunidad idónea para que todos contribuyamos a que saquemos adelante este nuevo sistema”.



## CONCLUSIONES.

- ❖ El cambio de sistema basado en la oralidad, con el Código Orgánico General de Procesos, se convierte en un instrumento poderoso y eficaz para mejorar la administración de justicia, sin embargo, es necesario tener todo un aparataje que fortalezca y garantice el fin que es la justicia, este proceso debe estar asistido por políticas públicas, así como la importancia fundamental de la preparación de los administradores de justicia, abogados, auxiliares, estudiantes de derecho, un cambio de cultura por parte de la sociedad, una profesionalización del derecho, etc.
- ❖ Entiendo que a medida de que el Código Orgánico General de Procesos entre en vigencia de manera total, se irán presentando una serie de inconvenientes, considerando que el derecho es perfectible, los organismos competentes, así como quienes formamos parte de la administración de justicia, debemos comprometernos para encontrar soluciones.
- ❖ Considero que la profesión de la abogacía, se percibirá de una forma más transparente, evitando que ciertos abogados se aprovechen de su condición para perjudicar a los usuarios, haciéndoles creer en falsas expectativas, presentando testigos falsos. Se busca erradicar las sorpresas, los interrogatorios hechos a conveniencia por escrito, es un gran paso, es el momento de dignificar a la profesión y luchar por una sociedad más justa, que la ciudadanía no vea al juez como un ente ajeno, que se humanice la administración de justicia y me parece acertado que la parte procesal pueda expresarse libremente y exigir sus derechos. Que la oralidad sea el camino que nos permita progresar y mejorar la administración de Justicia.



- ❖ Lo óptimo sería evitar parametrizar a la administración de justicia, no podemos adquirir prácticas perjudiciales que deshumanizan a la misma, por ejemplo, que se establezcan un número de causas determinadas que el Juez deba resolver, que se establezca un tiempo límite para expresarse, porque puede ser que, dependiendo de cada caso concreto se requiera más tiempo para que el Juez comprenda de mejor manera cualquier situación que no esté del todo clara. A lo que se debe tender es a que existan sentencias profesionales y justas, garantizando la neutralidad del Juez, fortaleciendo la independencia judicial, que no existan presiones de ningún tipo al momento de resolver y así obtener calidad de sentencias más que cantidad de sentencias.
- ❖ Es acertada la unificación de las materias en el Código Orgánico General de Procesos porque se evita la dispersión de vías procesales y el excesivo número de normas legales que dificultaban la administración de justicia y atentaban contra la seguridad jurídica. Sin embargo, las materias Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, posteriormente, pueden ser objeto de reformas, o según la necesidad se puede proyectar un código de procedimiento que regule estas materias que son de especial consideración, puesto que tienen sus propios principios y procedimientos.
- ❖ Los resultados no se verán inmediatamente, sinceramente espero que este sistema prospere satisfactoriamente y no colapse por el gran número de causas que ya están acumuladas y además las nuevas que ingresarán bajo este sistema; debemos poner nuestro mayor esfuerzo para que este sistema progrese.
- ❖ La oralidad debe permitirnos un mayor acercamiento con la administración de justicia, que no debe ser privilegio de pocos. Positivamente el Código Orgánico General de Procesos permite que las partes procesales se involucren e incluso se expresen en la audiencia y se publicite la misma.



- ❖ El hecho de que se concentren las actuaciones y se reduzcan las notificaciones, citaciones y otras diligencias, permite la relación directa entre el juez y las partes, lo que conduce a profundizar en cualquier aspecto que suscite duda. Me parece efectivo que se tramite un proceso debidamente saneado y no tengamos que esperar a la sentencia para conocer estos detalles, el impulso que se da a la misma es un avance que no podemos negar. Se sana el proceso, se reducen incidentes y los que se proponen se resuelven en la misma audiencia. Se fortalece el diálogo y se logran más acuerdos.
- ❖ Personalmente considero que las autoridades están poniendo todo el empeño, mediante cursos de capacitación, charlas, material de información y socialización, entre otros, para que este código cumpla con las expectativas.
- ❖ Debemos tener mucho cuidado y evitar caer en prácticas perjudiciales como hablar mucho y no decir nada, ofender a la otra parte procesal con actitudes vulgares y tonos de voz que no van acorde la situación; de allí la necesidad de la preparación técnica del abogado en argumentación jurídica. Trascendental en la formación del abogado la parte moral observando siempre los principios de lealtad y verdad procesal.
- ❖ Es de suma importancia la formación adecuada de los estudiantes de derecho en las universidades, que superemos ese modelo tradicional. Acertadamente en nuestra Facultad se han modificado las mallas curriculares de acuerdo al nuevo paradigma
- ❖ La sociedad ecuatoriana enfrenta un reto titánico, depende de cada uno de nosotros contribuir con nuestro mayor esfuerzo para que este sistema basado en la oralidad prospere satisfactoriamente.





## BIBLIOGRAFÍA:

### LEGISLACIÓN:

- ✓ CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008.
- ✓ CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS.
- ✓ LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL.

### TEXTOS:

- ✓ ABARCA Galeas, Luis Humberto (2006) Fundamentos constitucionales del sistema procesal oral ecuatoriano.
- ✓ BACA Bartelotti, Washington (1994). Hacia la oralidad en la administración de justicia en el Ecuador, Quito: Universitaria.
- ✓ CAPPELLETTI, Mauro. Proceso, ideologías, sociedad. Trad. Santiago Sentis Melendo e Tomás Banzhaf. Buenos Aires: EJE, 1974, esp. p. 10, 333 e 344;
- ✓ CHIOVENDA, Giuseppe. “Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra”. Saggi di diritto processuale civile. Milano: Giuffrè, 1993, vol. II, esp. p. 11 e ss.
- ✓ Cruz Arenhart, Sérgio. (2008). La oralidad en la justicia. El caso brasileño. *Ius et Praxis*.
- ✓ Enciclopedia Larousse, Editorial Palnet, España, 2004
- ✓ GUILLEN, Victor Fairen. El tribunal de las aguas de Valencia y su proceso (oralidad, concentración, rapidez, economía). Valencia: Paperback, 1975, passim.
- ✓ MORALES Álvarez Jorge, Lecciones de Derecho Civil Romano. (2011)
- ✓ TROCKER, Processo civile e costituzione. Milano: Giuffrè, 1974, p. 47.
- ✓ VAZ, Alexandre Mário Pessoa. Direito processual civil – do antigo ao novo código. 2a ed., Coimbra: Almedina, 2002, p. 152 y ss.

### REVISTAS JURÍDICAS:

- ✓ Revista Jurídica “Justicia para todos” del Consejo de la Judicatura. Quito, Editogran S.A 2015 N°6, N°7 y N°8.
- ✓ Revista científica: [www.redalyc.org](http://www.redalyc.org).